

CAPÍTULO II

GESTIÓN EN LOS ÓRGANOS Y ENTES DEL PODER PÚBLICO

CONTROL FISCAL

GESTIÓN EN LOS ÓRGANOS Y ENTES DEL PODER PÚBLICO

VISIÓN CRÍTICA

A la Contraloría General de la República le corresponde ejercer el control, la vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, así como de las operaciones y de la gestión de los órganos y entes, para velar por la buena ejecución de su misión institucional y el correcto uso del patrimonio público, además de establecer las responsabilidades por la comisión de hechos irregulares vinculados con la administración de los recursos públicos, contribuir en la lucha contra la corrupción y la impunidad, para coadyuvar de esta manera a que el Estado logre sus fines consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Las actuaciones fiscales fueron practicadas en los órganos y entes que incluyeron los sectores: Electricidad; Macroeconomía y Finanzas; Alimentación; Industria; Seguridad Social; Cultura; Administración y Gobierno; Vivienda; Edificaciones y Servicios Conexos; y Planificación y Seguridad Ciudadana, particularmente en las áreas de contrataciones públicas, organización y funcionamiento. Los objetivos estuvieron orientados a verificar la legalidad, exactitud, veracidad y sinceridad de los procesos en la selección de contratistas para la adquisición de bienes y contratación de servicios; a evaluar los mecanismos de control interno establecidos; el proceso de importación de mercancías; y el cumplimiento de las disposiciones legales y sublegales que regularon el proceso para la certificación de la Pequeña y Mediana Industria (PYMI), emitida por el Instituto Nacional de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI) a las industrias y cooperativas de producción.

En ese sentido, la acción de control desplegada durante el año 2013 permitió observar que persisten fallas y deficiencias en la gestión administrativa, tales como: carencia de un sistema de control interno eficiente, prescindencia de los procedimientos previstos para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, ausencia de control por parte de los responsables que administran y manejan fondos públicos, así como deficiencia en la aplicación del plan de acciones correctivas por las máximas autoridades de los órganos y entes del sector público evaluados, entre otras.

Esta constancia en las fallas y debilidades se traduce en una inacción que frena los esfuerzos de transformación del Estado, por lo que queda en manos de las máximas autoridades de los órganos y entes la aplicación oportuna de los correctivos que garanticen una sana administración, de modo que se alcancen los objetivos institucionales y se haga efectiva la gestión para lograr el impacto deseado en la población y cumplir los fines del Estado.

ACTUACIONES ESPECIALES

Este máximo órgano de control realizó 3 actuaciones especiales, practicadas en: el Complejo García Hermanos, S.A. “Gaisa”- Frigoríficos Ordaz, S.A. (Friosa); el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de las Universidades Nacionales y Experimentales y la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (Fundeeh). Es importante destacar que la correspondiente al Fondo de Jubilaciones es el resultado de 12 informes reflejados en el anexo del libro de Actuaciones.

COMPLEJO GARCÍA HERMANOS, S.A. “GAISA” -FRIGORÍFICOS ORDAZ, S.A. (FRIOSA)

Aspectos preliminares

Origen de la auditoría

La actuación de control, cuyos resultados se exponen en el presente Informe, se realizó de conformidad con lo previsto en los artículos 5 y 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial N° 6.013 Extraordinario de fecha 23-12-2010 y 10 de su Reglamento, Gaceta Oficial N° 39.240 de fecha 12-08-2009. Su ejecución fue decidida luego de evaluar la solicitud formulada por la ciudadana Ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, mediante el Oficio S/N de fecha 29-05-2013.

Alcance

La actuación se circunscribió a la inspección fiscal *in situ* de los bienes muebles e inmuebles de la empresa Frigoríficos Ordaz, S.A. (en lo sucesivo FRIOSA), perteneciente al Complejo García Hermanos, S.A., conformado por las empresas FRIOSA, Inversiones Koma, S.A. y Delicatesses la Fuente,

S.A., y ubicado en Puerto Ordaz, estado Bolívar, especialmente en las áreas y aspectos siguientes:

En lo relativo a los bienes muebles (máquinas, equipos de computación y vehículos) del referido Complejo, la comisión de funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) seleccionó una muestra integrada por 71 máquinas y equipos de computación; de un total de 190 unidades móviles, se consideraron 36 vehículos registrados en el Inventario de Activos Fijos a la fecha del 31-07-2013, lo cual equivale a 18,94%. El criterio de selección fue el de “reciente adquisición” y la “vida útil del activo”, a los fines de determinar sus condiciones operativas.

Respecto a los bienes inmuebles, la inspección fiscal se limitó al Almacén de mercancía seca y refrigerada; a la sede denominada “La Cartonera”; y a la Cocina Central y el Centro Panadero, ubicados en la sede central de FRIOSA, en Puerto Ordaz, estado Bolívar.

En el aspecto administrativo y financiero, la actuación fiscal se concentró en el análisis de los reportes de Cuentas por Cobrar reflejadas a la fecha del 30-06-2013, producto de las ventas de alimentos realizada por FRIOSA a entes públicos descentralizados funcionalmente y empresas privadas.

Objetivos generales y específicos

El objetivo general es verificar la administración de los Bienes y las Cuentas por Cobrar por parte de la Junta Administradora del Complejo García Hermanos, S.A. (GAISA), a los fines de determinar la adecuada salvaguarda de los activos y las gestiones de cobranza.

Los objetivos específicos de la auditoría son:

a) Determinar las condiciones operativas de los bienes muebles y las condiciones físicas de los bienes inmuebles, y si sobre los mismos se efectuaron programas sistemáticos de mantenimiento y adecuados controles para su preservación y salvaguarda.

b) Determinar la situación de las Cuentas por Cobrar y si se efectuaron eficaces gestiones de cobro.

Enfoque

En la actuación se ha tenido particularmente en consideración que el Ejecutivo Nacional mediante el Decreto N° 7.703 de fecha 05-10-2010 (Gaceta Oficial N° 39.524 de fecha 05-10-2010), artículo 1, procedió a “la

adquisición forzosa de los bienes inmuebles, muebles, bienes de consumo, depósitos, transporte y demás bienhechurías, presuntamente propiedad del Complejo García Hermanos, S.A. [GAISA] (...)”. En ese orden, también se ha tomado en cuenta, que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante Sentencia N° 2011-0141, acordó una medida cautelar anticipada a favor de la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Comercio (MPPC), para que procediera a la ocupación, posesión y uso de todos los citados bienes muebles e inmuebles presuntamente propiedad del referido Complejo.

Asimismo, el MPPC, en virtud de la referida Sentencia, designó a la Junta Administradora *ad hoc* del Complejo, confiriéndole “las más amplias funciones y atribuciones de administración, organización y control de las empresas, con el fin de garantizar las actividades socio-productivas, financieras, laborales, industriales, comerciales y jurídicas, hasta que finalice el proceso de adquisición forzosa”.

La expropiación decidida por el Ejecutivo Nacional permite alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, orientado hacia importantes áreas estratégicas como la distribución de alimentos. En ese sentido, mientras se concluye el proceso de expropiación, los bienes permanecen bajo la administración del Estado, lo cual permite desempeñar los fines superiores que persigue, pues responden a un interés social por causa de utilidad pública, por encima del interés individual. Las empresas privadas que se encuentran en estos procesos, no pueden menos que considerarse, desde el momento en que su administración es asumida por el Estado, sino como una empresa pública, sometida a los controles, regulaciones y normativas aplicables a las empresas del Estado.

Métodos, procedimientos y técnicas

Para la consecución de los objetivos propuestos fueron consideradas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de control fiscal, así como los métodos, técnicas y prácticas de aceptación general en este tipo de actuaciones de control, a saber:

a) Revisión de la documentación suministrada por la empresa FRIO-SA, relacionada con la constitución, estructura organizativa y estado actual de los bienes muebles e inmuebles de la empresa; inventario de activos con fecha de corte al 31-07-2013; estados financieros correspondientes

al ejercicio terminado el 31-01-2012, y comunicaciones dirigidas a entes descentralizados con fines empresariales: CVG Aluminios del Caroní, S.A. (ALCASA), CVG Bauxilum, S.A., Corporación Eléctrica Nacional S.A. (CORPOELEC) y Orinoco Iron, S.A., referidas a las gestiones de cobranzas de las cuentas por cobrar, practicadas por FRIOSSA, durante el año 2012 y el primer semestre del año 2013.

b) Elaboración de cédulas de análisis de cada uno de los documentos inherentes al inventario de bienes muebles (equipos de computación, máquinas y vehículos); relación de cuentas pendientes por cobrar a los clientes pertenecientes a los sectores público y privado con mayores plazos de antigüedades y de vencimiento.

c) Elaboración de cédulas sumarias diseñadas para el cotejo de la data entre los distintos documentos, a los fines de hacer el respectivo seguimiento de los bienes hasta su ubicación física.

d) Selección de muestras tomando en consideración criterios tales como: el tamaño de la población objeto de estudio y su ubicación geográfica, la fecha y el precio de adquisición, o mayor relevancia material y vida útil.

e) Levantamiento de Actas Fiscales de fechas 04-10-2013 y 11-10-2013, suscritas por funcionarios de la CGR en presencia de la Junta Administradora de FRIOSSA, para dejar constancia de las situaciones y condiciones objetivas verificadas.

f) Levantamiento fotográfico de las instalaciones donde funcionan los almacenes de mercancía seca y refrigerada; Centro Panadero, Cocina Central y depósito “La Cartonera”; situados en la sede central de FRIOSSA, en la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar, como resultado de las inspecciones *in situ* practicadas en fecha 02-10-2013.

Limitaciones

a) En el proceso de la actuación de control se suscitaron situaciones que incidieron en el desarrollo de las actividades y en el cumplimiento de los objetivos propuestos, toda vez que a la fecha de la actuación 02-10-2013, la empresa no había culminado el proceso de transferencia al Estado, de los derechos de propiedad de los activos y bienhechurías presuntamente pertenecientes al Complejo García Hermanos, S.A. (GAISA). Adicionalmente, la empresa no cuenta con un Manual de Or-

ganización como instrumento normativo que regule la delimitación de sus funciones, competencias y atribuciones, a los fines de establecer la delimitación de las distintas dependencias que conforman la empresa FRIOSA; y los distintos manuales de normas y procedimientos que deben regir los diferentes procesos productivos y de apoyo están en proceso de elaboración.

b) El Reglamento Interno, elaborado en fecha 22-12-2011, no había sido aprobado por los miembros de la Junta Administradora *ad hoc* para la fecha de la actuación. Esta se concentró en regular el funcionamiento de las reuniones de la Junta Administradora *ad hoc* del referido Complejo y al régimen de sus discusiones, y no a los actos sobre la administración, organización y control de las empresas y sus activos.

c) No se logró obtener información acerca de las efectivas condiciones físicas y de mantenimiento de los almacenes de mercancía seca y refrigerada, así como de los vehículos, para el momento de promulgación del Decreto Presidencial N° 7.703 de fecha 05-10-2010, lo que habría permitido determinar comparativamente la situación anterior a la fecha del 05-10-2010, en relación con la fecha de la actuación de control, 02-10-2013.

Características generales

Características generales del objeto evaluado

En fecha 05-10-2010, el Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto Presidencial N° 7.703 (Gaceta Oficial N° 39.524 de fecha 05-10-2010), ordenó la adquisición forzosa de los bienes de consumo, depósitos, transporte y demás bienhechurías presuntamente propiedad del Complejo García Hermanos, S.A. (GAISA), para garantizar a las familias venezolanas el acceso a precios justos de los alimentos y bienes para su bienestar. El referido complejo comprende las empresas Frigoríficos Ordaz, S.A. (FRIOSA), Inversiones Koma, S.A. y Delicatesses las Fuentes, S.A., las cuales sirven al funcionamiento de los establecimientos de suministros a comedores requeridos para la ejecución de la obra, “Desarrollo de la Red de Distribución Socialista de Productos de Primera Necesidad”, destinadas a la correcta distribución de alimentos al pueblo venezolano, así como a la promoción del desarrollo endógeno y a la generación de fuentes de empleo.

Marco Regulatorio

La normativa que en general sirvió de marco para la realización de los análisis fue, de manera enunciativa, la siguiente:

a) Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial N° 6.013 Extraordinario de fecha 23-12-2010. Reglamento de la Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, Gaceta Oficial N° 39.240 de fecha 12-08-2009.

b) Ley Orgánica de Bienes Públicos (Gaceta Oficial N° 39.945 de fecha 15-06-2012).

c) Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular (Gaceta Oficial N° 6.011 Extraordinario de fecha 21-12-2010).

d) Ley de Conservación y Mantenimiento de los Bienes Públicos (Gaceta Oficial N° 38.756 de fecha 28-08-2007, vigente hasta el 14-06-2012).

e) Ley de Expropiaciones por Causa de Utilidad Pública o Social (Gaceta Oficial N° 37.475 de fecha 01-07-2002).

f) Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oficial N° 39.240 de fecha 12-08-2009).

g) Código Civil de Venezuela (Gaceta Oficial N° 2.990 Extraordinario de fecha 26-07-82).

h) Código de Comercio (Gaceta Oficial N° 475 de fecha 21-12-55).

i) Decreto N° 7.703 de fecha 05-10-2010 (Gaceta Oficial N° 39.524 de fecha 05-10-2010), referido a la adquisición forzosa del Complejo García Hermanos, S.A. (GAISA), el cual comprende a la empresa FRIOSA.

j) Resolución N° DM/118 de fecha 01-12-2011 (Gaceta Oficial N° 39.816 de fecha 08-12-2011), a través de la cual se designó a los miembros de la Junta Administradora *ad hoc* del Complejo García Hermanos, S.A.

k) Providencia Administrativa N° 007-2013 de fecha 12-03-2013, dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos (Gaceta Oficial N° 40.128 de fecha 13-03-2013), vinculada con el deber de los órganos

y entes que conforman el Sector Público en general de hacer constar el mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático de los bienes públicos.

Observaciones derivadas del análisis

Un total de 65 bienes que totalizan el monto de Bs. 705.558,71, adquiridos por FRIOSA durante el período comprendido desde el año 2012 hasta el primer semestre de 2013, no fueron registrados en el Inventario de Bienes generado por el Sistema de Aplicaciones y Productos (SAP), con corte al mes de julio¹; estas omisiones obedecen a debilidades en el sistema de control interno respecto al oportuno registro contable de las adquisiciones, lo cual afecta la exactitud, veracidad y confiabilidad de la contabilidad financiera del conglomerado.

No se aplican procedimientos de control perceptivo a los bienes muebles al momento de su recepción para dejar constancia mediante Acta, o en documento similar, de que el precio, la calidad y la cantidad se correspondan con las especificaciones aprobadas en las órdenes de compra, de servicios y/o contratos, para proceder posteriormente al registro formal en la contabilidad patrimonial, y en el libro auxiliar de bienes (inventario) del SAP.

Del Inventario de Bienes pertenecientes a FRIOSA, sede central, se extrajo una muestra constituida por 71 bienes muebles, equipos de computación y máquinas, por un monto total de Bs. 986.320,34, y que fue seleccionada considerando como criterio los activos de más reciente adquisición y su vida útil. En ese sentido, se determinó:

a) La cantidad de 41 activos, equivalentes al 57,74%, por Bs. 153.457,30, no fueron ubicados físicamente².

b) No existe un registro permanente de control de entradas, salidas y/o movimiento de los bienes muebles, con lo cual no se garantizan las medidas pertinentes y necesarias para resguardar y custodiar los activos de FRIOSA en términos de eficiencia y responsabilidad.

1 El artículo 32 de la Ley Orgánica de Bienes Públicos establece que “Las unidades administrativas que en cada ente u órgano del Sector Público administren Bienes Públicos, deberán llevar registros de los mismos (...)”

2 Es de significar que en la administración de los bienes y recursos públicos, los funcionarios y empleados públicos se registrarán por los principios, entre otros, de: transparencia, eficiencia, eficacia y responsabilidad, según lo establece el artículo 6 de la Ley Contra la Corrupción. De igual manera, el artículo 17 ejusdem señala que “Los funcionarios y empleados públicos deberán administrar los bienes y recursos públicos con criterios de racionalidad y eficiencia (...)”

De la inspección realizada en fecha 02-10-2013 a una muestra de la flota de vehículos de FRIOSA, sede central, integrada por 36 unidades móviles de un total de 190, que representan 18,94 %, se observaron los particulares siguientes:

a) No se logró evaluar la operatividad de 5 unidades móviles al no ubicarse 4 de ellas en las instalaciones, debido a que se encontraban en actividades laborales, y 1 siniestrada fuera de las instalaciones de la empresa, cuya situación la Comisión de la CGR no logró constatar.

b) Un total de 2 unidades móviles se encontraban asignadas al proyecto de Comedor del Guri; 2 al proyecto de Comedor Macagua; 1 al proyecto Comedor de la empresa ALCASA; 1 al proyecto Comedor de la empresa CVG Bauxilum, S.A., en condición inoperativa; 1 al proyecto comedor Orinoco Iron, S.A.; 1 al centro panadero central de las instalaciones de FRIOSA; 1 siniestrada dentro de las instalaciones, y 4 inoperativas. En relación con los vehículos en condición de inoperativos, no se observaron gestiones por parte de las autoridades de FRIOSA tendentes a reparar o recuperar la operatividad de los mismos.

c) Se encontraron operativos 18 vehículos.

d) En la sede denominada “La Cartonera” se observaron vehículos (camiones, carros, *trailers* y camionetas cava) en desuso y/o desincorporados de la flota vehicular, ubicados de forma desordenada.

Un total de 2 unidades móviles no disponen de pólizas de seguros, referidas a los vehículos: Camioneta marca Mazda, año 2009 color blanco, serial N° 9FJUN84G490212798, placa N° A42AA1F y Camión Cava, marca Chevrolet, año 2008 color blanco, serial N° 8ZCFN1Y18V4011994, placa N° A52AN2G. En ese mismo orden:

a) Aun cuando FRIOSA realizó la declaración del siniestro ocurrido en el vehículo camioneta Toyota Hilux, color plata año 2009 identificada con la placa A48AE5F, la empresa aseguradora Seguros Horizonte, S.A. “rechazó el pago del siniestro alegando imprudencia del conductor; el cual infringió los artículos 152, 153, 154, 238 y 254 numeral 2, literal b del Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre (...)”. Lo cual conllevó a que la empresa Seguros Horizonte, S.A. rechazara el siniestro basándose en las condiciones particulares de la Póliza de Seguro de Casco de Vehículos Terrestres, cobertura amplia.

b) El vehículo tipo camioneta, modelo Mazda, año 2009, placa N° A42AAIF, se encontró en el taller ubicado en sede central de FRIOSA, desprovisto del motor.

c) La cantidad de 7 vehículos, modelos Ford Explorer Limited, Toyota Pickup, Chevrolet Pickup Luv, Hummer, Ford Mustang, Honda Civic y Terios, años: 2010, 2009, 2001, 2005, 2005, 2007 y 2008, respectivamente, al momento de la adquisición forzosa, fueron retirados por los antiguos dueños del Complejo García Hermanos, S.A., sin observarse documento alguno que respalde la salida del activo de la empresa.

d) Un total de 7 vehículos que se detallan en el cuadro N° 16, fueron otorgados en calidad de comodato o préstamo a la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (LA CASA); sin embargo, no se observaron ni fueron suministrados los documentos donde conste la asignación de los mismos al Ente en referencia, especificando los términos y condiciones del préstamo en torno al tiempo, y uso determinado, persona responsable y devolución a FRIOSA, tal como lo establece el artículo 1.724 del Código Civil, cuya norma prevé que el Comodato o Préstamo de Uso es un contrato por el cual una de las partes entrega a la otra gratuitamente una cosa, para que se sirva de ella, por el tiempo, o para uso determinado, con cargo de restituir la misma cosa.

CUADRO N° 16
RELACIÓN DE VEHÍCULOS EN CONDICIÓN
DE COMODATO SIN CONTAR CON CONTRATO

TIPO DE UNIDAD	AÑO	COLOR	SERIAL N°	PLACA N°
Camión Cava Iveco	2006	Blanco	8XVC658S06V304394	80N-DAU
Camión Cava Chevrolet	2008	Blanco	8ZCFNJ1Y18V4011994	A52AN2G
Camión Cava Chevrolet	1997	Blanco	8ZCM7H1J3W317572	37E-BAC
Camión Cava Mercedes	2007	Blanco	9VD6881567V517181	20V-MBI
Camión Cava Chevrolet	2001	Blanco	9GDNPR71L1B502312	53T-MAS
Camión Cava Chevrolet	2001	Blanco	9GDNPR71L1B501802	08U-FAH
Camión Cava Chevrolet	2002	Blanco	9GDNPR71L2B558104	80Y-FAH

Fuente: Cuadro informativo suministrado por la Consultoría Jurídica de FRIOSA.

e) Un total de 6 vehículos pertenecientes a la empresa FRIOSA descritos en el cuadro N° 17, a la fecha de la actuación de control, se encuentran bajo posesión de algunos trabajadores por convenio, en virtud de que con anterioridad al proceso expropiatorio los antiguos patronos y accionistas de la empresa, objeto de la medida expropiatoria, convinieron en transferirles la propiedad de los mismos, dado que los trabajadores habrían cancelado un monto por la adquisición de los referidos vehículos. No obstante, este organismo contralor no evidenció soporte documental relativo al convenio de referencia³.

CUADRO N° 17
VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA FRIOSA
REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BIENES
MUEBLES, SIN DOCUMENTO DE CONVENIO

TIPO DE UNIDAD	N° CÓDIGO CONTABLE	AÑO DE REGISTRO CONTABLE
Ford Fiesta	40178	2008
Eco Sport	40184	2007
Ford Fiesta	40190	2009
Ford Fiesta	40198	2009
Ford Fiesta	40204	2010
Cherokee Sport	40185	2007

Fuente: Información Suministrada por la Coordinación de Bienes a través del registro SAP.

Las bases de la estructura metálica de los anaqueles están parcialmente deterioradas, el techo del almacén presenta filtraciones y los extractores de aire están inoperativos⁴. Igualmente, se constató:

- a) Presencia de aguas estancadas en los pasillos de los anaqueles.
- b) El sistema de iluminación del almacén proporciona una intensidad de iluminación poco adecuada.

3 Sobre los particulares descritos en los párrafos anteriores del presente informe, se reitera lo señalado en el artículo 3 de las Resolución N° DM/N° 118 de fecha 08-12-2011, la cual establece que la Junta Administradora *ad hoc* del Complejo García Hermanos, S.A., deberá brindar las garantías necesarias para que las medidas de custodia, conservación y administración del Complejo y sus correspondientes activos, no menoscaben ni lesionen todas aquellas medidas que hayan derivado de procedimientos administrativos y judiciales, practicados por los órganos y entes de la Administración Pública Nacional.

4 Al respecto, el artículo 69 de la Ley Orgánica de Bienes Públicos establece que los Bienes Públicos deberán ser preservados en condiciones de uso y conservación. A tal fin y de acuerdo con su naturaleza, deberán ser objeto de mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático.

c) El baño de caballeros ubicado en el área de almacenamiento está parcialmente provisto de servicios básicos, mantenimiento y de recursos para la higiene personal.

d) Presencia de desechos sólidos (cajas) almacenados en los pasillos del depósito.

e) Las instalaciones del citado almacén carecen de sistemas de detección de incendio.

f) Los extintores del sistema contra fuego no son suficientes, y a los existentes no se les da el mantenimiento adecuado, apreciándose además que la manguera del sistema contra incendio estaba desconectada.

En resumen, la empresa carece de planes y programas de mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático sobre la totalidad de los bienes muebles e inmuebles del Complejo, y cuando ocurren las fallas no son atendidas y corregidas con prontitud. En su defecto, solo cuenta con los cronogramas de mantenimiento correspondientes a la Cocina Central y al Centro Panadero, destacándose las actividades de mantenimiento a la campana de extracción, planchas, cava de conservación, amasadoras, pero que no satisfacen en su totalidad lo ya señalado en el artículo 3 de la Resolución N° DM/N° 118 de fecha 08-12-2011. Esta situación vulnera las normas que regulan las buenas prácticas de almacenamiento de alimentos para el consumo humano, y coloca en condiciones de riesgo la adecuada conservación y salvaguarda de los activos, específicamente el almacén de mercancía seca.

De 14 cavas de refrigeración inspeccionadas en fecha 03-10-2013, 6 se encontraron inoperativas. Además:

a) Las máquinas de la Sala N° 1 que alimentan a las cavas N° 4, 5, 6, 7 y 8 requieren cambio de la bomba de aceite; limpieza y mantenimiento general, así como gas refrigerante, a su vez esta Sala requiere el mantenimiento y/o reemplazo del cielo raso.

b) Las máquinas de la Sala N° 2 que alimentan las cavas N° 11, 12, 13 y 14, el túnel de congelamiento y la sala de procesamiento de pollo, representativas de 37% del área de almacenamiento en frío de la sede central, tienen 2 de los 4 compresores dañados.

c) No se hace mantenimiento básico a las paredes y pisos del área de conservación del almacén en frío. La nevera-vitrina de exposición de alimentos se encuentra en estado avanzado de deterioro.

d) La cava N° 7 presenta problemas con los difusores, lo que no permite que cumpla su función de refrigerar.

e) El sistema automático de apertura y cerrado de la puerta de la cava N° 5 se encuentra inoperativo.

f) Las balanzas romanas ubicadas en el área de conservación se encuentran inoperativas⁵.

En la inspección realizada en fecha 08-10-2013 a la Cocina Central de FRIOSA, se verificó la existencia de 2 hornos giratorios para la elaboración de alimentos, de los cuales uno se encontraba inoperativo. Asimismo, en la inspección practicada en fecha 07-10-2013 al Centro Panadero, se observó:

a) De las 2 cavas de conservación, una está operando al 30% aproximadamente, mientras que la otra se encontró operando cerca de 50% de su capacidad, y además no se les presta mantenimiento.

b) De los 4 hornos que posee el Centro Panadero, 2 giratorios y 2 de pastelería de tres pisos, se constató que estos últimos estaban inoperativos⁶.

5 Sobre los particulares descritos, el artículo 69 de la Ley Orgánica de Bienes Públicos establece que los Bienes Públicos deberán ser preservados en condiciones de uso y conservación. A tal fin y de acuerdo con su naturaleza, deberán ser objeto de mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático. En concordancia con lo indicado en el artículo 1 de la Providencia Administrativa N° 007-2013 dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos, cuya norma señala que: “Por cuanto los Bienes Públicos deben ser preservados en condiciones apropiadas de uso y conservación, las unidades encargadas de la administración y custodia de bienes dentro de los órganos y entes que conforman el Sector Público en general, deberán hacer constar el debido mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático que le sea brindado a los Bienes Públicos propiedad de éstos o que no siendo de su propiedad le hayan sido adscritos o asignados o se encuentren bajo su custodia”. De igual manera, el artículo 3, aparte cuarto de la Resolución N° DM/ 118 de fecha 08-12-2011, antes citada, y el artículo 26 de las Normas sobre Buenas Prácticas de Fabricación, Almacenamiento y Transporte de Alimentos para el consumo humano establecen que el establecimiento debe disponer de recipientes, áreas e instalaciones apropiadas para la recolección y almacenamiento de los residuos.

6 En relación con los equipos inoperativos antes señalados, el artículo 30 de las Normas sobre Buenas Prácticas de Fabricación, Almacenamiento y Transporte de Alimentos para el Consumo Humano establece que los equipos y utensilios del establecimiento deben estar acordes con el tipo de alimento a elaborar, al proceso productivo y a la máxima capacidad de producción prevista. Los mismos deben entre otros aspectos, estar instalados y mantenidos de manera que desempeñen adecuadamente el uso previsto.

c) Las maquinarias inoperativas se encuentran en el mismo sitio que las maquinarias operativas.

d) Se observó poca organización en el almacenamiento de la materia prima del Centro Panadero.

En el área de entrada principal de la Cocina Central y el Centro Panadero se verificó, específicamente en el Almacén N° 1, la presencia de bienes de FRIOSA en total abandono y/o desincorporados, sin que conste la existencia de registros documentales o físicos de control de los bienes allí almacenados.

En resumen, las fallas en la corrección oportuna y en el mantenimiento de los equipos limitan la operatividad de los mismos, lo que no asegura la continuidad del proceso productivo de manera óptima.

De la revisión efectuada a los reportes de Cuentas por Cobrar a la fecha del 30-06-2013, suministrados por la Coordinación de Cuentas por Cobrar, correspondientes a los clientes pertenecientes a empresas básicas del sector público por concepto de venta de alimentos servidos para comedores de las mismas, se observó un total de Bs. 70.368.852,79, y se verificó de acuerdo con la fechas de las facturas, la existencia de valores por cobrar con vencimientos que superan los plazos de los créditos otorgados, oscilando entre 85 días y 2.204 días, de donde se deduce que las acciones de cobro no han sido razonablemente efectivas, oportunas y suficientemente diligentes, lo cual eventualmente pudiera afectar las acciones e intereses de la empresa.

De igual manera, también se observó, conforme a las cláusulas Novena de los contratos suscritos con las empresas ALCASA y CVG Bauxilum; Octava de CORPOELEC (Guri y Macagua); y Cuadragésima Octava de Orinoco Iron, que el plazo de vencimiento para el pago de los servicios de suministros es de 30 días con las dos primeras empresas; 45 días para la empresa CORPOELEC; y 30 días para Orinoco Iron, contemplando cada Cláusula en términos generales, lo siguiente: la contratista facturará semanalmente el servicio de comida, el cual será pagado a los 30 o 45 días, según cada caso, previa presentación de valuación de servicio prestado con los soportes, informe de relación de comidas servidas en los comedores y original y copia de las facturas comerciales.

De la revisión efectuada a las acciones emprendidas a través de la División de Administración de Comedores de FRIOSA, dirigidas a los deudores para el cobro de tales acreencias, solo se evidenciaron las gestiones de cobranza realizadas mediante 10 comunicaciones, las cuales fueron iniciadas en fecha 17-05-2012 hasta la fecha 09-08-2013, aunque el inicio de la gestión de la Junta Administradora *ad hoc* actual comenzó en fecha 08-12-2011.

Del reporte de Cuentas por Cobrar indicado anteriormente, se observó que existen facturas emitidas a otros entes y organismos públicos; compañías que conforman el Complejo GAISA (Inversiones Koma, S.A. y Delicatesses la Fuente, S.A.); empresas privadas y accionistas de FRIOSA, con vencimientos que varían entre 210 y 396 días; 120 y 635 días; 60 y 1.825 días, así como entre 1.030 y 1.395, aproximadamente, por la cantidad total de Bs. 323.798,15; 4.462.759,59; 2.402.484,94 y 144.636.504,55, respectivamente, por lo que al igual que lo antes expuesto, tampoco han sido efectivas y oportunas las acciones de cobro, sin existir además evidencias documentales donde consten que las mismas hayan sido emprendidas por la dependencia competente, lo cual restringe la disponibilidad de flujo de efectivo para cubrir los gastos operativos y de inversión, pudiendo también afectar las acciones e intereses de la empresa⁷. Asimismo, se determinó que no se contempló formalmente el plazo de vencimiento del crédito para el pago de las obligaciones contraídas por los citados clientes.

Mediante la revisión al inventario con corte a la fecha del 01-10-2013, suministrado a este organismo Contralor (información obtenida de la Coordinación de Bienes), se determinó que durante el traslado a FRIOSA de activos que se encontraban asignados a Inversiones Koma, S.A. faltaron 89 bienes de un total de 387, equivalentes a 22,99%.

Consideraciones finales

Conclusión

Un total de 65 bienes (máquinas y equipos de computación) que totalizan Bs. 705.558,71, no fueron registrados en el inventario de bienes

⁷ Al respecto, el artículo 479 del Código de Comercio señala que: “Todas las acciones derivadas de la letra de cambio contra el aceptante, prescriben a los 3 años contados desde la fecha del vencimiento”; considerándose por definición conceptual la factura como un título valor impropio, y siendo la letra de cambio un título valor, ambas acciones prescriben a los 3 años a partir de su vencimiento.

generado por el SAP y 41 activos por un monto total de Bs. 153.457,30, no fueron ubicados físicamente, destacándose que la empresa no dispone de un registro permanente de control de entradas, salidas y/o movimientos de los bienes muebles. De la verificación a 36 unidades móviles, se determinó que 18 se encontraron en condiciones operativas; 2 siniestradas; 4 inoperativas; 4 sobre las cuales no se logró evaluar su operatividad por encontrarse en actividades laborales, y 8 por estar asignadas a los proyectos (comedores de empresas básicas). Por otra parte, 2 se encontraban en calidad de préstamo sin documento donde conste la asignación de las mismas al ente público correspondiente.

Por otra parte, al momento de la adquisición forzosa, 7 vehículos fueron retirados por los antiguos dueños del Complejo, sin observarse documento alguno que respalde la salida del activo de la empresa; 5 vehículos fueron otorgados en calidad de comodato sin constar en soporte documental su formal asignación; y 6 vehículos se encontraron bajo posesión de trabajadores por convenio sin documento formal.

Respecto a las condiciones físicas de los bienes inmuebles (almacén de mercancía seca) se constató una subutilización del almacén, debido a que sólo 20% de su capacidad estaba en uso. Asimismo, se observó deterioro en las bases de la estructura metálica de los anaqueles, presencia de aguas estancadas en los pasillos y desechos sólidos, filtraciones en el techo del almacén e inoperancia de los extractores de aire en el baño de caballeros. El almacén carece de sistema de detección de incendios. Por su parte, de 14 cavas de refrigeración, 6 se encontraron fuera de servicio, las máquinas que alimentan a 9 cavas requieren mantenimiento general y las balanzas romanas del área de conservación están inoperativas. Igualmente, se observaron fallas de mantenimiento correctivo en 2 cavas y 4 hornos ubicados en el Centro Panadero. Dado lo anterior, se desprende que FRIOSA carece de planes y programas de mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático sobre la totalidad de los bienes muebles e inmuebles que garanticen la conservación y salvaguarda.

Las Cuentas por Cobrar a la fecha del 30-06-2013, por concepto de servicios prestados a comedores de empresas básicas del sector público, ascienden a un total de Bs.70.368.852,79, que de acuerdo con la fecha de facturación, se encuentran vencidas con plazos entre 85 y 2.204 días, los cuales superan el tiempo otorgado, aunado a que los contratos suscritos con las empresas básicas en su mayoría no contemplan cláusulas

de penalización, por lo que las gestiones de cobro de las acreencias han sido poco efectivas.

De manera similar, existen facturas con vencimientos que varían entre 210 y 396 días; 120 y 635 días; 60 y 1.825 días; y 1.030 y 1.395 días aproximadamente, correspondientes a otros entes y organismos públicos; y a compañías que conforman el Complejo García Hermanos, S.A. (GAISA) (Inversiones Koma, S.A. y Delicatesses la Fuente, S.A), las cuales son empresas privadas y accionistas de FRIOSA, por los montos de Bs. 323.798,15; 4.462.759,59; 2.402.484,94 y 144.636.504,55 en el mismo orden, determinándose que no se contempló formalmente el plazo de vencimiento del crédito, siendo además que no existen evidencias documentales sobre la cobranza efectuada, por lo que tampoco las acciones de cobro han sido efectivas y oportunas, lo cual restringe la disponibilidad de flujo de efectivo para cubrir gastos operativos y de inversión.

Recomendaciones

Diseñar, aprobar formalmente, y poner en práctica, un plan de mantenimiento sistemático que abarque la totalidad de los bienes muebles e inmuebles del Complejo, a los fines de garantizar, de acuerdo con la naturaleza de cada activo, su adecuada preservación en condiciones de uso.

Girar las instrucciones a la Dependencia competente para contratar las pólizas de seguros necesarias, de conformidad con las políticas establecidas por el Complejo, con el objetivo de proteger los bienes que tengan bajo su custodia y cubrir los distintos riesgos o siniestros que pudieran ocurrir.

Girar las instrucciones necesarias para que periódicamente se practique la verificación física del inventario a través de funcionarios independientes del manejo y registro de bienes e inventario, con el propósito de determinar objetivamente la situación y el análisis comparativo de la realidad del almacenamiento con los registros contables.

Adoptar las medidas pertinentes para que, a través de la Dependencia competente, se apliquen procedimientos de control perceptivo a los bienes muebles al momento de su adquisición, con el fin de dejar constancia mediante Acta de que el precio, calidad y cantidad se correspondan con las especificaciones aprobadas en la orden de compra, servicios y/o contrato,

según sea el caso, y su respectivo registro en la contabilidad patrimonial y en el libro auxiliar de bienes (inventario) respectivo.

Instar a las dependencias que conforman la estructura organizativa de FRIOSA a notificar a la Dirección de Administración o a su equivalente, sobre los movimientos, traslados, transferencias, entradas y salidas de bienes, a los efectos de facilitar el registro permanente, y por ende, coadyuvar en el adecuado sistema de control físico de activos.

Instar a la Dirección de Consultoría Jurídica para que, previo al otorgamiento de préstamos de activos del Complejo, se elabore un contrato de comodato en el cual consten en las disposiciones, los términos y condiciones del mismo, señalando en forma expresa la asignación, uso determinado, tiempo, persona responsable y devolución, que permitan facilitar los mecanismos de control y el seguimiento a los efectos de garantizar la preservación y restitución de los bienes.

Implantar acciones de forma inmediata que garanticen la cobranza de las acreencias con entes y organismos públicos, compañías que conforman el Complejo García Hermanos, S.A. (GAISA) y empresas privadas, cuyas cuentas por cobrar deberán ser clasificadas por fechas de antigüedad y vencimiento, de forma tal que se facilite el control interno mediante el análisis y las evaluaciones mensuales.

Establecer mecanismos efectivos de control de crédito y cobranza, de acuerdo con las condiciones de pago, gestionando a través de la dependencia competente del Complejo, la inclusión de disposiciones contractuales referidas a cláusulas de penalización por incumplimiento de compromisos u obligaciones, destinados a garantizar la disponibilidad oportuna de los recursos financieros.

Establecer en un lapso perentorio de 30 días hábiles políticas formales de crédito para formalizar los términos y condiciones de las negociaciones con los clientes del sector público y privado.

En atención a las debilidades y deficiencias observadas, y sobre la base de las recomendaciones contenidas en el presente Informe, la Junta Administradora *ad hoc* del Complejo García Hermanos, S.A. (Gaisa), como máxima autoridad deberá elaborar un plan para corregirlas y remitirlo a este máximo organismo contralor, en un lapso de 60 días hábiles.

FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES Y EXPERIMENTALES

Aspectos preliminares

Origen

Los resultados contenidos en este Informe Especial provienen de las Auditorías de Asuntos Financieros, Parciales y Selectivas, que la Contraloría General de la República (CGR), a través de la Dirección de Control del Sector Desarrollo Social, adscrita a la Dirección General de Control de la Administración Nacional Descentralizada, efectuó durante el período comprendido entre los años 2007 al 2011 en 12 entes descentralizados (Fondos de Jubilaciones y Pensiones) promovidos y creados por las universidades públicas que se indican a continuación:

CUADRO N° 18
FUNDACIONES, ASOCIACIONES Y SOCIEDADES CREADAS COMO FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES
OBJETO DE ACTUACIONES FISCALES POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(PERÍODO 2007-2011)

N°	ENTE	NATURALEZA JURÍDICA	UNIVERSIDAD	FECHA DE CREACIÓN
1	Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Personal Académico de la Universidad Simón Bolívar (FONJUSIBO)	Fundación	Universidad Simón Bolívar (USB)	18-09-81
2	Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Obrero de la Universidad de Oriente (FONDUPODO)	Fundación	Universidad de Oriente (UDO)	10-05-92
3	Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de Oriente (FONDODO)	Fundación	Universidad De Oriente (UDO)	16-05-82
4	Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Académico y Administrativo de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (FJUNET)	Sociedad Civil	Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET)	16-12-82
5	Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de Investigación de la Universidad Nacional Experimental Antonio José de Sucre (FONJUNEXPO)	Asociación Civil	Universidad Nacional Experimental Antonio José de Sucre (Unexpo)	16-10-96
6	Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia (FJPLUZ)	Fundación	La Universidad del Zulia (LUZ)	12-03-90
7	Fundación Fondo de Jubilaciones y Pensiones para el Personal Docente y de Investigación de la Universidad de Los Andes (FONPRULA)	Fundación	Universidad de los Andes (ULA)	25-05-99
8	Fondo de Jubilaciones y Pensiones para el Personal de la Universidad Nacional Abierta (FONJUPUNA)	Fundación (**)	Universidad Nacional Abierta (UNA)	15-04-91
9	Fundación Fondo de Jubilaciones y Pensiones para el Personal Docente y de Investigación de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (FONJUCLA)	Fundación	Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA)	08-06-82
10	Fundación Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de Investigación de la Universidad Central de Venezuela (FONJUCV)	Fundación	Universidad Central de Venezuela (UCV)	14-11-77
11	Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de Carabobo (FOPEDIUC)	Asociación Civil	Universidad de Carabobo (UC)	09-07-85
12	Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (FJPUPEL)	Fundación	Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)	03-06-91

Fuente: Actas Constitutivas y Estatutarias de los Fondos.

(**) Disuelta en fecha 09-12-2010.

Alcance

De todos los entes descentralizados (Fondos de Jubilaciones y Pensiones) identificados en el Cuadro N° 18 de este Informe, que en adelante se identificaran como Fondos, fueron seleccionados los rubros de sus estados financieros que se indican a continuación: Préstamos por Cobrar, Cuentas Patrimoniales, Ingresos, Egresos y Utilidades. Desde el punto de vista cuantitativo, la sumatoria de los rubros referidos para los 12 entes a la fecha del 31-12-2011, se detallan en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 19
RUBROS DEL ACTIVO A LA FECHA 31-12-2011,
SELECCIONADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE LOS 12 ENTES DESCENTRALIZADOS
(EXPRESADOS EN BOLÍVARES)

CONCEPTO	Bs.
Ingresos	572.759.378,45
Egresos	181.580.559,42
Utilidad	390.760.437,52
Activos (préstamos por cobrar)	3.223.568.402,07
Inversiones financieras	1.509.704.921,42
Contribuciones	98.323.141,90
Aportes (trabajadores y universidades)	431.070.214,05
Patrimonio	4.628.757.436,20

Fuente: Estados Financieros de los Fondos a la fecha 31-12-2011.

En igual sentido, las actuaciones fiscales se circunscribieron a la revisión de las operaciones desarrolladas por las Fundaciones, Asociaciones y Sociedades, como fondos de jubilaciones y pensiones de las universidades, durante el período comprendido entre los años 2007 al 2011, relacionadas con los aspectos siguientes:

- a) Cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta Constitutiva de los fondos en relación con su objeto de creación.
- b) Aspectos económicos y financieros relativos a las contribuciones del Fondo para el pago de jubilaciones y pensiones por las universidades, así como en lo atinente a los aportes recibidos de las universidades y de sus trabajadores.

Objetivos generales y específicos

El objetivo general de la auditoría es determinar el cumplimiento de la misión institucional encomendada en las respectivas Actas Constitutivas y Estatutarias de las Fundaciones, Sociedades y Asociaciones, en especial en lo atinente a la “contribución” en el financiamiento o pago de jubilaciones y pensiones del personal de las universidades.

Los objetivos específicos de la auditoría son:

a) Cuantificar las “contribuciones” de los Fondos para el pago de jubilaciones y pensiones del personal de las respectivas casas de estudios, en función de las retenciones o aportes recibidos, atendiendo a su objeto de creación y capacidad operativa.

b) Establecer si las actividades económicas y financieras, así como aquellas de la naturaleza de las operaciones se corresponden con la misión y visión institucional de las Fundaciones, Sociedades y Asociaciones.

Enfoque

En el plano conceptual las actuaciones se enmarcaron en los lineamientos de control posterior, conforme a las disposiciones consagradas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial N° 6.013 Extraordinario de fecha 23-12-2010, además de considerar las particularidades del régimen de jubilaciones y pensiones de las universidades, así como la creación de fundaciones, asociaciones y sociedades, bajo la forma de fondos de jubilaciones y pensiones; mediante aportes personales e institucionales, y correlativamente la obligación de éstos de contribuir para sufragar la nómina pasiva de las universidades patrocinantes.

Métodos, técnicas y procedimientos

Para la consecución de los objetivos propuestos fueron utilizados métodos, técnicas y procedimientos de aceptación general, en concordancia con las Normas Generales de Auditoría de Estado (Gaceta Oficial N° 40.172 de fecha 22-05-2013, a saber:

a) Remisión de oficios a los Auditores Internos de las universidades y al Contralor del estado Sucre, suscritos por la Contralora General de la República (E), donde se les autorizaba realizar la actuación fiscal

en los entes descentralizados que manejan los fondos de jubilaciones y pensiones de esas casas de estudio.

b) Revisión del marco legal y sub-legal que rige las actividades relacionadas con las fundaciones, asociaciones y sociedades que manejan los Fondos.

c) Coordinación de los equipos de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna de las universidades y la Contraloría del Estado Sucre, por medios informáticos.

d) Acreditaciones, designaciones, requerimientos de información, actas fiscales, entrevistas, cuestionarios y examen o revisión de los archivos y registros documentales.

e) Valoración de la documentación recabada y vinculada con los procesos, transacciones administrativas y financieras que soportan las operaciones y procedimientos realizados por el Fondo.

f) Entrevistas a los funcionarios responsables de los fondos, y de las universidades.

g) Solicitud de recaudos y aplicación de cuestionario genérico y de control interno.

Características generales

Características generales del objeto evaluado

En general, las universidades nacionales promovieron la creación de entes descentralizados (fondos) con la finalidad de atender el régimen de jubilaciones y pensiones de su personal, docente, administrativo y obrero, para desarrollar un régimen particular de seguridad social mediante diversas modalidades de gestión, entre otros regímenes prestacionales, otorgándole la garantía de la jubilación a su personal, igualmente recogido como un derecho de seguridad social en los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial N° 36.860 de fecha 30-12-99, y su Enmienda N° 1 de fecha 15-02-2009, Gaceta Oficial. N° 5.908 Extraordinario de fecha 19-02-2009). En este sentido, los entes descentralizados (fondos) fueron creados atendiendo los criterios jurídicos siguientes: a) Ley de Universidades (Gaceta Oficial N° 1.429 Extraordinario de fecha 08-09-70), promulgada en vigencia de la Constitución de la República de Venezuela del año 1961, que consa-

gró en su artículo 102 el régimen de jubilaciones y pensiones, y en su artículo 114, la obligación de la Universidad de velar por el bienestar social del profesorado; b) Las Pautas Reglamentarias sobre Jubilaciones y Pensiones del Profesorado de las Universidades Nacionales (Gaceta Oficial N° 30.937 de fecha 09-03-76), cuyo artículo 8 establece que las universidades deben crear un fondo para atender las pensiones y jubilaciones, constituido por un aporte mensual y obligatorio que harán las universidades y aquellos aportes que reciban de todos los miembros del personal docente y de investigación.

Consecuentemente, las universidades, con fundamento en su autonomía, han creado entes descentralizados bajo la forma de fundaciones, asociaciones y sociedades, cuya regulación se encuentra prevista en el Código Civil de Venezuela (Gaceta Oficial N° 2.990 Extraordinario de fecha 26-07-82), en el que se encuentran clasificadas como personas jurídicas de derecho privado, aun cuando su constitución emane de la voluntad de una persona pública del Estado; por consiguiente, tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente del ente que las creó.

Cada Fondo creado y dirigido por las universidades, tiene su propio régimen normativo de administración, consistente en: a) Acta Constitutiva y Estatutaria, b) Reglamentos Internos (Generales, de Jubilaciones y Pensiones), y c) Actas de Sesión de los Consejos Universitarios u órganos equivalentes (en las cuales se aprueban y modifican los Estatutos).

En lo concerniente al manejo de los recursos financieros de cada Fondo, los regímenes de autorización están generalmente a cargo de una Junta Directiva, cuyos miembros son nombrados por las autoridades competentes de los organismos creadores de los entes (universidad y gremios a los cuales pertenecen los afiliados). La Junta Directiva de éstos está dotada de atribuciones para orientarlos, aprobar su presupuesto, dictar reglamentos internos, establecer la organización interna, y observar el cumplimiento de sus Estatutos, entre otros.

Cada ente dispuso conforme a su normativa, que sus ingresos estarán constituidos por: a) los aportes de las universidades, b) los aportes del personal afiliado, c) los ingresos provenientes de las rentas e intereses producto de las operaciones realizadas con los fondos en el mercado financiero e inmobiliario, d) por Bienes que se adquieran por cualquier

título, y cualesquiera otros ingresos, e) los recursos que formaron parte para su constitución, y f) el monto acumulado, si lo hubiere. En ese sentido, los aportes del personal docente y de investigación, al igual que los aportes de las universidades, se manejan y operan así: los aportes efectuados por las universidades (aporte institucional) y de los trabajadores, tienen como destino la formación patrimonial de los fondos de las fundaciones, asociaciones y sociedades, para el cumplimiento de su objeto, y están establecidos en porcentajes que oscilan entre 1,00% y 6,00%, que se descuenta al personal y que aportan las respectivas universidades, calculados con base en la nómina global del personal de cada universidad (anteriormente activos y pasivos, y solamente activos a partir del año 2003), por lo que los porcentajes varían significativamente entre las universidades y fondos que integran el sistema universitario.

Los fondos de jubilaciones y pensiones, según sus actas constitutivas, están facultados para realizar actos lícitos de naturaleza civil y mercantil, con el objetivo de obtener rentabilidad en los mercados financieros e inmobiliarios, sin comprometer la liquidez necesaria para el cumplimiento de su propósito. Generalmente las modalidades de inversión las constituyen colocaciones financieras, títulos y bonos, inversiones en inmuebles, y el otorgamiento de préstamos al personal afiliado con tasas preferenciales respecto a las del mercado.

Las denominadas “contribuciones”, de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, algunas desarrolladas por las universidades, y los Fondos, son los recursos financieros a través de los cuales los Fondos ayudan a las universidades en el financiamiento del pago de las jubilaciones y pensiones. Estas “contribuciones” se efectúan según la particularidad de cada Fondo, calculadas en función de un porcentaje de la utilidad neta o rendimiento de sus operaciones (entre 10,00% y 70,00%), o condicionadas para su procedencia, a la condición de que la utilidad o rendimiento alcancen 10,00% de la nómina pasiva. En otros casos queda a discreción del nivel directivo del Fondo.

Marco regulatorio

En el plano normativo, se consideró el ordenamiento legal y sublegal vinculado con el régimen de control fiscal y la normativa aplicada a las universidades; el régimen de jubilaciones y pensiones del personal; y el régimen de los entes descentralizados creados por las universidades

bajo el formato de las fundaciones, asociaciones y sociedades, para el manejo de los Fondos de prestaciones de sus trabajadores y que regula la materia objeto de análisis. A tal efecto fueron considerados los instrumentos siguientes:

a) Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), Gaceta Oficial N° 36.860 de fecha 30-12-99, y su Enmienda N° 1 de fecha 15-02-2009 (Gaceta Oficial N° 5.908 Extraordinario de fecha 19-02-2009).

b) Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial N° 37.347 de fecha 17-12-2001, y su modificación (Gaceta Oficial N° 6.013 Extraordinario de fecha 23-12-2010).

c) Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP), Gaceta Oficial N° 5.890 Extraordinario de fecha 31-07-2008.

d) Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, Gaceta Oficial N° 37.600, de fecha 30-12-2002, y su Reforma (Gaceta Oficial N° 39.912 de fecha 30-04-2012).

e) Ley de Universidades, Gaceta Oficial N° 1.429 Extraordinario de fecha 08-09-70.

f) Reglamento de la LOCGRSNCF, Gaceta Oficial N° 39.240 de fecha 12-08-2009.

g) Código Civil de Venezuela, Gaceta Oficial N° 2.990 Extraordinario de fecha 26-07-82.

h) Normas Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta Oficial N° 36.229 de fecha 17-06-97.

i) Normas Generales de Auditoría de Estado, Gaceta Oficial N° 36.229 de fecha 17-06-97, y su última actualización (Gaceta Oficial N° 40.172 de fecha 22-05-2013).

j) Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la Administración Central y Descentralizada Funcionalmente, Gaceta Oficial N° 38.282 de fecha 28-09-2005.

k) Pautas Reglamentarias sobre Jubilaciones y Pensiones del Profesorado de las Universidades Nacionales, Gaceta Oficial N° 30.937 de fecha 9-03-76.

l) Actas Constitutivas y Estatutos Sociales de los Fondos y sus modificaciones.

Observaciones derivadas del análisis

Una primera conclusión de la actuación fiscal de este máximo órgano de control, es que las fundaciones, asociaciones y sociedades creadas y dirigidas por universidades públicas, no han cumplido ni podrán cumplir en el futuro con la misión para la cual fueron constituidas, de atender directamente el pago de las jubilaciones y pensiones de las universidades nacionales. Este incumplimiento continuado y la imposibilidad estratégica y organizativa de superar las causas que lo originan, se debe y se expresa en las situaciones siguientes: los ingresos obtenidos por los entes durante el período comprendido entre los años 2007 al 2011, ascendieron a la cantidad de Bs. 572.759.378,45, producto de las inversiones financieras. Por su parte, los egresos se ubicaron en Bs. 181.580.559.42, por concepto de gastos de funcionamiento, según se detalla a continuación:

CUADRO N° 20
ENTES DESCENTRALIZADOS: INGRESOS Y EGRESOS AÑOS
2007 AL 2011 (EXPRESADO EN BOLÍVARES)

ENTE	INGRESOS	EGRESOS	RESULTADO	EGRESOS / INGRESOS (%)	RENTABILIDAD ECONÓMICA
FJPLUZ	61.565.585,54	14.976.308,30	46.589.277,24	24,33%	4,11
FJPUPEL	51.730.486,31	27.890.697,63	(*)23.787.289,65	53,92%	1,85
FONDODO	33.598.155,29	17.487.135,27	16.111.020,02	52,05%	1,92
FJOUPOUDO	9.089,10	1.937.692,78	-1.928.603,68	21.318,86%	0,00
FONJUCV	113.501.112,00	58.644.925,00	54.856.187,00	51,67%	1,94
FONJUSIBO	67.370.139,72	3.198.473,14	64.171.666,58	4,75%	21,06
FOPEDIUC	47.521.672,97	21.467.901,07	26.053.771,90	45,17%	2,21
FONPRULA	97.264.952,75	12.809.996,38	84.454.956,37	13,17%	7,59
FONJUNEXPO	17.728.203,57	15.890.537,02	1.837.666,55	89,63%	1,12
FJUPUNA	50.624.066,05	2.473.450,00	48.150.616,05	4,89%	20,47
FJUNET	3.687.306,25	882.410,85	2.804.895,40	23,93%	4,18
FONJUCLA	28.158.608,90	3.921.031,98	(**)23.871.694,24	13,92%	7,18
TOTALES	572.759.378,45	181.580.559,42	390.760.437,52	31,70%	3,15

Fuente: Estados financieros de los entes de los años 2007-2011.

(*) No se incluyeron Bs. 52.498,83, registrados incorrectamente como un Ingreso según lo refleja el Estado de Resultado correspondiente al año 2011.

(**) No se incluyeron Bs. 365.882,68, producto de aportes efectuados por la UCLA a FONJUCLA registrados incorrectamente como Ingresos, según lo refleja el Estado de Resultado correspondiente al año 2007.

Durante el período comprendido entre los años 2007 al 2011, las universidades públicas erogaron por nómina de su personal jubilado y pensionado Bs. 5.747.471.521,44, y los entes descentralizados, apenas contribuyeron con el 1,71% de dicha obligación (Bs. 98.323.141,90), pese a estar obligados a aportar por lo menos Bs. 367.213.387,36, tal como se observa en el cuadro siguiente. Esa situación verificada en la muestra de los entes seleccionados por este máximo organismo contralor, dentro del alcance del período que abarca los años 2007 al 2011, es reflejo del comportamiento histórico de los fondos desde el comienzo de su funcionamiento:

CUADRO N° 21
UNIVERSIDADES PÚBLICAS: NÓMINA PASIVA Y “CONTRIBUCIÓN” DE LOS FONDOS
(AÑOS 2007-2011)
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

ENTE	NÓMINA PASIVA UNIVERSITARIA	CONTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS			CONTRIBUCIÓN EFECTIVA NÓMINA PASIVA UNIVERSITARIA (%)
		OBLIGACIÓN ESTATUTARIA	EFFECTIVA	VARIACIÓN	
F.IPLUZ	485.168.243,09	27.637.904,27	18.400.000,00	9.237.904,27	0,04
F.IPUPEL	1.565.694.706,36	156.569.470,64	15.000.000,00	141.569.470,64	0,01
FONDOUDO	232.323.523,66	23.323.352,37	1.500.000,00	21.823.352,37	0,01
F.OJUPOUDO	146.858.883,50	14.685.888,35	0,00	14.685.888,35	0,00
F.ONJUCV	1.452.085.578,56	50.652.455,02	32.581.363,14	18.071.091,88	0,02
F.ONJUSIBO	320.733.462,08	7.540.627,20	4.755.349,40	2.785.277,80	0,01
F.OPEDIUC	394.166.204,07	4.345.389,44	4.345.389,44	0,00	0,01
F.ONPRULA	407.918.099,38	17.471.475,27	17.510.183,58	-38.708,31	0,04
F.ONJUNEXPO	216.517.701,00	21.651.770,10	265.856,34	21.385.913,76	0,00
F.OJUPUNA	255.796.003,48	25.579.600,34	0,00	25.579.600,34	0,00
F.JUNET	92.654.572,64	N/D	965.000,00	N/D	0,01
F.ONJUCJA	177.554.543,62	17.755.454,36	3.000.000,00	14.755.454,36	0,02
TOTALES	5.747.471.521,44	367.213.387,36	98.323.141,90	269.855.245,46	1,71

Fuente: Estados Financieros de los Fondos de los años 2007-2011 y Actas de Junta Directiva.
N/D = No Disponible.

Durante el período en referencia, la “contribución” de los entes a las universidades para el pago de las jubilaciones y pensiones, representó 22,81% respecto al total de los aportes, según se detalla a continuación:

CUADRO N° 22
CONTRIBUCIONES DE LOS ENTES EN RELACION CON LOS APORTES RECIBIDOS (AÑOS 2007-2011)
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

ENTE	APORTES		TOTAL	CONTRIBUCIONES DE LOS ENTES	CONTRIBUCIONES APORTES TOTAL (%)
	TRABAJADORES	UNIVERSIDAD			
F-JPLUZ	9.805.293,72	13.209.409,50	23.014.703,22	18.400.000,00	79,95
F-JPUPEL	24.292.320,78	22.551.480,18	46.843.800,96	15.000.000,00	32,02
F-ONDODO	29.759.152,00	32.039.153,00	61.798.305,00	1.500.000,00	2,43
F-OJPOUDO	2.937.177,67	2.876.918,55	5.814.096,22	0,00	0,00
F-ONJUCV	42.268.768,26	42.268.768,26	84.537.536,52	32.581.363,14	38,54
F-ONJUSIBO	4.744.871,08	4.744.871,08	9.489.742,16	4.755.349,40	50,11
F-OPEDIUC	14.798.245,55	6.148.046,05	20.946.291,60	4.345.389,44	20,75
F-ONPRULA	38.758.831,07	25.660.446,64	64.419.277,71	17.510.183,58	27,18
F-ONJUNEXPO	7.302.914,00	5.860.442,99	13.163.357,99	265.856,34	2,02
F-OJUPUNA	10.029.147,34	10.857.579,06	*74.228.583,67	0,00	0,00
F-JUNET	1.916.209,43	1.362.086,86	3.278.296,29	965.000,00	29,44
F-ONJUCLA	9.928.000,82	13.608.222,58	23.536.223,40	3.000.000,00	12,75
TOTAL	196.540.931,72	181.187.424,75	431.070.214,04	98.323.141,90	22,81

Fuente: Fondos de Jubilaciones y Pensiones.

*Incluye la entrega efectiva al Fondo de Bs. 53.341.857,27, producto de los aportes acumulados desde su creación en el año 92 hasta el año 2007.

La baja capitalización de sus recursos y rendimientos provenientes particularmente de las deducciones mensuales efectuadas a trabajadores de las universidades, así como de los aportes y del manejo financiero de ambos rubros, con los cuales, además, los Fondos tienen que atender sus propios gastos de operaciones, no permiten un desarrollo estratégico patrimonial, ni siquiera a la par del creciente incremento de las erogaciones por pensiones y jubilaciones de las universidades, mucho menos a niveles que permitan alcanzar estados de sustentabilidad para cumplir con la estabilidad y regularidad su misión fundacional, tal como se muestra a continuación:

CUADRO N° 23
RELACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FONDOS Y SUS UTILIDADES
CON LA NÓMINA PASIVA PAGADA POR LAS UNIVERSIDADES (AÑOS 2007-2011)
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

ENTE	PATRIMONIO	RESULTADO	NÓMINA PASIVA UNIVERSITARIA	PATRIMONIO/ NÓMINA PASIVA UNIVERSITARIA %	UTILIDAD/ NÓMINA PASIVA UNIVERSITARIA%
F.JIPLUZ	433.312.684,39	46.589.277,50	485.168.243,09	89,31	9,60
F.JIPEL	672.466.842,24	23.787.289,85	1.565.694.706,36	42,95	1,52
FONDODO	440.131.177,21	16.111.020,02,	232.323.523,66	189,45	6,93
F.OUPOUDO	14.477.239,05	-1.928.603,68	146.858.883,50	9,86	-1,31
FONJUCV	595.832.375,00	54.856.187,00	1.452.085.578,56	41,03	3,78
FONJUSBO	349.494.500,00	64.171.666,58	320.733.462,08	108,97	20,01
F.OFEDIUC	254.416.041,00	26.053.771,90	394.166.204,07	64,55	6,61
FONIPRULA	1.170.107.821,53	84.454.956,37	407.918.099,38	286,85	20,70
FONJUNEXPO	99.661.849,06	1.837.666,55	216.517.701,00	46,03	0,85
F.OUJUNA	284.675.377,37	48.150.616,05	255.796.003,48	111,29	18,82
F.JUNET	34.726.199,43	2.804.895,40	92.654.572,64	37,48	3,03
FONJUGLA	279.455.329,92	23.871.694,24	177.554.543,62	157,39	13,44
TOTALES	4.628.757.436,20	390.760.437,52	5.747.471.521,44	80,54	6,80

Fuente: Estados Financieros de los Fondos de los años 2007-2011

Como se observa en el cuadro que precede, los Fondos no han logrado construir un capital o patrimonio suficiente, cuyos rendimientos financieros o la utilidad del respectivo ejercicio económico, le permitan cubrir la nómina pasiva de las universidades. Incluso, el patrimonio se muestra inferior al pago de jubilaciones y pensiones (80,54%), y las ganancias oscilaron entre 1,31% y 20,70% de la nómina pasiva de las universidades, con un promedio para el período objeto de estudio de 6,80%.

La “contribución” acumulada efectiva de los entes a las universidades en los años 2007 al 2011 fue de Bs. 98.323.141,90 para atender la “nómina pasiva” (Bs. 5.747.471.521,44), por lo que tiene irrelevante utilidad y escasa significación cuantitativa debido a que: a) es apenas 1,71% de la nómina pasiva; b) respecto al monto acumulado de los recursos percibidos por descuento a trabajadores y aportes universitarios en el período (Bs. 431.070.214,04) solo representa 22,81%, c) en relación con el rendimiento o utilidad (Bs. 390.760.437,52), la “contribución” es de 25,17%. Es decir, las fundaciones, asociaciones y sociedades creadas para atender el pasivo de las pensiones y jubilaciones de las universidades públicas, apenas asignan a este propósito una mínima parte, no solo de los ingresos que aportan trabajadores y universidades, sino de los propios rendimientos que derivan de su administración, tal como se muestra en el cuadro que se presenta a continuación:

CUADRO Nº 24
“CONTRIBUCIÓN” DE LOS ENTES O FONDOS PARA EL PAGO DE LA NÓMINA PASIVA DE LAS UNIVERSIDADES
(AÑOS 2007-2011) (EXPRESADO EN BOLÍVARES)

ENTE	APORTE DE LOS TRABAJADORES Y DE LAS UNIVERSIDADES	RESULTADO	NÓMINA PASIVA UNIVERSITARIA	CONTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS	CONTRIB. EFECTIVA NÓMINA PASIVA (%)	CONTRIB.- APORTES TOTAL	CONTRIB.- RESULTADOS (%)
F_JPLUZ	23.014.703,22	46.589.277,50	485.168.243,09	18.400.000,00	3,79	79,95	39,49
F_JPUPEL	46.843.800,96	23.787.289,85	1.565.694.706,36	15.000.000,00	0,96	32,02	62,92
FONDOUNDO	61.798.305,00	16.111.020,02	232.323.523,66	1.500.000,00	0,65	2,43	9,31
FONJUPODO	5.814.096,22	-1.928.603,68	146.858.883,50	0,00	0,00	0,00	0,00
FONJUCV	84.537.536,52	54.856.187,00	1.452.085.578,56	32.581.363,14	2,24	38,54	59,39
FONJUSIBO	9.489.742,16	64.171.666,58	320.733.462,08	4.755.349,40	1,48	50,11	7,41
FOPEDIUC	20.946.291,60	26.053.771,90	394.166.204,07	4.345.389,44	1,10	20,75	16,68
FONPRULA	64.419.277,71	84.454.956,37	407.918.099,38	17.510.183,58	4,29	27,18	20,73
FONJUNEXPO	13.163.357,99	1.837.666,55	216.517.701,00	265.856,34	0,12	2,02	14,47
FONJUPUNA	74.228.583,67	48.150.616,05	255.796.003,48	0,00	0,00	0,00	0,00
F_JUNET	3.278.296,29	2.804.895,40	92.654.572,64	965.000,00	1,04	29,44	34,40
FONJUCLA	23.536.223,40	23.871.694,24	177.554.543,62	3.000.000,00	1,69	12,75	12,38
TOTAL	431.070.214,04	390.760.437,52	5.747.471.521,44	98.323.141,90	1,71	22,81	25,14

Fuente: Estados Financieros de los Fondos de los años 2007-2011.

Los resultados de los exámenes practicados bajo la coordinación de este máximo órgano de control, desde distintos enfoques, sobre la estructura financiera de los Fondos, revelan un rendimiento de las operaciones financieras insuficiente para atender la misión de los entes, en buena parte explicable por la baja capitalización para incrementar el patrimonio, el cual debería superar con creces la nómina pasiva anual de las universidades para poder contribuir en forma significativa con el pago de jubilaciones y pensiones. La asimetría que se observa entre los aportes de trabajadores y universidades en relación con las “contribuciones” para el pago de jubilaciones y pensiones, además de los riesgos financieros y económicos, típicos del negocio financiero, y aunado a los reintegros de fondos que deben hacerse al personal jubilado de las universidades, hacen que la tendencia del conjunto de operaciones económicas y financieras de los entes no puedan equipararse al comportamiento o tendencia creciente de la nómina pasiva de las universidades. Esto ha hecho que el factor progresivo de atención de la misión institucional de los Fondos no se haya estructurado, y que no sea posible su materialización en el futuro, a objeto de fijar metas de rendimiento y capitalización:

CUADRO N° 25
RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES
FINANCIERAS DE LOS ENTES EN RELACIÓN
CON LA NÓMINA PASIVA DE LAS UNIVERSIDADES
(AÑOS 2007-2011)
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

ENTE	RENDIMIENTO	NÓMINA PASIVA DE LAS UNIVERSIDADES	RENDIMIENTO/ NÓMINA PASIVA DE LAS UNIVERSIDADES
FJPLUZ	57.543.569,68	485.168.243,09	11,86
FJPUPEL	425.768,00	1.565.694.706,36	0,03
FONDOUDO	22.799.832,13	232.323.523,66	9,81
FOJUPOUDO	67.893,17	146.858.883,50	0,05
FONJUCV	48.054.787,00	1.452.085.578,56	3,31
FONJUSIBO	26.849.308,00	320.733.462,08	8,37
FOPEDIUC	0,00	394.166.204,07	0,00
FONPRULA	28.465.922,03	407.918.099,38	6,98
FONJUNEXPO	3.041.055,33	216.517.701,00	1,40
FOJUPUNA	0,0	255.796.003,48	0,00
FJUNET	0,0	92.654.572,64	0,00
FONJUCLA	11.489.575,34	177.554.543,62	6,47
TOTALES	198.737.710,68	5.747.471.521,44	3,46

Fuente: Estados Financieros de los Fondos de los años 2007-2011.

En el cuadro anterior se observa, además, que durante el período comprendido entre los años 2007 al 2011, los rendimientos obtenidos por los entes en inversiones financieras apenas representaron en promedio 3,46% de la nómina pasiva de las universidades, lo que desfavorece el fundamento esencial de las operaciones de los entes y la razón de su creación, al presentar una rentabilidad que imposibilita el cumplimiento de sus obligaciones estratégicas.

En resumen, considerando que los entes descentralizados creados por las universidades como fondos, registran varios años de actividad económica y financiera (entre 16 y 35 años aproximadamente desde su creación), podemos inferir que las “contribuciones” para el pago de la nómina pasiva de las universidades públicas debieron provenir de los rendimientos financieros del capital (aporte institucional y de los trabajadores), más la capitalización de los rendimientos (factor progresivo del capital y las contribuciones). Por consiguiente, los resultados institucionales de los fondos traducidos en las “contribuciones”, no fueron proporcionales o razonables en relación con los aportes recibidos durante el período analizado (años 2007 al 2011), cuyo examen además reveló, entre otros aspectos, que los aportes recibidos por los entes, provenientes de las universidades, fueron irregulares, como son los casos de los Fondos: FJPLUZ, FJPUPEL, FONDOUDO, FONJUCV, FONPRULA, FONJUCLA, FONJUSIBO, los cuales, desde mayo del año 2010, y en el año 2011, por Resolución N° 082 del Consejo Nacional de Universidades (Gaceta Oficial N° 39.004 de fecha 28-08-2008), dejaron de percibir los aportes del personal jubilado y pensionado. Los Fondos: FJPLUZ, FJPUPEL, FONDOUDO, FONJUCV, FONPRULA y FONJUCLA, no recibieron aporte por parte de las universidades.

En la evaluación de los riesgos, este máximo órgano contralor evidenció en las actividades examinadas, que la mayoría de los Fondos tienen como política de inversión el otorgamiento de préstamos al personal del propio ente y de las universidades, lo cual no sólo es ajeno a los rubros de inversiones financieras de corta exigibilidad, sino que esa práctica constituye una desviación de la misión institucional hacia la atención de actividades que son más propias de las Cajas de Ahorro reguladas por la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorros y Asociaciones de Ahorros Similares, esta Ley establece, entre otras regulaciones, las previsiones que deben tomar dichas instituciones, a los fines de garantizar y salvaguardar

los ahorros de sus afiliados; protección de la cual carecen los recursos manejados por los Fondos creados por las universidades.

En el cuadro que se presenta a continuación, se hace una comparación entre las cantidades otorgadas en préstamo y las inversiones financieras acometidas por los entes:

CUADRO N° 26
RELACION DE PRÉSTAMOS E INVERSIONES FINANCIERAS (AÑOS 2007-2011)
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

ENTE	PRÉSTAMOS	INVERSIONES	NÓMINA PASIVA DE LAS UNIVERSIDADES	PATRIMONIO	INVERSIÓN/ NÓMINA PASIVA (%)	PRÉSTAMOS/ NÓMINA (%)	PRÉSTAMOS/ PATRIMONIO (%)
F.IJPLUZ	20.363.135,33	266.677.748,86	485.168.243,09	433.312.684,39	54,97	4,20	4,70
F.IJUPEL	481.927.208,53	50.550.810,44	1.565.694.706,36	672.466.842,24	3,23	30,78	71,67
FONDODO	1.426.787.542,72	157.977.914,81	232.323.523,66	440.131.177,21	68,00	614,14	324,17
F.OIJPDOIDO	5.651.963,24	67.893,17	146.858.883,50	14.477.239,05	0,05	3,85	39,04
FONJUCV	307.983.515,00	280.447.576,93	1.452.085.578,56	595.832.375,00	19,31	21,21	51,69
FONJUSIBO	0,00	215.869.645,00	320.733.462,08	349.494.500,00	67,30	0,00	0,00
F.OPEDIUC	128.975.791,93	82.743.694,00	394.166.204,07	254.416.041,00	20,99	32,72	50,69
FONPRULA	725.936.839,91	358.833.720,31	407.918.099,38	1.170.107.821,53	87,97	177,96	62,04
FONJUNEXPO	17.481.159,74	47.527.791,40	216.517.701,00	99.661.849,06	21,95	8,07	17,54
F.OIJPUNA	0,00	0,00	255.796.003,48	284.675.377,37	0,00	0,00	0,00
F.JUNET	2.134.930,09	18.691.352,96	92.654.572,64	34.726.199,43	20,17	2,30	6,15
FONJUCLA	106.326.315,58	30.316.773,54	177.554.543,62	279.455.329,92	17,07	59,88	38,05
TOTALES	3.223.568.402,07	1.509.704.921,42	5.747.471.521,44	4.628.757.436,20	26,27	56,09	69,64

Fuente: Estados Financieros de los Fondos de los años 2007-2011

Como se observa en el cuadro anterior, los préstamos al personal superan las inversiones financieras en acciones y títulos valores. Éstas deberían constituir la principal actividad de los entes, toda vez que las características de este tipo de operaciones permiten la atención de sus obligaciones a corto plazo, para lo cual se requiere de alta rentabilidad y liquidez con razonable seguridad.

Por lo demás, los recursos destinados a préstamos distan de las operaciones legítimas de los fondos, limitando la disposición de recursos para mayores inversiones en el mercado financiero. De igual manera: a) estas prácticas exponen a efectos adversos los intereses institucionales, dado que los préstamos son operaciones que no se ajustan a la recuperación de capital y rendimientos de corto plazo, es decir, igual o menor a un año; b) los préstamos se destinaron al financiamiento de la adquisición de vehículos y viviendas; contingencias de salud; recreación y turismo; servicios de seguros; y préstamos especiales otorgados a los institutos de previsión, en algunos casos inversión no retornable; c) estas operaciones se hicieron en circunstancias desfavorables, con garantías insuficientes, debilidades en su control y seguimiento, así como morosidad superior a 5 años. Las actividades mencionadas, en síntesis, constituyen una desviación del objeto de los entes hacia otros proyectos o necesidades, en finalidades distintas a las previstas en los documentos constitutivos y normativos de los Fondos.

Además de las observaciones que preceden, en la muestra analizada se determinaron pérdidas financieras por Bs. 11.333.350,59, algunas de ellas derivadas de la naturaleza del negocio. Igualmente, se observaron pérdidas potenciales por la incursión de los Fondos en el mercado asegurador, en particular con una empresa de Seguros, por Bs. 7.204.000,00, que representó 84,13% de las acciones, la cual pudiera comportar descapitalizaciones futuras:

Finalmente es de señalar, que el Estado venezolano ha asumido la responsabilidad de pagar la nómina pasiva, asignando los recursos presupuestarios respectivos directamente a las universidades. Por su parte, la misión de los referidos Fondos no se ha cumplido: su aporte en el período objeto de análisis de los años 2007 al 2011, sólo representó en promedio 1,71% de la obligación asumida. La subsistencia de estas figuras jurídicas en el tiempo (fundaciones, asociaciones y sociedades, como Fondos de Jubilaciones y Pensiones) ha resultado, a todas luces ineficaz y onerosa.

CUADRO N° 27
COMPOSICIÓN ACCIONARIA:
EMPRESA DE SEGUROS (AÑOS 2007-2011)
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

ACCIONISTAS	N° ACCIONES	MONTO	% ACCIONES
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de Oriente (FONDOUDO)	3.910	3.910.000,00	45,66%
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (FJUPEL)	1.961	1.961.000,00	22,90%
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (FJPUCLA)	1.333	1.333.000,00	15,57%
TOTAL	7.204	7.204.000,00	84,13%

Fuente: Asamblea de Accionistas N° 31 de fecha 29-01-2009.

Consideraciones finales

Conclusión

La creación por las universidades de estos entes autónomos e independientes, para atender el régimen de jubilaciones y pensiones del personal universitario, con una antigüedad de 35 años aproximadamente, no ha logrado cumplir su propósito, a pesar de haber dispuesto de un capital acumulado constituido por los aportes de la nómina activa de los trabajadores universitarios y el correspondiente aporte institucional. En paralelo, el Estado venezolano, a través de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional a las universidades, ha asumido la responsabilidad de pagar la nómina pasiva, toda vez que la contribución de los entes o fondos, en el período objeto de análisis (años 2007 al 2011), solo representó, en promedio, 1,71% de la obligación asumida. Los Fondos en su evolución, ampliaron o modificaron su objeto de creación para atender finalidades sociales, deportivas y culturales de las casas de estudio, así

como a la ejecución de políticas de inversión (préstamos), desviándose del propósito de asumir el pago de jubilaciones y pensiones. Esta situación, reiterada en el tiempo, se ha mantenido sin que el Consejo Nacional de Universidades (CNU), los Consejos Universitarios u órganos similares, promuevan la adecuación de su normativa interna a los cambios legales surgidos, en particular con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), Gaceta Oficial N° 37.600 de fecha 30-12-2002, para hacer posible, de esta forma, su integración al Sistema de Seguridad Social.

Recomendaciones

Vistos los resultados del análisis y con la autorización previa impartida por la Contralora General de la República en la Comunicación Interna N° 008 de fecha 19-12-2013, se formulan con carácter vinculante las recomendaciones dirigidas a las Juntas Directivas de los Fondos y a los Consejos Universitarios de las Universidades (o autoridad equivalente), cuya reconsideración mediante escrito razonado puede ser solicitada ante esta Contraloría, en paralelo con propuesta de sustitución, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la LOCGRSNCF, en concordancia con el artículo 44 de su Reglamento (Gaceta Oficial N° 39.240 de fecha 12-08-2009), caso en el cual este organismo contralor procedería a ratificar las recomendaciones o a dar conformidad a la propuesta de sustitución.

A las Juntas Directivas de los Fondos de Jubilaciones y Pensiones:

a) Empezar de forma planificada y atendiendo a la particularidad que corresponda, la supresión de los respectivos Fondos, dada la comprobada imposibilidad técnica y financiera para cumplir con el objeto y misión que dio lugar a su creación.

b) Proceder a la cuantificación de los recursos financieros precisando su disponibilidad, con sujeción a las disposiciones legales aplicables, con el fin de integrarlos a la Tesorería de Seguridad Social, como aportes para ser acreditados a la cuenta individual del personal activo afiliado de los referidos Fondos.

c) Proceder a efectuar un inventario de los bienes muebles e inmuebles que conforman el activo fijo de los Fondos, y a transferirlos,

adscribirlos o cederlos, según corresponda, a las universidades vinculadas a cada Fondo.

A los Consejos Universitarios o nivel de autoridad equivalente de las Universidades:

a) Ordenar la supresión planificada de los mencionados Fondos; realizar el control y seguimiento de ese proceso, y garantizar que se cumpla el destino que debe dársele a los recursos patrimoniales derivados de tal acción.

b) Suspender a partir de la fecha del 01 de enero de 2014 cualquier tipo de aportes y retención destinados a los referidos Fondos.

Al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), al CNU, y a la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU):

a) Supervisar y realizar el seguimiento de la normativa sublegal interna dictada por las universidades, relacionadas con el surgimiento de figuras legales (fundaciones, asociaciones y sociedades), destinadas a la seguridad social, para impedir posibles desviaciones y garantizar la necesaria coordinación, homogeneidad, armonía y coherencia entre los entes del sector universitario.

b) Velar por el destino acordado a los recursos derivados de la supresión de los Fondos señalados.

c) Exigir y validar toda la información que resulte de las acciones emprendidas por las universidades, así como de los entes, según sus competencias, para acatar las recomendaciones formuladas por esta Entidad de Fiscalización Superior.

A la Tesorería de Seguridad Social:

a) Concretar con el MPPEU, el CNU y las universidades, en coordinación con los Fondos, la recepción de los recursos provenientes de los procesos de supresión.

b) Concretar con el MPPEU, el CNU y las respectivas universidades, las acciones pertinentes tendentes al diseño e implantación de la plataforma tecnológica, que permitan la liquidación, contabilización y verificación de los recursos que se aportan al Sistema de Seguridad Social por las universidades, derivados de la supresión de los Fondos.

c) Crear y mantener actualizada la historia previsional del personal activo y el registro de las universidades, que deben contribuir obligatoriamente al financiamiento del Sistema de Seguridad Social, así como del personal pasivo de las mismas, con el fin de efectuar el pago de las nóminas de jubilaciones y pensiones universitarias.

A la Superintendencia del Sistema de Seguridad Social:

a) Supervisar las acciones emprendidas por los Fondos en su proceso de supresión y vigilar el acatamiento de las recomendaciones formuladas por esta Entidad de Fiscalización Superior.

b) Realizar las acciones legales necesarias, a los fines de garantizar que los recursos provenientes de la supresión de los entes sean incorporados a la Tesorería de Seguridad Social y posteriormente sean utilizados para el pago de las nóminas de jubilaciones y pensiones universitarias.

c) Velar por el destino de los recursos derivados de la supresión de los Fondos.

d) Informar a la CGR sobre el destino de los Fondos bajo la administración de la Tesorería.

Al Ejecutivo Nacional, desarrollar el plan de implantación de la nueva institucionalidad del Sistema de Seguridad Social, con el fin de que sea acatado y ejecutado por todas las organizaciones e instituciones que ejercen funciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, y proceder a su Reglamentación correspondiente.

FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO (FUNDEEH)

Aspectos preliminares

Alcance

La actuación se circunscribió a 8 centros asistenciales incluidos en la Red Hospitalaria Barrio Adentro III del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS): Hospital Maternidad Concepción Palacios; Hospital de Niños Dr. José Manuel de los Ríos; Hospital Dr. José María Vargas de Caracas; Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas (HUC); Servicio Autónomo Hospital Central de Maracay (SAHCM); Hospital Industrial de San Tomé; Hospital General del Oeste Dr. José Gregorio

Hernández y Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, para los cuales, la FUNDEEH había celebrado 100 contratos de obras, cuyo objeto era la adecuación y modernización tecnológica de los servicios que conformaban estos hospitales. En este sentido, se analizaron 64 expedientes de obras, por Bs. 274.173.962,70, y pormenorizadamente 10 empresas y 32 contratos, por Bs. 169.729.750,17. Adicionalmente, fueron evaluados aspectos de los controles internos de la Fundación, específicamente en el marco de las contrataciones efectuadas para la ejecución de las obras. Se realizó un análisis parcial y selectivo de la ejecución de los contratos de obras públicas de rehabilitación, ampliación y modernización.

Objetivos generales y específicos

Ejercer el control fiscal en aquellos organismos que ejecutan los programas sociales incorporados por el Ejecutivo Nacional en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

Los objetivos específicos de la auditoría son:

- a) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la selección de contratistas y la administración de los contratos.
- b) Comprobar el acatamiento de las cláusulas contractuales.
- c) Constatar la sinceridad, exactitud y legalidad de los compromisos y pagos en la ejecución de los contratos.
- d) Determinar la existencia de controles institucionales para obras públicas que acometa la FUNDEEH y su aplicación en las contrataciones objeto de análisis.

Características generales

Características generales del objeto evaluado

La FUNDEEH es una fundación del Estado adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Salud, (MPPS) creada mediante Decreto N° 4.965 de fecha 06-11-2006, (Gaceta Oficial N° 38.558 de fecha 07-11-2006), cuya actividad principal es la formulación y puesta en marcha del Plan Especial de Desarrollo y Ampliación de la Red Hospitalaria Nacional. Tiene por objeto apoyar la promoción, planificación, mantenimiento y construcción de edificaciones del SPNS, la coordinación, gerencia, financiamiento,

administración, ejecución y supervisión de los proyectos, obras, dotación y equipamiento de la Red de Servicios de Salud, prioritariamente de los hospitales generales y altamente especializados, que permita superar el déficit actual del Sistema y atender el incremento regular de las necesidades.

Mediante Resolución N° 398 de fecha 22-11-2006 (Gaceta Oficial N° 38.569 de la misma fecha), el MPPS resolvió iniciar la adecuación y modernización tecnológica de los hospitales de la Red Hospitalaria Barrio Adentro III y la construcción, dotación y puesta en marcha de hospitales generales y especializados previstos en Barrio Adentro IV, lo cual debería ser concluido en dos años, contados a partir de la publicación de la citada Resolución. Dentro de este contexto, el MPPS y sus entes adscritos fueron declarados en Emergencia Institucional. En ese sentido, la construcción, remodelación y ampliación de edificaciones y la compra de equipos destinados al equipamiento y modernización tecnológica de los hospitales del SPNS, se contratarían por el procedimiento de adjudicación directa, modalidad vigente para la fecha.

Observaciones derivadas del análisis

Para el momento en que se ejecutan los proyectos, la FUNDEEH no había dictado su Reglamento Interno, no poseía Manuales de Organización y Funcionamiento, ni Descriptivo de Cargos, e igualmente, carecía de un Plan Estratégico. A la fecha 27-05-2010 se dictó el Reglamento Interno y el Manual de Organización y Funciones, que comenzó a regir el 01-06-2010.

Se observó que la Fundación no aplica en sus procedimientos las tecnologías de la información y la comunicación, ni dispone de indicadores para monitorear y medir su desempeño. No se evidencia el uso de instrumentos de planificación y seguimiento del cumplimiento de su objeto legal, carencias y debilidades, lo que explica la imposibilidad de cumplir los requerimientos de este máximo órgano de control fiscal, relativos a la información acerca de la ejecución de las obras en los 8 centros de salud objeto de análisis durante los años 2007 al 2009. A la par de esa omisión, la citada Institución no supervisó, inspeccionó o evaluó, o hizo control técnico administrativo de las obras, ni de los términos de contratación establecidos entre la Fundación y las contratistas para el mejoramiento, ampliación y desarrollo de la Red Hospitalaria del SPNS, actividades que según el artículo 49 del Reglamento Interno sobre la Organización

y Funcionamiento de la FUNDEEH, debía coordinar con la Gerencia de Formulación y Evaluación de Proyectos, para la actualización y mantenimiento del sistema de monitoreo y control de obras en ejecución y avance de proyectos, planes, programas e inversiones en general, lo que le permitiría la información real y oportuna para la toma de decisiones. No se dio cumplimiento a las prescripciones de las Normas Generales de Control Interno, en particular de su artículo 18, en el sentido de que los responsables de la ejecución de planes, programas y proyectos deben informar a los niveles superiores correspondientes acerca de la situación de los mismos, con indicación de las desviaciones ocurridas, sus causas, efectos, justificación y medidas adoptadas.

Deficiencias generales en la ejecución y la contabilidad presupuestaria de la Fundación han imposibilitado un análisis sistemático de las operaciones atinentes a los contratos y su repercusión en el presupuesto de la Institución, en particular en los ejercicios de los años 2007, 2008, 2009 y primer trimestre de 2010. En consecuencia, no ha sido posible cerciorarse del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial N° 6.013 de fecha 23-12-2010, en cuanto a la obligación de una correcta imputación de los compromisos financieros y los pagos a las correspondientes partidas del presupuesto o, en su caso, a créditos adicionales asignados a la Fundación; a la existencia de disponibilidad presupuestaria, de acuerdo con los créditos aprobados en los presupuestos de los años 2007, 2008 y 2009; a que los precios contratados fueran justos y razonables, máxime que las contrataciones estaban amparadas en el Decreto de emergencia institucional; que se cumplieran con las disposiciones legales y reglamentarias, atinentes a pagos, y que los compromisos asumidos fueran ciertos y debidamente comprobados.

De los 100 contratos de obras, 36 no reposaban en los archivos de la Fundación, y los 64 restantes, correspondientes a 8 hospitales, a los que finalmente se circunscribió el análisis de este máximo órgano de control, carecían de documentos comprobatorios sobre la selección y contratación de las empresas, la ejecución de las obras y de sus pagos.⁸

⁸ Mediante comunicación S/N° de fecha 27-07-2012, el Jefe del Departamento del Archivo Central de FUNDEEH, informó a la Comisión de esta Contraloría General, que desconocía información acerca de esos treinta y seis (36) contratos; que hasta el año 2010 FUNDEEH no dispuso de un área física de Archivo, y que hasta esa fecha sólo hubo depósitos de papeles en bolsas negras y en estanterías de metal, desconociéndose su procedencia y contenido. Que fue a partir

Se observó, asimismo, que 46 obras no poseían acta de terminación, que se reducen en el año 2013 a 30, considerando en este contexto que, además, no se dispuso de información sobre 11 contratos.

Por otro lado, un total de 34 expedientes de contratos de obras, carecen de documentos que justifiquen y sustenten los anticipos concedidos a las contratistas. Tampoco existe documentación concerniente a las valuaciones de obras para amortización de anticipo, ni relativa a las órdenes de pago, cheques emitidos, situación de las obras, ni evidencias de acciones por la Fundación, ante los incumplimientos de contratos.⁹

De 9 expedientes de contrataciones realizadas durante los años 2008, 2009 y 2010, en 6 no se evidenciaron las fianzas de anticipo, de fiel cumplimiento y laboral. En 2 contrataciones faltaron las fianzas laborales y en uno la de anticipo, no obstante a la obligación que establecen los artículos 99, 100 y 101 de la Ley de Contrataciones Públicas (LCP), Gaceta Oficial N° 38.895 de fecha 25-03-2008 y N° 39.165 de fecha 24-04-2009.

Al mes de junio del año 2012, la situación de los retrasos era la siguiente: 12 contratos con 4 años de retraso; 11 contratos con 5 años; 5 contratos con 3 años; y, 2 contratos con 2 años, todo ello con sucesivas y prolongadas paralizaciones durante largos períodos, con sus consecuencias en el incremento en los costos y en los deterioros físicos de la infraestructura y equipos, y la privación de servicios asistenciales a la ciudadanía.

del año 2011, cuando comenzó la clasificación, ordenación y organización de los expedientes, y para el 27-07-2012, se habían cuantificado novecientos sesenta (960) expedientes de obras, aun indebidamente estructurados, por cuanto los documentos reposan en diferentes tipos de carpetas, con duplicidad de copias.

9 El Director General de la FUNDEEH, mediante comunicación N° 000088 de fecha 28-08-2012, informó que la elaboración de las órdenes de pago por parte de la Gerencia de Administración y Servicios, se inició en mayo de 2011, y en relación con los expedientes de las obras correspondientes a los años 2007, 2008, 2009 y 2010, la Gerencia de Administración y Servicios no posee ningún documento en físico, ni copias certificadas, por cuanto todos los expedientes de obras, incluyendo facturas, recibos, actas, comprobantes de pago, entre otros documentos exigidos por la Ley, que se encontraban en esa Gerencia, fueron entregados en custodia a la Comisión de Evaluación Institucional de la FUNDEEH, designada mediante Resolución N° 187 de fecha 02-11-2010, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.543 de fecha 02-11-2010. Sobre el particular se precisa mencionar que la Oficina de Administración y Servicios, de acuerdo con el Manual de Organización y Funciones, tiene como función principal de planificar, dirigir y coordinar la gestión administrativa y financiera de la FUNDEEH, mediante una adecuada utilización de los recursos presupuestarios, financieros y materiales, que garantice un servicio oportuno y de calidad, apegado a los principios que rigen la administración financiera pública.

Fueron seleccionadas 36 contrataciones bajo la modalidad de Concurso Privado previsto en la Ley de Licitaciones (LL), (Gaceta Oficial N° 5.556 Extraordinario de fecha 13-11-2001), y su Reglamento (Gaceta Oficial N° 38.313 de fecha 14-05-2005), vigentes para la fecha, a través de invitación de 3 oferentes en cada caso, tal como consta en los Informes de Resultados de los Procesos de Concurso Privado, suscritos por representantes de la Unidad de Contratación. Los 36 procesos antes indicados fueron realizados sin los Actos Motivados emanados del Consejo Directivo que justificaran el procedimiento excepcional de Adjudicación Directa, establecido en el artículo 88 la LL.

Tampoco se evidenciaron los Actos Motivados procedentes de la Unidad encargada de efectuar las contrataciones, que justificaran la selección del oferente adjudicatario y las razones que imposibilitaron el uso de los mecanismos descartados, tal como lo prevé el artículo 29 del Reglamento Parcial del Decreto de Reforma Parcial de la LL (Gaceta Oficial N° 38.313 de fecha 14-05-2005).

Se encontró que 12 contrataciones fueron adjudicadas de conformidad con la Resolución N° 398 de fecha 22-11-2006, en la cual se declara en Emergencia Institucional al Ministerio de Salud (actualmente MPPS), en concordancia con la Resolución N° 160 de fecha 06-08-2007, sin que estuviera precedida por los Actos Motivados emanados del Consejo Directivo de la FUNDEEH, para la utilización del procedimiento excepcional de Contratación Directa, tal como lo establece el artículo 76 de la LCP. Debe señalarse, que aun cuando existe una Declaración de Emergencia Institucional del MPPS y de sus entes adscritos, la cual señala que las contrataciones se realizarían por el procedimiento de Adjudicación Directa, con delegación de su ejecución en la FUNDEEH, la emergencia comprobada prevista para los procedimientos de Contratación Directa, debieron estar justificadas en forma individual, tal como lo prevé el artículo 78 de la LCP.

Por su parte, 11 obras concluidas mostraron retrasos que oscilaron entre cinco 5 meses y 3 años con 10 meses, pese a que el tiempo que se fijó para su ejecución, conforme a las cláusulas de los contratos, no fue mayor a 6 meses para cada una.

En el análisis particular de 32 del total de los 64 contratos por Bs. 169.729.750,17, específicamente celebrados con 10 empresas, se observó lo siguiente:

Empresa A

El total de los 11 contratos celebrados en los años 2007, 2008 y 2009, fue de Bs. 102.364.358,88. Las obras serían ejecutadas en un lapso entre 5 y 9 meses, recibiendo la empresa un anticipo equivalente a 50% del monto total de cada contrato. Respecto a estos contratos la situación es la siguiente:

a) Se observó que 8 obras estaban inconclusas y 3 habían sido culminadas, según se evidencia en actas de terminación. No obstante, no existen Actas de Aceptación Provisional, Actas de Recepción Definitiva y Finiquito de las obras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras¹⁰ (CGCEO), Gaceta Oficial N° 5.096 Extraordinario de fecha 16-09-96.

b) Alcanzada la fecha de culminación de la obra, no se evidenció el Acta de Terminación. A este respecto no existen evidencias de las acciones de la Fundación en los términos del artículo 90 de las CGCEO, referido a que la contratista pagará al ente contratante como cláusula penal una cantidad establecida en el documento principal por cada día de retraso en la terminación de la obra.

c) Diferentes argumentos se involucran para explicar las tardanzas: a) necesidad de modificación del proyecto original, b) demoras en el otorgamiento de divisas para la compra y traslado de materiales, así como la escasez de insumos eléctricos, y c) paralización de obras a solicitud realizada por el personal médico de los hospitales. Sin embargo, no existen soportes de estos argumentos, pese a que el artículo 73 de las CGCEO, establece que la contratista, deberá conocer el lugar y las condiciones donde se construirá la obra, y la Cláusula Décima Segunda de

10 Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras, “Artículo 86: El Contratista notificará por escrito al Ingeniero Inspector con (10) días calendario de anticipación, por lo menos, la fecha en que estime que serán terminados los trabajos con el fin de que se deje constancia de dicha terminación. Cuando los trabajos estén total y satisfactoriamente terminados a juicio del Ingeniero Inspector, se procederá a extender la referida constancia mediante Acta de Terminación que suscribirán el Ingeniero Inspector, el Ingeniero Residente y el Contratista, fecha en que cesarán las eventuales multas.”

los Contratos suscritos establece las causales en la que se puede justificar la paralización de las obras.

d) Respecto a un contrato se observó: i) la Constructora A solicitó prórroga por un lapso de 120 días, sin embargo, no se encontraron documentos que justificaran dicha solicitud, tal como lo establece el artículo 60 de las CGCEO¹¹; ii) la contratista solicitó a la Fundación el reconocimiento de deuda por Bs. 245.000,00, por gastos realizados, en vista de la decisión de rescindir el contrato, al considerar la Fundación que la obra no era una prioridad. No se encontró documentación relacionada con la rescisión ni se encontraron en el Departamento de Archivo informes emitidos por el Ingeniero Inspector¹²; iii) tampoco se evidenció la ejecución de garantías, cláusula penal o rescisión del contrato, conforme a lo convenido en las estipulaciones contractuales y a lo establecido en las CGCEO.

Empresa B

El monto total de contratación para la ejecución de las obras ascendió a Bs. 21.508.368,37, las cuales serían ejecutadas en un lapso de hasta 6 meses. Del análisis efectuado se evidenció:

a) Fue superado el lapso de ejecución referido, por períodos que van desde un 1 a 3 años.

b) Las paralizaciones y prórrogas se fundamentaron en lo siguiente: i) áreas donde se ejecutarían las obras ocupadas por equipos e instalaciones eléctricas; ii) otras áreas con tubos de descargas de aguas servidas y aguas blancas en reparación; iii) obras extras y/o complementarias, no previstas en el presupuesto inicial; y iv) suministro deficiente de materiales eléctricos, mecánicos y de construcción por parte de los proveedores¹³.

11 El artículo 60 de las Condiciones Generales para la Ejecución de Obras indica, que cuando el ente contratante tenga un atraso en los pagos de valuaciones por más de sesenta (60) días calendario por cantidades superiores al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, más el porcentaje que represente el saldo no autorizado del Anticipo, el Contratista tendrá derecho a paralizar la ejecución de la obra hasta tanto se realice el pago, y en este caso se considerará otorgada una prórroga automática por tiempo igual al de la paralización. En todo caso, para ejercer este derecho, el Contratista deberá notificar al Ente Contratante su decisión de paralizar la obra por lo menos con siete (7) días calendario de anticipación.

12 El artículo 45, literal i de las Condiciones Generales para la Ejecución de Obras establece que el Ingeniero Inspector deberá notificar de manera inmediata, y por escrito, al ente contratante, cualquier anomalía con el fin último de establecer el control y la fiscalización de las obras en pro de prevenir cualquier contratiempo que pueda presentarse.

13 En los artículos 73 y 89 de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de

c) Se evidenció Acta de Paralización, fundamentada en el atraso por más de 60 días calendario en el pago de la Valuación N° 2; sin embargo, no se observó en la información correspondiente la notificación por lo menos con 7 días de anticipación que debió realizar la empresa, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 60 de las CGCEO¹⁴.

d) No se evidenciaron Actas de Aceptación Provisional ni Definitiva de las obras, en inobservancia de lo señalado en los artículos 91 y 106 de las CGCEO, en concordancia con los párrafos tercero y cuarto de la Cláusula Séptima del Contrato.

e) Los trabajos de las obras relacionadas con 2 contratos se ejecutaron en su totalidad antes de la suscripción de los mismos, tal como se evidencia en las Actas de Inicio y Terminación de Obra, de lo cual se infiere la ejecución de obras sin contrato y sin garantías, incumplándose lo previsto en el numeral 3 del artículo 38 de la LOCGRSNCF.

f) No se observaron comunicaciones mediante las cuales se evidenciaran diligencias del Ingeniero Inspector para poner en conocimiento al ente contratante de las razones del retraso en la ejecución de las obras, según lo establecido en el artículo 45, literal i de las CGCEO, en concordancia con lo señalado en la cláusula sexta de los contratos.

Empresa C

El monto total de contratación para la ejecución de obras ascendió a Bs. 10.579.944,27. Las obras serían ejecutadas en un lapso de hasta 5 meses, estableciéndose un anticipo equivalente a 50% del monto total de la obra. La Comisión de esta Contraloría, observó:

a) En todos los contratos no se evidenció la terminación de los trabajos en los lapsos previstos, ni la justificación de su incumplimiento.

Obras, se dispone que la empresa deberá conocer el lugar y las condiciones donde se construirá la obra objeto del contrato, por lo que no tendrá derecho a reclamación alguna por dificultades y causas que le fueren directamente imputables; en todo caso, la empresa podrá solicitar una prórroga por lo menos con quince (15) días calendario de antelación a la fecha estimada de terminación de la obra.

14 El artículo 60 de las Condiciones Generales para la Ejecución de Obras, indica que, cuando el ente contratante tenga un atraso en los pagos de valuaciones por más de sesenta (60) días calendario por cantidades superiores al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, más el porcentaje que represente el saldo no autorizado del Anticipo, el Contratista tendrá derecho a paralizar la ejecución de la obra hasta tanto se realice el pago, y en este caso se considerará otorgada una prórroga automática por tiempo igual al de la paralización de la obra. En todo caso, para ejercer este derecho, el Contratista deberá notificar al Ente Contratante su decisión de paralizar la obra por lo menos con siete (7) días calendario de anticipación.

b) No consta que la Fundación hubiere ejecutado las cláusulas penales en los términos del artículo 90 de las CGCEO, según el cual, cuando la contratista no terminare los trabajos en el plazo estipulado, pagará al ente contratante como cláusula penal una cantidad cuyo monto será fijado en el documento principal por cada día de retraso en la terminación de la obra.

c) Fueron suscritas actas de terminación y recepción definitiva de obras que no estaban concluidas. Éstas sólo deben suscribirse cuando los trabajos se encuentran total y satisfactoriamente terminados a juicio del Ingeniero Inspector, tal como lo establecen los contratos firmados y el artículo 86 de las CGCEO.

d) Existen actas e informes de paralización de obra por “problema” para la adquisición e importación de equipos, sin elementos o soportes que permitan justificar esas limitaciones¹⁵.

e) La contratista ejecutó obras complementarias sin la aprobación del ente contratante, y presentó de forma extemporánea la solicitud de variaciones de cómputos métricos para dar continuidad y culminación a trabajos de obra, sin evidencia de su aprobación¹⁶.

f) Transcurridos 3 años y 4 meses desde la suscripción del contrato, la Fundación inició el procedimiento de rescisión fundado en la inobservancia del plazo de ejecución de la obra, acción que se produce de manera extemporánea, considerando el tiempo transcurrido desde la suscripción del mismo y habiéndose visto afectados los intereses colectivos y generales de los ciudadanos.

g) Los informes de seguimiento presentados por el Ingeniero Inspector no incorporan evidencias de la ejecución o avance de las obras, a pesar de haberse suscrito Acta de Inicio. Igualmente, se observó en informes suscritos 3 meses después de vencido el contrato, que la empresa

15 Conforme al artículo 73 de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras, la empresa debió conocer el lugar y condiciones donde se construiría la obra objeto del contrato, tener en cuenta todas las circunstancias relativas a los trabajos, y haber estudiado cuidadosamente los planos y demás documentos técnicos.

16 Ver artículo 45, literal d de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras, según el cual son atribuciones y obligaciones del ingeniero inspector fiscalizar los trabajos que ejecute el contratista y la buena calidad de las obras concluidas o en proceso de ejecución, y su adecuación a los planos, a las especificaciones particulares, al presupuesto original o a sus modificaciones, a las instrucciones del ente contratante y a todas las características exigibles para los trabajos que ejecute el contratista.

C no había iniciado la obra, pese a la obligación contractual de realizar a todo costo y por su exclusiva cuenta, los trabajos estipulados¹⁷.

Empresa D

El monto total de contratación para la ejecución de obras ascendió a Bs. 10.050.919,72, y la empresa recibió, en todos los casos, un anticipo equivalente a 50% del monto total de la obra. En el análisis se observó:

a) De 4 obras contratadas en el Hospital Dr. José María Vargas de Caracas solo una fue concluida, según se desprende de Acta de Culminación; sin embargo, no se evidencia Acta de Recepción Definitiva de la Obra.

b) En todos los contratos, una vez alcanzada la fecha estimada de culminación de las obras, no se evidenció la terminación de los trabajos en los lapsos previstos, ni tampoco justificación de su incumplimiento, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Segunda de los Contratos.

c) Tampoco se evidenciaron las acciones de la Fundación para la aplicación de las cláusulas de garantías y penalidad estipuladas, así como la rescisión de los contratos, en concordancia con los artículos 90 y 116 de las CGCEO.

d) Alcanzada la fecha estimada de culminación de obras y ante la evidente ejecución inoportuna, no se evidenció solicitud de prórroga, de conformidad con lo estipulado en los artículos 88 y 89 de las CGCEO.

e) Se suscribieron Actas de Paralización de Obras, sin razones específicas que justificaran el retraso.

f) No se observaron en los informes de seguimiento las notificaciones de las irregularidades presentadas durante la ejecución de los trabajos.

Empresa E

En fecha 16-11-2007 se suscribió contrato con la empresa E, para el suministro e instalación del sistema de aire acondicionado central en el Hospital Dr. José María Vargas de Caracas, por Bs. 5.999.975,35, acordándose un anticipo de Bs. 2.752.282,26. Los trabajos se ejecutarían en un lapso de 8 meses, sin embargo, se observó:

¹⁷ Ver artículo 45, literal d de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras, antes comentado.

a) A la fecha de inspección de este máximo órgano de control fiscal, 22-11-2010, la obra no se había concluido.

b) No se evidenció solicitud ni acuerdo de prórroga, incumpléndose lo estipulado en el artículo 89 de las CGCEO.

c) No existen evidencias de que la Fundación hubiere demandado indemnización basada en la Cláusula Décima del Contrato. Al respecto: i) no se consideró el pago (mora y penalidad) que debería efectuar el contratista a la FUNDEEH por cada día de retraso, ii) no se ha cumplido con lo indicado en el artículo 116 de las CGCEO.

d) Del acta e informe de paralización se infiere que la contratista no disponía de capacidad para la entrega inmediata de los equipos de aire acondicionado, así como la efectiva paralización de la obra por falta de pago del ente contratante, pero sin cumplir la empresa con el procedimiento establecido en el artículo 60 de las CGCEO.

e) No existen evidencias de que se hubiesen practicado diligencias o tomado decisiones por la administración de la Fundación ante la desviación observada en el lapso de ejecución de la obra. Además, la tardía información del Ingeniero Inspector contrasta con el deber de informar, acerca del avance técnico y administrativo de la obra, según lo establecido en el artículo 45, literal i de las CGCEO.

f) Con fechas 09-02-2011 y 02-03-2011, el Director General y Coordinador de Ingeniería Clínica del Hospital Dr. José María Vargas de Caracas, el Ingeniero Residente de la empresa E, y el Ingeniero Inspector de la Fundación, dejaron constancia en Actas del desvalijamiento de los equipos de la obra, pues a ambas fechas acusaba un retraso de 4 años y 3 meses¹⁸.

Empresa F

El monto total con la empresa F para la ejecución de 2 obras ascendió a Bs. 3.985.472,40, y se acordó un anticipo de Bs. 1.699.562,44. En este caso se observaron las siguientes situaciones:

18 Sobre el particular, las Normas Generales de Control Interno, en su artículo 3, señalan que el sistema de control interno debe estar constituido por políticas, normas, métodos y procedimientos efectivamente implantados con el objeto de salvaguardar los recursos y bienes que integran el patrimonio público. Por su parte, la Ley de Conservación y Mantenimiento de los Bienes Públicos, en su artículo 20, establece que los entes u órganos tendrán a su cargo y bajo su responsabilidad las gestiones permanentes de conservación y mantenimiento de los bienes, equipos y demás instalaciones adscritos o propios.

a) No se evidenciaron actas de aceptación provisional ni definitiva de las obras, requeridas en los artículos 91 y 106 de las CGCEO, en concordancia con los párrafos tercero y cuarto de la Cláusula Séptima del Contrato.

b) La Fundación no ha pagado la valuación única de la obra remodelación del área de hospitalización del Hospital Maternidad Concepción Palacios. La Cláusula Quinta, párrafo tercero del Contrato establece que “la Fundación procederá a la cancelación de la valuación final y de cualquier otra valuación una vez firmada el acta de aceptación provisional”.

c) Los trabajos relacionados con la ejecución de la obra reacondicionamiento de la unidad de terapia intensiva neonatal (UTIN) en el Hospital Maternidad Concepción Palacios, se ejecutaron sin la suscripción de contrato y por consiguiente, sin las garantías que establece el artículo 38 de la LOCGRSNCF.

Empresa G

El Contrato para el Suministro e Instalación de la Red Principal de Gases Medicinales en el Hospital de Niños Dr. José Manuel de los Ríos, fue suscrito transcurridos 5 meses de haberse iniciado la obra y por consiguiente, sin las garantías exigidas en el artículo 38 de la LOCGRSNCF. Asimismo se observó:

a) El monto del contrato ascendió a Bs. 6.190.291,26. Los trabajos se iniciaron, según Acta de Inicio, el 19-08-2008. Habiéndose previsto su culminación para el 19-12-2008, no existe evidencia de Acta de Terminación, por lo que se inobservó lo previsto en la Cláusula Segunda, relativa a la obligación del contratista de ejecutar la obra en un lapso de 4 meses.

b) Tampoco se observaron evidencias de la ejecución de actividades a las que estaba obligado el Ingeniero Inspector, para informar al ente contratante, al menos mensualmente, del avance técnico y administrativo de la obra y de notificar de inmediato cualquier paralización o anomalía que se observara en su ejecución.

Empresa H

Para el Contrato de ejecución de la Obra de Reacondicionamiento General del Servicio de Anatomía Patológica (planta baja y sótano) del

Hospital Dr. José María Vargas de Caracas, valorado en Bs. 1.929.155,81, se otorgó un anticipo de Bs. 964.577,90, y se convino, en la Cláusula Segunda, que la contratista iniciaría los trabajos dentro de los 10 días siguientes a la fecha de su firma y a ejecutarlos en un lapso de 24 semanas. En el análisis se observó que:

a) Para el momento de la firma del contrato ya la obra se había iniciado sin las garantías necesarias y suficientes para responder por las obligaciones que ha de asumir la contratista, tal como lo exige el artículo 38, numeral 3 de la LOCGRSNCF.

b) La obra no se había concluido transcurridos 5 años y 9 meses, a junio 2013, desde la firma del Acta de Inicio.

c) Se constató en Acta de Paralización que se generaron partidas de obras extras que debieron ser aprobadas por el ente contratante debido a la modificación del proyecto en las áreas de trabajo.

d) Transcurridos 2 años y ocho 8 meses desde la fecha prevista de culminación del contrato, y a pesar de lo establecido en el artículo 89 de las CGCEO, se firmó, en fecha 20-06-2011, un Acta de Acuerdo de Prórroga de Ejecución, en la cual se le concedió a la contratista un plazo de 98 días calendario para culminarla.

Empresa I

El Contrato para la ejecución de la Obra de Reacondicionamiento del Sistema de Aguas Servidas del Hospital Maternidad Concepción Palacios, fue suscrito el 30-05-2008 por Bs. 4.755.668,03, y se concedió un anticipo de Bs. 2.377.834,02. En su análisis este máximo órgano de control fiscal observó:

a) Transcurridos 5 años contados desde la fecha del Acta de Inicio (02-06-2008), la obra no se había concluido, a pesar de que en la Cláusula Segunda se estipuló que la contratista iniciaría los trabajos dentro de los 10 días siguientes a la fecha de su firma y los ejecutaría en un lapso de 10 meses.

b) De 14 informes de valuación levantados por el Ingeniero Inspector de la obra, 5 fueron elaborados antes de suscribirse el contrato, dejando en evidencia que la ejecución de la obra se realizó con prescin-

dencia de éste, incumpléndose lo establecido en el artículo 38, numeral 3 de la LOGRSNCF.

c) La obra fue paralizada según Acta de fecha 08-12-2008. No obstante, 3 de los informes presentados por el Ingeniero Inspector, fueron elaborados con posterioridad a la fecha de paralización, lo que evidencia deficiencias en el control y supervisión de la Fundación¹⁹.

Empresa J

La obra de reacondicionamiento de la caldera y red de vapor del Hospital Dr. José María Vargas de Caracas fue contratada en fecha 02-02-2009 por Bs. 2.365.596,08, y se estableció un anticipo de Bs. 1.085.135,82, y un lapso de 6 meses para su ejecución, con fecha estimada de culminación el 02-08-2009. Durante la ejecución del contrato se observó:

a) En la documentación suministrada por la empresa no se encontró evidencia de las Actas de Terminación, las Actas de Aceptación Provisional y de Recepción Definitiva de la Obra, así como el cierre administrativo del contrato.

b) No se observaron acciones de la Fundación, según lo establecido en el artículo 90 de las CGCEO, a pesar de que alcanzada la fecha estimada de culminación, la obra no se había terminado.

c) En fecha 17-04-2009 la empresa tramitó el Acta de Paralización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de las CGCEO. Ahora bien, en recibo de fecha 16-03-2009 consta el pago bajo este concepto por un monto de Bs. 1.085.135,82, por lo que la paralización de la obra se fundamentó en un argumento injustificado. El acta de reinicio fue suscrita el 11-11-2009.

d) En fecha 18-07-2010, 11 meses y 18 días después de la fecha estimada de culminación, la contratista solicitó prórroga argumentando problemas en el abastecimiento de productos, atrasos en la entrega de materia prima, así como retardo en la entrega de insumos. En el acta de paralización se incorporó también como motivo la modificación del proyecto, aun cuando en la revisión efectuada por este máximo órgano

¹⁹ La Cláusula Sexta del contrato establece que: “LA FUNDACIÓN’ ejercerá el control y la fiscalización de los trabajos objeto de este contrato, para lo cual designará un Ingeniero Inspector quien será el representante de ‘LA FUNDACIÓN’ en la presente obra”.

de control fiscal no se evidenciaron documentos de aprobación de modificaciones al proyecto por parte del ente contratante²⁰.

e) No se observaron informes de seguimiento suscritos por el Ingeniero Inspector durante el tiempo de ejecución de la obra, en atención a lo establecido en el artículo 45, literal i de las CGCEO.

Durante los años 2007, 2008 y 2009 se efectuaron trabajos sin la debida aprobación de la Fundación en los siguientes centros de salud: Hospital Maternidad Concepción Palacios; Hospital General del Oeste Dr. José Gregorio Hernández y Hospital de Niños Dr. José Manuel de los Ríos. En algunos casos esas obras fueron emprendidas con unas Cartas de Autorización emitidas por el Presidente y el Director Ejecutivo de la Fundación, acotando en el texto que “esta autorización no implicaba compromiso con la Fundación o el MPPS”, y que la misma tenía una validez de 15 días calendario, a partir de la fecha de su emisión. Como resultado de este impropio e ilegal mecanismo:

a) Se causaron gastos sin cumplir con los requisitos relativos a la previsión de garantías suficientes y necesarias, disponibilidad e imputación presupuestaria y aseguramiento de que se contratara a precios justos y razonables²¹.

20 El artículo 89 de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras, establece que “el ente contratante sólo dará curso a la solicitud de la prórroga si el contratista la presenta por lo menos con quince (15) días calendario de antelación a la fecha de terminación estipulada en el contrato de la obra”. Igualmente, en la Cláusula Décima Segunda del contrato se establecieron las causales que justificarían la paralización, pudiendo considerarse que los argumentos expuestos no resultaron idóneos para justificar la paralización.

21 La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal establece en el artículo 38 que el sistema de control interno que se implante en los órganos y entes, deberá garantizar, que antes de proceder a la adquisición de bienes o servicios, o a la elaboración de contratos que impliquen compromisos financieros, que los responsables se aseguren del cumplimiento de los requisitos siguientes: que el gasto esté correctamente imputado a la correspondiente partida del presupuesto, o en su caso, a créditos adicionales; exista disponibilidad presupuestaria; se hayan previsto las garantías necesarias y suficientes para responder por las obligaciones que ha de asumir el contratista; los precios sean justos y razonables, salvo las excepciones establecidas en otras leyes; y que se hubiere cumplido con los términos de la Ley de Licitaciones, en los casos que sea necesario y las demás leyes que sean aplicables. Por su parte, el artículo 52 de la Ley de Contrataciones Públicas señala que los órganos y entes no pueden otorgar la adjudicación hasta tanto se cuente con la disponibilidad presupuestaria correspondiente. Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público Sobre el Sistema Presupuestario, establece que los créditos presupuestarios se consideran gastados al causarse, y se afectarán con el registro presupuestario del compromiso, entendiendo el trámite como una afectación preventiva de los créditos presupuestarios. Asimismo, el artículo 56, numerales 3 y 4 *eiusdem*, establecen que solo se registrarán como compromisos válidamente adquiridos, los actos que hayan sido dictados previo cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes y que la naturaleza del monto y del gasto esté previsto en una partida

b) Durante los ejercicios económicos financieros de los años 2009 y 2010, la Fundación reconoció deudas por la ejecución de 11 obras por Bs. 72,23 millones, a través de Puntos de Cuentas de reconocimientos de las deudas aprobados por el Consejo Directivo de la Fundación, con suscripción de contratos en fecha posterior a la ejecución de las obras.

c) En los Puntos de Cuentas no existía documentación elemental para la asignación y contratación de las obras, por lo que la Fundación: i) levantó Acta para dejar constancia de la irregularidad; ii) solicitó la inspección de las obras por funcionarios competentes; iii) requirió tramitación de certificación de la deuda por la Gerencia de Administración; y iv) exigió presentación por parte de los contratistas de la Declaración Jurada de la Asignación de la Obra y demás elementos que permitieran probar la existencia de un contrato verbal y de una deuda a favor de las empresas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1.141 del Código Civil (Gaceta Oficial N° 2.990 Extraordinario de fecha 26-07-82).

En las inspecciones fiscales de las obras se dejó constancia de las situaciones observadas en la ejecución, a través de los informes y actas que a continuación se indican:

a) Acta fiscal de fecha 27-05-2011, Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo: i) no se habían culminado las obras iniciadas en los años 2007, 2008 y 2009, esto es, la remodelación, adecuación y aumento de la capacidad de enfriamiento de la planta de agua helada del sistema central de aire acondicionado; la reparación, adecuación y reacondicionamiento de la red de vapor, reemplazo de caldera; el reacondicionamiento de calentadores de agua a vapor y sala de calderas; el suministro, transporte e instalación de unidades manejadoras de aire en diferentes áreas; la reconstrucción y recuperación de la torre de enfriamiento y recuperación de las cavas de alimentos; la construcción de los ambientes necesarios para la instalación de 2 resonadores y anexos de imagenología; la remodelación del servicio de Rayos X; el reacondicionamiento del sistema eléctrico I y II etapa; y, ii) no fue suministrada al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo la planta generadora correspondiente a la obra suministro, transporte e instalación de planta eléctrica, así como la caseta donde se ubicaría dicho equipo con sus sistemas.

b) Informe Definitivo N° 03 de fecha 05-08-2011, Servicio Autónomo Hospital Central de Maracay: no se encontraban en funcionamiento presupuestaria con crédito disponible en el presupuesto vigente.

las obras para el reacondicionamiento del sistema eléctrico, reacondicionamiento de la cocina, reacondicionamiento del sistema de incinerador y construcción de obras de exteriores para la nueva unidad de medicina nuclear.

c) Informe Definitivo N° 05 de fecha 22-08-2011, Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas: no se encontraban iniciadas las obras de suministro e instalación de equipos al vacío y aire comprimido para el sistema de gases medicinales previstas para el año 2008.

d) Informe Definitivo N° 12 de fecha 25-10-2011, Hospital Maternidad Concepción Palacios: de la inspección realizada a las obras de infraestructura, 20 en total, relacionadas con reacondicionamiento, remodelación, mejoras, impermeabilización, suministro e instalación, se observó que: i) 4 de ellas, a la fecha de la actuación fiscal (octubre 2010) se encontraban en proceso de ejecución, ii) 3 obras referidas a los sistemas de electromecánica y electricidad, no fueron culminadas.

d) Informe Definitivo N° 16 de fecha 21-11-2011, Hospital Dr. José María Vargas de Caracas: i) no se encontraban culminadas las obras relacionadas con la ampliación y modernización de las áreas de servicios de emergencia, quirófano y anatomía patológica; ii) asimismo, se evidenciaron filtraciones en las paredes y techo de las obras de impermeabilización de techos y reacondicionamiento de la cocina.

e) Informe Definitivo N° 19 de fecha 29-11-2011, Hospital de Niños Dr. José Manuel de los Ríos: no estaban culminadas las obras de reacondicionamiento del servicio de lavandería, reacondicionamiento de residencias médicas y del servicio de trabajos sociales y remodelación de los quirófanos.

f) Acta fiscal de fecha 08-12-2011, Hospital General del Oeste Dr. José Gregorio Hernández: no se habían concluido obras de infraestructura y servicios relacionados con calderas, red de vapor y planta eléctrica.

Consideraciones finales

Conclusiones

En los 8 centros asistenciales incluidos en la Red de Barrio Adentro III del Sistema Público Nacional de Salud el proceso de selección, contratación y ejecución de obras adelantados por la Fundación, estuvo

signado por debilidades e improvisaciones, en especial aquellas referidas a la supervisión, control y seguimiento, toda vez que se determinaron reiterados incumplimientos de las cláusulas contractuales, por consiguiente, el impacto fue desfavorable en el resultado de la gestión cumplida por la Institución durante el período de los años 2007 al primer semestre de 2010, en cuanto a la consecución de las metas y objetivos en la misión institucional: recuperar, fortalecer y modernizar el Sistema Público Nacional de Salud.

Igualmente, no se evidenció la toma de decisiones o la aplicación de correctivos oportunos, a objeto de ajustar la inversión pública en salud a la satisfacción de necesidades y de generar bienestar, ni la ejecución de acciones administrativas, extrajudiciales y judiciales por cuanto se celebraron contratos con desviaciones en el plazo de ejecución que superaron hasta los 5 años, a pesar de haberse suscrito los mismos en el marco de un decreto de emergencia, que facilitaba o simplificaba los procedimientos administrativos y reducía los tiempos de respuesta en las contrataciones.

Recomendaciones

Se insta a la máxima autoridad jerárquica de la FUNDEEH y a sus niveles directivos y gerenciales a:

Implementar mecanismos orientados a la evaluación, control y seguimiento permanente en la inversión de obras, con la finalidad de medir el avance del contrato, detectar desviaciones y aplicar correctivos oportunos, técnicos y administrativos para hacer cumplir las estipulaciones, ejecutar las fianzas, cláusulas penales o rescindir el contrato, todo ello para salvaguardar los intereses institucionales, minimizar el gasto público y garantizar los servicios de salud.

Promover mecanismos de control y resguardo de activos de información de la FUNDEEH. En este sentido, desarrollar sistemas de archivo que faciliten la organización, consulta y respaldo de expedientes y registros, a objeto de garantizar su unidad, integridad y preservación de datos y documentos que permitan comprobar las operaciones y actividades vinculadas con los procedimientos de selección, contratación, ejecución y pago de contratos.

Revisar la capacidad técnica de las dependencias y comisiones involucradas en las contrataciones públicas e inspección de obras, considerando sus recursos humanos, administrativos, financieros y tecnológicos, a objeto de desarrollar sus fortalezas en el cumplimiento de funciones y competencias.

Emprender acciones administrativas para conocer y decidir sobre el universo de obras inconclusas o paralizadas, determinación de los presuntos daños que hubieran causado al patrimonio público y las estrategias para recuperarlas y ponerlas en servicio en los diversos centros de salud de la Red de Barrio Adentro III.

La Fundación se encuentra obligada a ejercer el control y fiscalización de los contratos, que suscriba con ocasión de adjudicaciones, y velar por el cumplimiento de las obligaciones del contratista, particularmente de la fecha de entrega de las obras, servicios o bienes, a los fines de soportar el cierre administrativo del contrato y el buen manejo de los recursos públicos asignados a la satisfacción de las necesidades en el sector salud.

GESTIÓN DE CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

La gestión de control llevada a cabo durante el ejercicio fiscal del año 2013 se enfocó principalmente hacia la evaluación de importantes sectores de la administración del Estado, así como hacia el análisis de las actividades complementarias que posibilitaron verificar los actos de administración y el manejo de fondos y bienes públicos. Los resultados de las actuaciones permitieron conocer la situación de algunos sectores y proyectos de la Administración Pública, entre ellos: la organización y funcionamiento de los órganos y entes, la rendición de cuentas, la presentación de actas de entrega y contrataciones públicas, entre otros.

El desarrollo de la gestión de control por ámbitos se llevó a cabo de la siguiente manera: en la Administración de los Poderes Públicos Nacionales se orientó a la evaluación de la rendición de cuentas realizada por estos de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), y de conformidad con las Normas para la Formación, Rendición y Examen de la Cuenta de los Órganos del Poder Público Nacional (NFRECOPPN), Gaceta Oficial N° 38.496 de fecha

09-08-2006, según la cual se le atribuye a los órganos de control fiscal dentro del ámbito de sus competencias, efectuar el examen selectivo o exhaustivo, así como la declaratoria de fenecimiento de las cuentas de ingresos, gastos y bienes de los órganos señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11 de la citada Ley, y que plantea como objetivos principales verificar la legalidad, exactitud, sinceridad, corrección y veracidad de la inversión de los fondos públicos.

En la Administración Nacional Descentralizada la gestión de control se enfocó en la organización y funcionamiento de los órganos y entes, además de otras actuaciones. Los principales objetivos estuvieron orientados a verificar si la organización y funcionamiento, así como el proceso presupuestario, se ajustaron al marco normativo que los regula, además de verificar la legalidad de las operaciones administrativas, financieras y presupuestarias.

En la Administración Estatal y Municipal la acción de control se dirigió a evaluar la legalidad y sinceridad de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas relacionadas con el proceso de selección de contratistas, contratación, adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras por parte de órganos y entes; la evaluación selectiva de las operaciones en las áreas de: organización, personal, planificación y ejecución del Plan Operativo Anual; así como a la evaluación de aspectos administrativos y legales vinculados con los pagos efectuados por concepto de emolumentos a la máxima autoridad del órgano de control estatal.

Las actuaciones se practicaron bajo la modalidad de control posterior y en concordancia con los objetivos propuestos, e incluyeron la aplicación de métodos y técnicas para verificar el funcionamiento del control interno.

Los aspectos más relevantes de cada una de las actuaciones en el contexto de los sectores evaluados pueden ser revisados en el libro de “Actuaciones”, anexo a este Informe de Gestión.

Los resultados obtenidos en la gestión de control en la Administración Pública son los siguientes:

CONTRATACIONES PÚBLICAS

De los resultados de la gestión de control se obtiene una percepción general en relación con el proceso de contrataciones públicas, según el

cual: continúan existiendo debilidades en el sistema de control interno de las dependencias responsables de los procesos de selección de contratistas, contratación, y adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, por cuanto se ponen en práctica modalidades de selección de contratistas sin tomar en cuenta los parámetros cuantitativos para cada modalidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento (Gacetas Oficiales N° 39.503 de fecha 06-09-2010, y N° 39.181 de fecha 19-05-2009, respectivamente); y no son ejecutadas las fianzas a los contratistas que incumplen las obligaciones asumidas con la adjudicación de los contratos; los anticipos no son amortizados, y se ejecutan obras no previstas en el presupuesto original, entre otros.

Se concluyeron 6 auditorías operativas y un seguimiento a la acción correctiva, todas ellas orientadas a la evaluación de la legalidad y sinceridad de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas relacionadas con el proceso de selección de contratistas, contratación, y adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras. Estas actuaciones estuvieron dirigidas a evaluar las contrataciones suscritas por el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE), con motivo de la ejecución de los proyectos “Fortalecimiento de la Planta Física” y “Supervisión, Coordinación y Control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)”. En el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (MPPVH) se orientó a la verificación de la ejecución física y financiera del proyecto de construcción de viviendas con kits, adquiridos de una empresa de la República Oriental del Uruguay. En la Fundación Propatria 2000 se verificaron los aspectos administrativos y técnicos contenidos en 3 contratos de obras y 3 inspecciones relacionadas con la construcción de la obra del estacionamiento de la Contraloría General de la República. En cuanto a la Secretaría de Infraestructura del Poder Ejecutivo del Estado Zulia (SIEZ), la actuación se orientó a la evaluación de las operaciones administrativas, presupuestarias y financieras relacionadas con el proceso de selección, contratación y ejecución de la construcción del Distribuidor Vial Cuatricentenario. Asimismo, otra actuación estuvo dirigida a evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos de selección de contratistas, contratación y ejecución de las obras relacionadas con el Proyecto “Centro Productivo y Artesanal Guásimos” en la Alcaldía del Municipio Guásimos del estado Táchira; y por último, una actuación con miras a evaluar los aspectos administrativos, finan-

cieros y legales de los procesos de compras de alimentos importados, desaduanamiento (nacionalización) y almacenamiento de los mismos, vinculados con la ejecución del Plan Estratégico de Emergencia para el Abastecimiento de Alimentos dentro del Territorio Nacional, llevado a cabo por la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. y su filial PDVSA BARIVEN, S.A., Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL), y la Aduana Principal de Puerto Cabello (APPC).

Asimismo, fue realizado el seguimiento a las acciones correctivas emprendidas por la Oficina de Gestión Administrativa del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas (MPPPF), en atención a las recomendaciones contenidas en el Informe Definitivo N° 011 de fecha 19-05-2011, relacionado con la ejecución del contrato de modernización de los 6 ascensores del edificio sede y torre norte del referido Ministerio.

Fallas y deficiencias

Como resultado de la evaluación efectuada por este máximo órgano de control se detectaron una serie de fallas y deficiencias comunes y recurrentes que afectan la gestión de los órganos y entes sujetos a su ámbito de control, las cuales se mencionan a continuación:

En el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MP-PEE):

- No se efectuaron los concursos cerrados para la compra de materiales eléctricos, tal como lo prevé la Ley de Contrataciones Públicas (LCP), cuyo pago total ascendió a Bs. 1.237.118,57 [13.745,76 Unidades Tributarias (U.T)], así como para la adquisición de consumibles para impresoras por un monto total de Bs. 1.169.338,12 (12.992,65 U.T).
- Los servicios contratados para electromecánica, electricidad, mecánica, plomería y albañilería de la torre sede del MPPEE, cuyo monto total ascendió a Bs. 1.724.692,00, se excluyeron de la modalidad de selección de contratistas, por tratarse de una alianza comercial; sin embargo, no se evidenció el documento formal de la misma suscrito por las partes.

En el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat (MPPVH):

- En fecha 14-03-2006 se suscribió un contrato con una empresa de la República Oriental del Uruguay para la construcción de viviendas con kits, el cual fue objeto de 3 *adenda*, en los que se acordaron, entre otros aspectos, la modificación de la cantidad de kits a ser suministrados, reduciéndolos de 12.000 a 8.110, y estableciendo como fecha de culminación del contrato el 31-12-2011. No obstante, se mantuvo el monto inicial pautado por US\$ 155.467.000,00 (Bs. 334.254.050,00) a una tasa de cambio de 2,15 por US\$, y por ende se incrementó el costo promedio de la vivienda de Bs. 27.854,50 a Bs. 41.215,05.
- Para el mes de mayo del año 2011, la empresa había entregado solo 2.150 kits completos y 5.030 kits incompletos de los 8.110 pactados. En cuanto a la construcción de viviendas a la fecha del 02-04-2012 sólo habían sido terminadas 1.473; mientras que 1.611 se encontraban en proceso de construcción y en los centros de acopio se encontraban almacenados 2.848 kits.
- En lo que respecta a los pagos efectuados por el MPPVH, a través de la empresa petrolera estatal, se precisó la ejecución de un total de Bs. 261.987.141,87, incluido en este monto 15,00% de anticipo por Bs. 50.138.107,50, lo que significó un pago en exceso de Bs. 173.374.785,83, en razón de la entrega de 5.030 kits incompletos.
- En inspección efectuada al MPPVH, específicamente sobre una muestra de 920 viviendas en las zonas previstas para su construcción, se determinó que 119 se encontraban en proceso de ejecución, y existían solo 184 losas construidas para instalar los kits adquiridos.
- De igual manera, en la actuación realizada al MPPVH se observó la existencia de losas que no estaban debidamente terminadas por presentar granos, fisuras y eflorescencia; así como, presencia de material dañado, deteriorado e inservible; instalación de componentes de los kits no acorde a lo indicado en el manual de instalación de los mismos; y ubicación de viviendas en zonas que no cuentan con servicios básicos públicos.

En la Fundación Propatria 2000:

- Se constató la rescisión de un contrato, así como la ejecución de acciones para emprender la demanda de la Fundación contra la empresa contratista por incumplimiento del mismo y contra la empresa aseguradora por la ejecución de fianzas.

- Para la culminación de la obra ejecutada por el contratista de la Fundación Propatria 2000, se efectuaron 3 contratos de obras e igual número de contratos de inspecciones, observándose que en 3 de ellos (1 de obra y 2 de inspección) no fue amortizado el monto total de los anticipos.
- De la actuación practicada a la Fundación Propatria 2000 se observó que se ejecutaron obras no contempladas en el presupuesto original, así como trabajos de reacondicionamiento de la rampa vehicular por incompatibilidad entre los planos de estructura y de arquitectura.
- Se constató el incumplimiento del compromiso de responsabilidad social en la obra ejecutada por la referida Fundación.
- Se observaron modificaciones del presupuesto original por omisión y subestimación de obras necesarias para poner en funcionamiento el estacionamiento, sin evidenciarse la justificación de aumento en una partida por parte de la citada Fundación.
- En cuanto a la inspección realizada a la obra llevada a cabo por la mencionada Fundación, se observaron fallas de calidad en columnas, deficiencias en el acabado en los primeros niveles del edificio y se reportaron resistencias menores en columnas referentes al diseño establecido en el proyecto.

En la Secretaría de Infraestructura del Poder Ejecutivo del Estado Zulia (SIEZ):

- Se evidenció que el Contrato N° 2007-OB-050 de fecha 29-06-2007, por Bs. 7.853.025,24, relacionado con la ejecución del proyecto “Construcción del muro de escamas en sentido sur de la vía Sibucara, Municipio Maracaibo del estado Zulia”, fue rescindido de forma unilateral en fecha 12-06-2009, mediante Providencia Administrativa N° 0001632 y ratificada el 09-09-2009 mediante Providencia Administrativa N° 2009/003. Sin embargo, habían transcurrido 3 años desde la rescisión del contrato y no se evidenció la realización de las acciones correspondientes por parte del Servicio Autónomo de Vialidad del estado Zulia (SAVIEZ) hasta su fecha de supresión (30-12-2010), así como, por parte de la Secretaría de Infraestructura del Poder Ejecutivo del Estado Zulia (SIEZ), hasta el 16-08-2012, fecha de la actuación, para la ejecución de las fianzas presentadas por la empresa, debido a que según lo manifestado por la Secretaría de Estado para Asuntos Administrativos, Políticos y Laborales, me-

diante Oficio S/N° de fecha 16-08-2012, las gestiones realizadas para ejecutar las fianzas de forma extrajudicial resultaron infructuosas.

- Se constató en la Secretaría de Infraestructura antes citada, la realización de pagos en calidad de anticipos por Bs. 7.193.951,49, relacionados con los contratos 2006-OB-005, 2006-OB-006, 2006-OB-077 y 2007-OB-050 de fechas 03-02-2006, 03-02-2006, 01-09-2006 y 29-09-2007, respectivamente, para la ejecución de las obras objeto de la actuación, correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 2006 y 2007, sin la presentación previa por parte de la contratista de la Valuación de Anticipo. De igual forma, se pudo constatar esta misma situación en los contratos: SIEZ-2012-033, SIEZ-12-CD-007 y SIEZ-2012-055 de fechas 18-04-2012, 15-05-2012 y 06-07-2012, respectivamente, para la ejecución de las obras objeto de la actuación, correspondientes al año 2012, lo que conllevó al pago de Bs. 10.221.024,30.

En la Alcaldía del Municipio Guásimos del estado Táchira:

- Se evidenció que durante el período de los años 2007-2008, la Alcaldía del Municipio Guásimos del estado Táchira suscribió 9 contratos para la ejecución de obras por Bs. 2.872.070,87, sin que las mismas hayan sido incluidas en las respectivas Ordenanzas de Presupuestos de Ingresos y Gastos de los referidos años; en tal sentido, no contaban con la disponibilidad presupuestaria suficiente para asumir tales compromisos.
- Se detectó la omisión de las disposiciones previstas en la Ley de Licitaciones, vigente para la fecha, por la Alcaldía antes señalada, en cuanto a los procesos de selección de contratistas, al establecimiento del compromiso de responsabilidad social, la suscripción extemporánea de las fianzas de fiel cumplimiento, laboral y a las pólizas de responsabilidad civil y/o falta de suscripción de las mismas.
- En la Alcaldía antes citada se suscribieron contratos por adjudicación directa y/o consulta de precios para la ejecución de una misma obra, siendo que le correspondía proceder, para la escogencia de la empresa contratista, por licitación general, licitación selectiva o concurso cerrado, según el caso, de conformidad con lo previsto en la Ley de Licitaciones vigente para la fecha.
- Para la ejecución del Proyecto “Centro Productivo y Artesanal Guásimos”, la Alcaldía recibió en el año 2005 recursos provenientes

de la Vicepresidencia de la República, destinados a la adquisición del terreno para la construcción del referido Centro, la elaboración del proyecto, el estudio de los suelos y la reubicación del poste de electricidad. Sin embargo, no se evidenció el informe de avalúo del inmueble a ser adquirido, ni las diligencias efectuadas por la administración ante la Dirección Estatal Ambiental Táchira del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, con miras a obtener la acreditación técnica de los Estudios de Impacto Ambiental, ni las gestiones realizadas ante los organismos prestadores de servicios públicos para obtener la certificación de la capacidad de suministro del servicio de agua y electricidad, para el cabal funcionamiento del centro artesanal.

- La Alcaldía de Guásimos firmó 51 contratos en los que se observaron las debilidades siguientes: en 18 contratos las fianzas de fiel cumplimiento fueron suscritas con posterioridad a la firma de las contrataciones, y en 6 contratos no se constituyeron dichas fianzas, ni se evidenció en las respectivas valuaciones la retención correspondiente como sustitución de las mismas. Por otra parte, en 5 contratos las fianzas laborales se constituyeron luego de haber iniciado los contratos, y en 9 contratos no se constituyeron las respectivas fianzas laborales, ni se efectuaron retenciones en los pagos realizados en sustitución de tales fianzas; y para 2 de los contratos no se otorgaron pólizas de responsabilidad civil. Asimismo, para 11 contratos suscritos bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones Públicas, las fianzas de fiel cumplimiento fueron constituidas por sumas equivalentes a 10,00% del monto de las contrataciones, en lugar de 15,00% legalmente establecido.

En Petróleos de Venezuela, S.A. y su filial PDVSA BARIVEN, S.A., Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL), y la Aduana Principal de Puerto Cabello (APPC):

- Se verificó que la empresa PDVSA BARIVEN, S.A., efectuó el pago de 50,00% del monto acordado por concepto de anticipos o adelantos de 4 órdenes de compras, por la suma total de US\$ 18.300.800,00 durante el año 2007, equivalentes a Bs. 39.346.720,00 a la tasa de cambio Bs. 2,15 por dólar, sin haber exigido las respectivas garantías. Esta situación se generó debido a fallas en el sistema de control interno, específicamente en el área de administración de contratos

de PDVSA BARIVEN, S.A., que permitieron que se realizaran pagos sin haberse constituido las garantías necesarias y suficientes al momento de entregar anticipos a la contratista; lo cual dejó en riesgo los recursos públicos invertidos, en caso de incumplimiento por parte de los proveedores.

- Se evidenció que un total de 14.383,42 toneladas de los rubros: leche, arroz, pasta, carne y pollo valorados en US\$ 52.162.019,74 o € 837.000,00, equivalentes a Bs. 114.517.052,44, a un tipo de cambio de 2,15 Bs/US\$ y 2,83 Bs/€, respectivamente, se declararon en estado de abandono legal debido al extravío de los documentos de conocimiento de embarque, requisito este necesario para nacionalizar los referidos productos. Esta situación generó el pago adicional por concepto de almacenaje a las empresas que prestaron este servicio por Bs. 5.557.579,40, debido al retardo en el retiro de las referidas toneladas de alimentos que se consideraban de primera necesidad. Esta situación fue producto de la falta de diligencia oportuna tanto de PDVSA BARIVEN S.A., como del agente aduanal contratado, lo que trajo como consecuencia la declaratoria de abandono legal de las mencionadas mercancías, con el consecuente gasto adicional por concepto de almacenaje, así como el deterioro y congestión en la zona primaria aduanera. Al respecto, debe hacerse notar que existía la alternativa de subsanar la falla mencionada recurriendo al procedimiento señalado en el artículo 103 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas (Gaceta Oficial N° 4.273 Extraordinario de fecha 20-05-91), el cual establece que cuando el consignatario no haya recibido el original del conocimiento de embarque, de la guía aérea o de la guía de encomienda, según el caso, la declaración de mercancías podrá hacerse mediante la presentación de la constancia de pago de las mismas expedida por una entidad bancaria o por el respectivo exportador o proveedor. Cuando alguno de estos documentos no se encuentre disponible para el retiro de las mercancías, deberá presentarse fianza o depósito por el valor de aquellas, incluidos flete y seguro, que exima a la administración de toda responsabilidad ante terceros; una vez entregado el documento original que corresponda, el jefe de la oficina aduanera otorgará el finiquito de la fianza prestada, o la devolución del depósito.
- La empresa PDVSA Bariven, S.A. no realizó la declaración oportuna de la mercancía para su nacionalización, la cual reposaba en

1.711 contenedores de alimentos adquiridos en el exterior y que ingresaron al país durante los años 2008 y 2009 por el Puerto Marítimo de Puerto Cabello, lo que ocasionó que la Aduana Principal de Puerto Cabello (APPC) declarara el estado de abandono legal de las mercancías. No obstante, la empresa PDVSA Bariven, S.A. debió agilizar el desaduanamiento de los referidos alimentos tomando en cuenta lo señalado en los artículos 512, 513 y 514, de la Sección de los Envíos Urgentes del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas. Esta situación evidencia fallas de supervisión en el proceso de nacionalización de las mercancías, lo que trajo como consecuencia que se pagara, desde la fecha de llegada de los referidos contenedores, hasta el momento del levantamiento de las respectivas actas de abandono legal por concepto de almacenaje, un monto total de Bs. 4.281.083,62; y lo que asimismo originó la acumulación en la APPC de grandes cantidades de alimentos, afectando los procesos portuarios de carga y descarga de las mercancías.

- Se evidenció que 121 actas de abandono legal de mercancías emitidas por la APPC-SENIAT, durante el año 2009, fueron suscritas con retrasos de hasta 223 días respecto a los 10 días continuos para el levantamiento de las mismas que establece el artículo 1 del Decreto Presidencial N° 5.872 de fecha 19-02-2008, contados a partir del vencimiento de los 5 días hábiles previstos en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Aduanas para realizar la declaración en la aduana de la mercancía objeto de importación. Esta situación se originó por fallas de la APPC en la supervisión y monitoreo para determinar el momento en que se causa el abandono legal de la mercancía, lo que derivó en que la empresa PDVSA BARIVEN, S.A. pagara por almacenaje un monto adicional no presupuestado, así como la acumulación de contenedores en la zona primaria, contribuyendo a la saturación de los espacios pertenecientes al referido puerto.
- La Dirección General de Saneamiento Ambiental y Contraloría Sanitaria de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), emitió durante los años 2008 y 2009 27 Actas de Comiso, en las cuales se señaló que debían realizarse los trámites pertinentes para la destrucción de 2.714,76 toneladas de alimentos descompuestos, valorados en Bs. 10.556.981,17, de los cuales 1.714,76 toneladas correspondían a pollo y carne (por pérdida de la cadena del frío), y 1.000 toneladas a leche (con fecha de vencimiento cumplida),

almacenadas en los muelles de Puerto Cabello. Esta situación se generó por debilidades en la supervisión, monitoreo y control por parte de las empresas PDVSA BARIVEN, S.A. y PDVAL, así como de las autoridades de la APPC y de las empresas almacenadoras de los contenedores ubicadas en los referidos muelles que poseían dichas mercancías.

- El Área de Control de Almacenamiento y Bienes Adjudicados (ACABA), de la APPC, no cuentan con un registro histórico adecuado sobre el comportamiento del inventario de mercancías legalmente abandonadas para los años 2008 y 2009, así como con una efectiva supervisión del área sujeta a su control en cuanto a la vigilancia que debe ejercerse sobre las mercancías en estado de abandono legal. Este hecho generó retardo en el proceso de levantamiento de las actas de abandono legal y de adjudicación de mercancías que le corresponde ejercer a la Comisión Presidencial para la Disposición Final de Mercancías Legalmente Abandonadas en las Aduanas de Venezuela.

En el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas (MPPPF):

- En cuanto al seguimiento a la acción correctiva efectuado en el MPPPF se detectaron las fallas y deficiencias en la Dirección de Servicios Generales adscrita a la Dirección de Bienes y Servicios Administrativos de la Oficina de Gestión Administrativa, toda vez que no se presentaron los soportes documentales que demuestren el control y fiscalización de la ejecución de la obra.
- No se evidenciaron las fianzas de fiel cumplimiento, laboral y de responsabilidad civil por daños a terceros, como consecuencia del aumento en Bs. 6.327.772,88, [sin Impuesto al Valor Agregado (IVA)], del monto inicial del contrato por Bs. 5,52 millones.

Recomendaciones

En este sentido, en virtud de la importancia de las observaciones señaladas y con la finalidad de que éstas sean subsanadas en beneficio de una gestión administrativa eficiente y eficaz, este máximo organismo contralor recomienda lo siguiente:

Al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica:

- Exhortar a los responsables del manejo presupuestario y financiero en el MPPEE, a que antes de proceder a la adquisición de bienes y servicios, se aseguraren de que se haya cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia.

Al Ministerio de Poder Popular para Vivienda y Hábitat:

- Lograr la sustitución de los kits de viviendas recibidos de manera incompleta, o en su lugar exigir a la referida empresa la entrega de los componentes faltantes, a los fines de completarlos; o, las debidas reparaciones económicas y resarcitorias, hasta la concurrencia de la sumatoria de los precios unitarios de éstos. Asimismo, culminar las viviendas restantes con los kits completos provistos por la contratista, para dar así cumplimiento a la meta de construir 8.110 viviendas proyectadas, en un lapso no mayor a 24 meses.

La Fundación Propatria 2000:

- Deberá efectuar el reforzamiento estructural de los elementos que presentaron baja resistencia en el concreto, recuperar la cantidad de Bs. 281.331,74 y Bs. 3.222,32, por concepto de anticipo contractual no amortizado, y “Transporte no urbano en camiones de tierra” no justificado; continuar con el impulso procesal de la causa por cobro de bolívares a las empresas constructoras; establecer efectivos controles de supervisión y seguimiento en las contrataciones para garantizar la calidad de los trabajos; y exigir el cumplimiento del compromiso de responsabilidad social.

La Secretaría de Infraestructura del Poder Ejecutivo del Estado Zulia deberá:

- Establecer mecanismos de control interno que le permitan asegurarse de que cada vez que se requiera ejecutar una obra se lleven a cabo los procedimientos de selección de contratistas que correspondan según el caso, así como que se apliquen los principios de economía, transparencia, eficiencia, igualdad y competencia, lo que conlleve a la escogencia de las mejores alternativas para la entidad en cuanto a la economía de las ofertas presentadas, así como también lo referido a la capacidad técnica y financiera de las empresas seleccionadas. Adicionalmente, adoptar los mecanismos de control necesarios que contribuyan a la aplicación de los procedimientos previstos en la Ley

de Contrataciones Públicas para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras.

Las máximas autoridades de la Alcaldía del Municipio Guásimos deberán:

- Empezar las acciones conducentes a implementar los procedimientos que garanticen que previo a la suscripción de contratos, se cuente con la debida disponibilidad presupuestaria.
- Implantar en la referida Alcaldía los mecanismos de control necesarios que coadyuven a la aplicación de los procedimientos previstos en la Ley de Contrataciones Públicas para la adquisición de bienes, prestación de servicios y contratación de obras, con miras a garantizar la selección de empresas en términos de economía, igualdad, transparencia y competencia.
- La municipalidad deberá velar porque se constituyan, previamente a la suscripción de los contratos, las garantías necesarias y suficientes que permitan a los contratistas responder por las obligaciones asumidas.
- Se insta a la máxima autoridad municipal a tomar las medidas necesarias para que antes de proponer la inversión de recursos del municipio, se asegure de contar con acreditación técnica del estudio de impacto ambiental y con la certificación de los suministros del servicio de agua y electricidad emanados de los organismos competentes, a los fines de determinar la factibilidad de la ejecución de los proyectos y garantizar la inversión de los recursos públicos.

A PDVAL y PDVSA BARIVEN S.A.:

- Establecer procedimientos de control interno que aseguren el cumplimiento de la exigencia de las garantías necesarias para la entrega de anticipos, por concepto de adquisición de alimentos en el exterior.
- Planificar las compras tomando en cuenta la capacidad de almacenaje y distribución del ente.
- Implementar mecanismos que garanticen el cumplimiento de las diligencias en forma oportuna para el desaduanamiento de alimentos adquiridos en el exterior.
- Establecer dispositivos de supervisión y control, a objeto de que los alimentos perecederos importados no se dañen por la pérdida de la

cadena de frío y que se distribuyan antes de la fecha de vencimiento; así como que los alimentos que se encuentren dañados y no aptos para el consumo humano sean destruidos a la brevedad posible, según lo que indique la respectiva Acta de Comiso emitida por la Contraloría Sanitaria correspondiente.

A la Aduana Principal de Puerto Cabello (APPC):

- Implementar controles que permitan conocer el movimiento, estado y destino final de las mercancías bajo su potestad aduanera, en coordinación con las empresas almacenadoras y depositarias, públicas o privadas, en su carácter de auxiliares de la administración aduanera.
- Formalizar mediante los correspondientes instrumentos normativos, dictados al efecto por la máxima autoridad jerárquica, las actividades y responsabilidades de cada funcionario que interviene en el proceso de la División de Operaciones de la Aduana.
- Implementar las medidas tendentes a mejorar los procesos de supervisión y monitoreo en la división de operaciones, a los efectos de que se autoricen los trámites que correspondan de conformidad con la normativa aplicable.
- Fortalecer el Sistema de Control Interno en ACABA a los fines de implementar adecuados registros de inventarios de las mercancías legalmente abandonadas, evitar el levantamiento de las actas extemporáneas, la acumulación de contenedores y por ende, la saturación de los muelles de Puerto Cabello.

A las empresas de Almacenamiento del puerto marítimo de Puerto Cabello:

- Implementar acciones que le permitan informar oportunamente tanto a los propietarios, como a la gerencia aduanera, la situación y estado de las mercancías que se encuentren resguardadas y custodiadas en sus almacenes, durante los trámites aduanales correspondientes a la nacionalización de las mismas.

Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas (MPPPF):

- Instar a la Dirección de Bienes y Servicios Administrativos del MPPPF a efectuar el control y fiscalización correspondientes hasta la culminación de la modernización de los ascensores.

- Exigir las garantías necesarias a los efectos de salvaguardar a la República de posibles incumplimientos del contrato, daños contractuales de la empresa y ante terceros.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Se realizaron 7 auditorías operativas orientadas a evaluar: el sistema de control interno, el proceso presupuestario, la aplicación del marco normativo, la planificación, y la estructura funcional de los siguientes entes: Fundación Compañía Nacional de Teatro (CNT), Fundación Compañía Nacional de Música, Fundación Imprenta de la Cultura, Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura, Fundación “Casa Nacional de las Letras Andrés Bello”, Fundación Biblioteca Ayacucho e Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas (IABNSB); cuyos alcances se circunscribieron al periodo comprendido entre el año 2009 y el primer semestre del año 2010. En este sentido, se obtuvieron los siguientes resultados:

Fallas y deficiencias

Como resultado de la evaluación efectuada por este máximo órgano de control se detectaron una serie de fallas y deficiencias comunes y recurrentes que afectan la gestión de los órganos y entes sujetos al ámbito de control, las cuales se mencionan a continuación:

- En la Fundación Compañía Nacional de Teatro (CNT) se constató que no se había llamado a concurso público para designar al titular de la Unidad de Auditoría Interna (UAI); que no se encontraban definidas las áreas de control posterior y de determinación de responsabilidades, y que no se disponía de asignación específica de recursos para su funcionamiento. Asimismo, se detectaron debilidades de control interno al encontrarse desactualizados los Manuales de Organización, el Reglamento Interno y las Normas de Procedimientos Administrativos. De la misma manera, el Manual de Normas y Procedimientos del Sistema de Modificaciones Presupuestarias no fue debidamente aprobado, así como el Plan Estratégico 2007-2013 del ente.
- Se constataron debilidades de control interno en las Fundaciones Compañía Nacional de Música, Imprenta de la Cultura, Distribuidora Venezolana de la Cultura, Fundación “Casa Nacional de las Letras

Andrés Bello” y Fundación Biblioteca Ayacucho, al no disponer de instrumentos normativos internos aprobados y actualizados, ni de Manuales de Normas y Procedimientos del Sistema de Modificaciones Presupuestarias; y en los casos de la Fundación Imprenta de la Cultura y Fundación “Casa Nacional de las Letras Andrés Bello”, éstas no informaron sobre la ejecución física financiera del presupuesto a las instancias correspondientes. En las Fundaciones Compañía Nacional de Música e Imprenta de la Cultura, se observó que el patrimonio fue expresado en porcentaje y no en valor nominal de bienes.

- Las Fundaciones: Compañía Nacional de Música, Distribuidora Venezolana de la Cultura, “Casa Nacional de las Letras Andrés Bello”, Biblioteca Ayacucho y el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas (IABNSB), realizaban sus operaciones con estructuras organizativas no aprobadas por el Consejo Directivo. Además, las Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC) fueron creadas solo en las Fundaciones Distribuidora Venezolana de la Cultura e Imprenta de la Cultura, no encontrándose ésta en funcionamiento en el primer caso, y en el segundo, sin ejercer las funciones para la cual fue creada. En las Fundaciones Imprenta de la Cultura, Distribuidora Venezolana de la Cultura, “Casa Nacional de las Letras Andrés Bello” e IABNSB, no se evidenciaron indicadores de gestión.
- En las Fundaciones: Imprenta de la Cultura, Distribuidora Venezolana de la Cultura, “Casa Nacional de las Letras Andrés Bello” e IABNSB, los elementos de planificación como el Plan Estratégico y Plan Operativo Anual institucional no fueron debidamente aprobados. En la Fundación “Casa Nacional de las Letras Andrés Bello” no se elaboró la programación y/o planificación de las contrataciones, y el inventario de bienes carecía de una normativa interna que lo regulara. Por su parte, el IABNSB remitió la programación anual de compras y los sumarios de las contrataciones realizadas al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC) fuera de los lapsos previstos; no remitió los informes de la ejecución presupuestaria a las instancias competentes, y no efectuó el cierre del ejercicio económico financiero del año 2009 en la fecha prevista.
- La Fundación Biblioteca Ayacucho conformó el Consejo Directivo con un número de integrantes distinto a lo que prevé la normativa,

y no contó con una comisión de contrataciones públicas. Asimismo, en las Fundaciones Compañía Nacional de Teatro, y Biblioteca Ayacucho, los funcionarios que manejaron los fondos públicos no presentaron la caución correspondiente.

Recomendaciones

Se requiere que las máximas autoridades adopten acciones correctivas tendentes a impulsar la eficiencia en la gestión pública, en atención a las debilidades evidenciadas en las actuaciones de control.

A la Fundación Compañía Nacional de Teatro:

- Girar las instrucciones pertinentes para iniciar el concurso público para la selección y designación del Auditor Interno, de acuerdo con la normativa que lo rige.

A las Fundaciones Compañía Nacional de Teatro, Distribuidora Venezolana de la Cultura, “Casa Nacional de las Letras Andrés Bello”, Biblioteca Ayacucho, y en el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas (IABNSB):

- Empezar las acciones necesarias dirigidas a formalizar las estructuras organizativas de las UAI de las Fundaciones, así como definir su misión y visión, y dotarlas de recursos en función de las disponibilidades del ente. De la misma manera, delimitar los niveles de autoridad y responsabilidad de cada dependencia.

A las Fundaciones: Compañía Nacional de Teatro; Compañía Nacional de Música; Imprenta de la Cultura; Distribuidora Venezolana de la Cultura, “Casa Nacional de las Letras Andrés Bello”; Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas (IABNSB), y Biblioteca Ayacucho:

- Implantar el sistema de control interno que incluya la actualización del Manual de Organización, el Reglamento Interno, así como el Manual de Normas y Procedimientos Administrativos y el Descriptivo de Cargos, para el funcionamiento del referido sistema.

A las Fundaciones Imprenta de la Cultura; Distribuidora Venezolana de la Cultura, “Casa Nacional de las Letras Andrés Bello”, y el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas (IABNSB):

- Coordinar acciones inmediatas con los responsables de las dependencias que las conforman para elaborar y aprobar el Plan Estratégico, el Plan Operativo Anual y los Indicadores de Gestión, de acuerdo con lo que exige la normativa.

A la Fundación Biblioteca Ayacucho y el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas (IABNSB):

- Elaborar y remitir al SNC la programación y/o planificación por concepto de adquisición de bienes, prestación de servicios y contratación de obras, así como designar la comisión de contrataciones públicas.

EXAMEN DE CUENTAS

Se realizaron 2 exámenes de cuenta, uno en la Unidad Administradora con firma Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) correspondiente al ejercicio económico financiero año 2012, y uno en el Consejo Moral Republicano (CMR) correspondiente al año 2012; ambos con resultados satisfactorios conforme a los procedimientos de auditoría de general aceptación y convencionales para este tipo de actividad; en consecuencia, las respectivas cuentas se declararon fenecidas.

Fallas y deficiencias

En el Consejo Moral Republicano se evidenciaron debilidades en lo que respecta a: el cálculo de intereses sobre prestaciones sociales de antigüedad, medidas de seguridad sobre los activos de información, planificación de las actividades a ejecutar y en la aprobación de instrumentos normativos.

Recomendaciones

Se requiere que las máximas autoridades adopten acciones correctivas tendentes a impulsar la eficiencia en la gestión pública en atención a las debilidades evidenciadas en las actuaciones de control.

El Consejo Moral Republicano deberá:

- Implementar mecanismos de control de acceso al sistema de registro utilizado para el cálculo de sueldos, beneficios otorgados y las deducciones por retenciones: Seguro Social Obligatorio, Paro Forzoso, Ley de Política Habitacional, Hospitalización, Cirugía y Maternidad y servicios funerarios, que corresponden por Ley.

- Canalizar acciones tendentes a la aprobación de los instrumentos normativos: manuales descriptivos de cargos, escala de sueldos y salarios, y el reglamento para la solicitud y trámite de viáticos, por parte de la máxima autoridad.

OTRAS ACTUACIONES

Se concluyeron 9 auditorías de las cuales: 7 son operativas, una de tecnología de la información y una de cumplimiento. Estas estuvieron dirigidas a: evaluar las operaciones administrativas; determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y sublegales que regulan la caja de ahorros, así como el análisis selectivo de los aspectos administrativos y financieros, la legalidad de sus operaciones vinculadas con los aportes del patrono y de los asociados, los retiros mensuales y la constitución y mantenimiento del fondo social integrado por los fondos de ahorro y de créditos; analizar las operaciones administrativas, presupuestarias y financieras relacionadas con el pago de beneficios laborales relativos a cesta tickets, aguinaldos, bonos vacacionales, aumentos salariales y prestaciones de antigüedad; y evaluar una muestra selectiva de los procedimientos de importación y gestiones de cobro de los derechos pendientes en las Aduanas Principales de La Guaira y Maiquetía.

Las auditorías se practicaron en los siguientes órganos y entes: Caja de Ahorros de los Trabajadores de la Contraloría General de la República (CATCGR); Alcaldía del Municipio Pedernales del estado Delta Amacuro; Aduana Principal de La Guaira (APLG) y Maiquetía (APAM); Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA) de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA); Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI); Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre (MPPTT); Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPPS); CVG Internacional C.A. y Banco de Comercio Exterior (BANCOEX); correspondientes a los ejercicios económicos financieros de los años 2010 al 2012.

Fallas y deficiencias

Como resultado de la evaluación efectuada por este máximo órgano de control se detectaron una serie de fallas y deficiencias comunes y recurrentes que afectan la gestión de los órganos y entes sujetos al ámbito de control, los cuales se mencionan a continuación:

- La CATCGR abonaba mensualmente en cuentas de ahorros individuales, el monto correspondiente a 60% de los aportes patronales y de los asociados, no obstante a la normativa dictada por la Superintendencia de Cajas de Ahorros.

En la Alcaldía del Municipio Pedernales se evidenció:

- En la Ejecución Presupuestaria de la partida 4.01.00.00.00 “Gastos de Personal”, correspondiente al ejercicio económico financiero del año 2011, se determinó que la información contenida en la columna denominada: “Pagado”, correspondiente a los registros de la partida presupuestaria 4.01.05.01.00 “Aguinaldos a Empleados” y 4.01.05.04.00 “Aguinaldos a Obreros” de los meses de noviembre y diciembre, así como los correspondientes a la partida presupuestaria 4.01.04.18.00 “Bono Compensatorio de Alimentación a Obreros” del mes de septiembre, discrepan de los montos totales de las Órdenes de Pago emitidas por la administración municipal durante el período en referencia. Esta situación evidencia falta de sinceridad y exactitud en la información presupuestaria generada por la Alcaldía, por cuanto no permite conocer la afectación y disponibilidad real del presupuesto, pudiendo ocasionar limitaciones para adquirir nuevos compromisos producto de la subestimación en las cantidades disponibles, de acuerdo con los registros en la ejecución del presupuesto llevado por la misma.
- La Alcaldía del municipio no contaba con la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio económico financiero del año 2010, circunstancia que limitó la verificación de las afectaciones presupuestarias y financieras. Por otra parte, 4 contratos fueron suscritos durante los años 2010 y 2011 sin prever los créditos presupuestarios en las respectivas ordenanzas, y sin que se aprobaran los créditos adicionales correspondientes, lo que conllevó a que se efectuaran compromisos sin contar con los recursos presupuestarios necesarios para tal fin.
- Cabe señalar que 8 órdenes de pago correspondientes al adelanto de prestaciones sociales por Bs. 101.700,00, carecen de los soportes documentales que demuestren la sinceridad del adelanto; y 3 de éstas estaban destinadas a la adquisición de equipos electrodomésticos, no ajustándose a los supuestos establecidos en la normativa legal que regula la materia.

- La orden de pago N° 0505-2010-DIC de fecha 29-12-2010, por Bs. 40.000,00, por concepto de pago de adelanto de prestaciones sociales, excedía de 75% del pago permitido que debió ser acreditado al funcionario beneficiario, toda vez que el total acumulado a la fecha en prestaciones era por el monto de Bs. 38.216,19, es decir, existía un monto sobrestimado de Bs. 11.337,86.
- En un mismo proceso de selección de contratistas se evidenció la participación de 2 empresas con iguales accionistas mayoritarios, sin que las ofertas presentadas por las mismas hayan sido rechazadas por la comisión de contrataciones. Esta circunstancia impide la sana competencia y no garantiza los principios de transparencia, honestidad, e igualdad, estipulados en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones Públicas (LCP), quedando en desventaja las demás empresas participantes ante esta situación.
- En los procesos de selección de contratistas para la adquisición de bienes, así como para la ejecución de las obras objeto de análisis, la comisión de contrataciones no requirió a las empresas invitadas a dichos procesos, las garantías de mantenimiento de las ofertas previstas en el artículo 65 de la LCP, y las cartas de Declaración Jurada de Cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social presentadas por los participantes durante los procesos de selección de contratistas. Del mismo, no se indica la forma en que se haría efectivo este compromiso, ni el porcentaje del monto del contrato establecido para ello. Estas circunstancias evidencian debilidades en los procesos de selección de contratistas que no permitieron advertir las deficiencias de los pliegos de condiciones, a los fines de garantizar los precios de las ofertas presentadas hasta la fecha de suscripción de las contrataciones, y evitar la discrecionalidad por parte de las empresas en el cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social, y que este compromiso no satisfaga los requerimientos del entorno social del ente contratante.
- En la Alcaldía del municipio se detectaron 9 contratos de obra suscritos sin que se constituyeran previamente las respectivas fianzas de fiel cumplimiento, ni se evidenciara en las valuaciones de obra ejecutada la retención en sustitución de la fianza, a los fines de salvaguardar los recursos y bienes que integran el patrimonio municipal; lo que coloca a la administración en desventaja para ejercer, si

fuere necesario, cualquier acción en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas contratistas.

- En el presupuesto original y modificado, así como en el cuadro demostrativo del cierre de obra de 4 contratos, se incluyó la ejecución de partidas referidas a “Replanteo”, cuya actividad está incluida en el alcance de las restantes partidas de cada presupuesto, razón por la cual no se justifica el pago de la misma de manera adicional. Estas circunstancias conllevaron a pagos a favor de las empresas contratistas por Bs. 62.533,03, por concepto de pago doble relativo a la actividad de replanteo.

En las Aduanas Principales de La Guaira (APLG) y Aérea de Maiquetía (APAM) se evidenció:

- En 3 expedientes de la Aduana Principal de La Guaira (APLG) y en 2 de la Aduana Principal Aérea de Maiquetía (APAM), vinculados con las operaciones relativas al procedimiento de importación de mercancías, no se evidenciaron las respectivas cartas de origen de las divisas.
- En cuanto a los derechos pendientes por recaudación, en la APLG no fueron suministrados 245 expedientes relacionados con las gestiones de cobro; los derechos pendientes para el período comprendido entre los años 1937 y 1996 registran saldos por Bs.17,76 millones, de los cuales no existe soporte físico; y en 11 expedientes con derechos pendientes por Bs. 1,59 millones no fue ubicado el contribuyente. Asimismo, en la APAM se evidenciaron derechos por Bs. 19,26 millones recurridos ante la Gerencia General de los Servicios Jurídicos (GGSJ) del SENIAT o los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario, los cuales a la fecha del 27-09-2013 no habían sido decididos en el período de 60 días continuos previsto en los artículos 254 y 277 del Código Orgánico Tributario (COT).

En el Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA) de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA) se comprobó que:

- De las operaciones llevadas en el SICA de la SADA, los procedimientos plasmados en el documento “Procedimientos de Tecnología de la Información (PTI)” no estaban acordes con los que efectivamente se realizaban, en lo que se refiere a los aspectos siguientes: diagramas de la red institucional, administración del *firewall*, procedimientos

de respaldo y restauración de la información, seguridad de sistemas, procedimientos de servidores y bases de datos en caso de eventualidad, descripción de los roles de acceso e identificación de los servidores para el control de cambios.

- Los respaldos de información que se aplican no están debidamente documentados, por cuanto se encuentran desactualizados; la SADA no posee un sitio alternativo para el resguardo de discos contentivos de la información de la data y base de datos del SICA, toda vez que el Director de la Oficina de Tecnología de la Información guarda los discos contentivos de los respaldos de la base de datos y el aplicativo SICA en su vivienda.

En el Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI):

- La actuación estuvo dirigida a evaluar selectivamente el proceso de certificación como PYMI llevado a cabo por el Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI), el cual clasificó como pequeña industria a 24 empresas que superan la facturación anual de las 100.000 Unidades Tributarias (U.T.), y a 3 empresas como mediana industria, aun cuando las mismas no se ajustan al límite de hasta 100 trabajadores, ni al monto de facturación anual de hasta 250.000 U.T.
- El INAPYMI otorgó 27 certificados como PYMI y 3 constancias de pequeña empresa, sin que las empresas solicitantes cumplan con los requisitos previstos en el Manual del Proceso de Certificación PYMI, además otorgó en los años 2011 y 2012, certificados a 13 empresas que presentaron sus declaraciones de Impuesto Sobre la Renta en Bolívares cero (Bs. 0,00).

En el Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre (MPPTT):

- Se determinaron debilidades de control interno relacionadas con: el resguardo de los expedientes del personal y en la documentación contenida en los mismos, la cual es necesaria a los fines de precisar la base de cálculo de las pensiones y jubilaciones; la existencia de pagos pendientes por concepto de prestaciones sociales; así como correcciones en bases de cálculo por esos rubros, en fechas posteriores que datan de más de 10 meses, en virtud de que no fueron

considerados conceptos tales como bono vacacional, aguinaldos y transporte, horas extras, compensación por evaluaciones, y última remuneración percibida, entre otros, lo que ocasionó un incremento en el monto pagado por estos beneficios.

El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPPS):

- En cuanto a la actuación realizada en el MPPPS, dirigida a verificar el cumplimiento de los procesos administrativos para el desaduanamiento de los productos farmacéuticos, se constató que las adquisiciones de estos productos no obedecen a un adecuado proceso de planificación y programación. Además, se evidenció el incumplimiento del cronograma de ejecución física pues a la fecha del 27-09-2013 solo se había recibido 0,84% de los medicamentos, no obstante a que para esa fecha debían estar entregado 74,00% de los mismos como lo indica el respectivo cronograma; estas situaciones demuestran que no fueron consideradas las disposiciones previstas en los artículos 16 y 17 de las Normas Generales de Control Interno.
- En lo que respecta al desaduanamiento de los productos farmacéuticos, se observó que el agente aduanal declaró la mercancía fuera del lapso de 5 días hábiles previsto en la Ley Orgánica de Aduana, debido a que el MPPPS no suministró la documentación requerida por el SENIAT. Asimismo, posterior a la nacionalización de los mismos se precisó una demora entre 127 y 168 días para que los medicamentos fueran ingresados a los almacenes del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR), lo cual originó pagos adicionales.
- En relación con el despacho de los productos farmacéuticos, no se evidenció el cronograma de distribución para los diferentes centros hospitalarios.

La CVG Internacional C.A. y Banco de Comercio Exterior (BANCOEX):

- En 45 expedientes correspondientes a 12 PYMI que recibieron divisas por US\$ 11,96 millones (Bs.51,43 millones) durante los años 2011 y 2012, no se evidenció el certificado otorgado por el INAPYMI como pequeña y mediana industria, no obstante a que en el Manual para el Agenciamiento de Pequeñas y Medianas Industrias y Cooperativas de Producción de la CVG Internacional C.A., se establece que para la solicitud de trámite de divisas ante BANCOEX, las PYMI

deben tener el certificado nacional de pequeña y mediana industria (Certificado PYMI).

- Se otorgaron divisas por US\$ 1,03 millones (Bs. 4.41 millones) para la adquisición de equipos y repuestos para maquinarias pesadas, aun cuando la actividad principal de la empresa es la importación, exportación, representación y distribución al mayor y al detal de maquinarias y equipos nuevos y usados, entre otros; esto en contravención a lo establecido en el artículo 5, numeral 1, de la Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social (LPDPMIUPS), la cual señala que una PYMI es “Toda unidad organizada jurídicamente con la finalidad de desarrollar un modelo económico productivo mediante actividades de transformación de materias primas en insumos, en bienes industriales elaborados o semielaborados, dirigidas a satisfacer las necesidades de la comunidad”, y al considerar el objeto de la empresa, queda en evidencia que la misma no es una empresa de producción, y por lo tanto los bienes adquiridos no son insumos, materia prima, bienes de capital, ni partes y piezas necesarios para la transformación.
- Se evidenció que se otorgaron divisas por US\$ 1,92 millones (Bs. 12,09 millones) para la adquisición de materiales para ascensores, aun cuando el BANCOEX rechazó inicialmente la solicitud de divisas por tratarse de una PYMI de servicio, tal como lo prevé el precitado artículo 5, numeral 1 de la LPDPMIUPS. Asimismo, se constató que la solicitud de divisas se tramitó con el certificado PYMI vencido.

Recomendaciones

Se estimó conveniente recomendar la adopción de una serie de acciones correctivas en atención a las debilidades antes referidas:

A la CATCGR: adelantar sus procesos de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto, la Ley y su Reglamento, y demás normas aplicables que se dicten para el mejor desenvolvimiento en beneficios de los asociados.

Al Ejecutivo Municipal y a las Direcciones de Recursos Humanos y de Gestión y Desarrollo Urbano de la Alcaldía del Municipio Pedernales, lo siguiente:

- Establecer mecanismos de control que permitan adecuar la formulación y ejecución del presupuesto, a los fines de garantizar los créditos presupuestarios necesarios para asumir los distintos compromisos, así como el correcto inventario de los pagos efectuados con el objeto de preservar la utilidad de los registros como instrumento para la toma de decisiones.
- Implementar mecanismos que permitan garantizar, previamente a la autorización y pago de los adelantos de prestaciones de antigüedad, que estos sean destinados a los fines previstos en la normativa correspondiente y se hayan calculado en los términos establecidos en la misma.
- Adoptar los mecanismos de control necesarios que coadyuven a la aplicación de los procedimientos previstos en la Ley de Contrataciones Públicas para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras.
- Velar porque se constituyan, previamente a la suscripción de los contratos, las garantías necesarias y suficientes que permitan a los contratistas responder por las obligaciones asumidas.
- Respecto a los pagos a favor de las contratistas por concepto de partidas incluidas en los presupuestos, cuyas actividades ya están contenidas en el alcance de otras partidas, se deberán efectuar las gestiones pertinentes a los efectos de la recuperación de los montos correspondientes y remitir a este máximo organismo contralor los documentos probatorios de las acciones emprendidas para este fin.

A la Gerencia de la Aduana Principal de La Guaira y la Aduana Principal Aérea de Maiquetía:

- Fortalecer los niveles de control interno respecto a la documentación que respalda las operaciones aduaneras, a los fines de garantizar la sinceridad y exactitud de la información contenida en los expedientes.
- Sincerar los registros contables de los derechos pendientes, ajustando aquellas deudas que ya han sido pagadas por los contribuyentes.
- Efectuar un seguimiento periódico del estatus en el cual se encuentran los Recursos Jerárquicos y Contenciosos Tributarios pendientes por decisión.

Al Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA) de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA) deberá:

- Adecuar, implementar, documentar y presentar para su aprobación formal las políticas, normas y procedimientos, a fin de garantizar el eficiente y oportuno uso de los recursos de tecnologías de la información y la comunicación, como son: el respaldo, resguardo y restauración de la información, administración y uso del *firewall*, control de acceso (lógico y físico), control de cambios y segregación de funciones.

Al Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI):

- Deberá girar las instrucciones pertinentes, a los fines de diseñar estrategias que garanticen la categorización correcta de las PYMI de conformidad con la norma prevista, así como una clasificación respecto a los vínculos laborales de los trabajadores y el capital.

A la Máxima Autoridad del Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre:

- Tomar las medidas que correspondan con el fin de evitar el retraso en el pago de las prestaciones sociales de los trabajadores.
- Diligenciar lo pertinente, a los fines de honrar el pago pendiente por concepto de las prestaciones sociales correspondientes a los años 2007 al 2010 por Bs. 5,05 millones, así como lo correspondiente a las pensiones de sobrevivientes de obreros por Bs. 6,12 millones.
- Informar a este máximo organismo contralor acerca de la materialización del pago de las prestaciones sociales por parte del fondo de prestaciones sociales por Bs. 2,94 millones, de los años 2007 al 2010, así como por Bs. 652,65 mil correspondientes al año 2011 y el primer semestre del año 2012.
- Continuar con los trámites ante la Oficina de Tecnología de la Información y Desarrollo Organizacional, para la elaboración de los manuales de normas y procedimientos en materia de jubilaciones y de prestaciones sociales.
- Establecer una adecuada coordinación con las direcciones regionales, en lo que respecta al suministro de la documentación relacionada con el historial de servicio del trabajador; así como establecer mecanismos de control que faciliten un adecuado sistema de archivo de los expedientes del personal, y mantener la documentación actualizada.

A la máxima autoridad del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPPS):

- Planificar y programar la adquisición de productos farmacéuticos con base en estudios y diagnósticos actualizados; establecer mecanismos de control que garanticen la tramitación oportuna de los documentos y requisitos para el desaduanamiento y nacionalización de los productos farmacéuticos, así como el retiro de los mismos de los almacenes ubicados en el Puerto de La Guaira, con el fin de evitar pagos adicionales de almacenamiento y accionar con las redes de servicio de salud pública la distribución de los medicamentos de manera inmediata a los centros de salud.

A la máxima autoridad de la CVG Internacional, C.A.:

- Tomar las previsiones necesarias, a los efectos de corregir las fallas y omisiones encontradas en la documentación, así como en la supervisión de las labores efectuadas por los distintos analistas, y en la verificación y validación de la información suministrada por las empresas solicitantes; girar las instrucciones pertinentes a los fines de diseñar estrategias para verificar que toda PYMI que solicite el servicio de agenciamiento se encuentre debidamente certificada por el INAPYMI; y ejercer las acciones correspondientes en los casos específicos en que se detectaron irregularidades.

Al presidente del BANCOEX:

- Girar las instrucciones pertinentes a los fines de ampliar los mecanismos de control interno para el otorgamiento de divisas a las PYMI.

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL

En el ámbito de la administración de los Poderes Públicos Nacionales fueron evacuadas consultas formuladas por los órganos siguientes: Ministerio del Poder Popular de Comunicación y la Información (MPPCI), Ministerio del Poder Popular para el Transporte Acuático y Aéreo (MPPTAA), Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), Viceministerio de Planificación y Política Industrial del Ministerio del Poder Popular de Industria, Secretaria General Ejecutiva del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (SGE-MPPRE), Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Fiscalía Militar Décima Quinta del Ministerio del Poder Popular para la Defensa

(MPPD), Superintendencia Nacional de Costos y Precios (SUNDECOP), así como por un ciudadano a través de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de este máximo órgano de control, entre otras.

Del total de las consultas formuladas se destacan:

- El Secretario General Ejecutivo del MPPRE consultó cómo se debe realizar el pago de vacaciones para un funcionario en condición de encargado, cuando la encargaduría se materialice con posterioridad al 31 de octubre. Al respecto, la CGR indicó que la cantidad a tomar en cuenta para el cálculo de la bonificación de fin de año sería proporcional, con base en el sueldo integral devengado por el funcionario para el momento de su nombramiento.
- La Fiscalía Militar Décima Quinta del MPPD consultó sobre la normativa vigente aplicable en relación con la desincorporación de materiales de desecho que contengan cobre, a los fines de determinar la comisión de un hecho punible. Sobre lo indicado, se sugirió remitir la consulta en referencia a la Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX) de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Reglamento Orgánico del MPPD (Gaceta Oficial N° 39.139 de fecha 16-03-2009).
- La SUNDECOP, órgano en principio adscrito a la Vicepresidencia de la República, solicitó la interpretación del artículo 2 de las Normas para la Formación, Rendición y Examen de las Cuentas de los Órganos del Poder Público Nacional, en cuanto a su ámbito de aplicación, este máximo órgano de control señaló que la SUNDECOP está sujeta al ámbito de aplicación de las referidas Normas por tratarse de un órgano desconcentrado.
- Por otra parte, la SUNDECOP actualmente adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Comercio (MPPC) según Decreto N° 333 de fecha 13-08-2013, consultó a este máximo órgano de control acerca del régimen presupuestario y contable que debe aplicar. Al respecto, este órgano superior de control se pronunció sobre los fundamentos de derecho, estableciendo que debe cumplirse con las disposiciones previstas en las Normas Generales de Contabilidad del Sector Público (NGCSP), Gaceta Oficial N° 36.100 de fecha 04-12-96, la LOAFSP y sus Reglamentos N° 1 y 4, sobre el Sistema de Contabilidad Pública (Gaceta Oficial N° 5.623 Extraordinario de fecha 29-12-2002).

- Un particular, a través de la OAC de este máximo órgano de control, solicitó la interpretación del alcance y aplicación del criterio para calificar la formación académica, en relación con el Reglamento sobre Concursos Públicos para la Designación de Contralores Distritales y Municipales, Titulares de las Unidades de Auditoría Interna del Poder Público Nacional, Distrital y Municipal. Al respecto, este órgano superior de control sostiene que tal competencia le corresponde a la Oficina de Consultoría Jurídica del MPPE, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, numeral 5 del Reglamento Orgánico del MPPE (Gaceta Oficial N° 39.032 de fecha 07-10-2008).

En el ámbito de la Administración Nacional Descentralizada se llevaron a cabo 719 actividades de apoyo, entre las cuales destacan las consultas evacuadas que fueron formuladas por diferentes entes cuyo control le compete a este máximo órgano de control, relacionadas fundamentalmente con: el control fiscal, las contrataciones públicas, y el presupuesto y bienes. Asimismo, se enviaron 468 oficios circulares de lineamientos en materia de control y se dimensionaron 72 entes; además, se realizaron 56 asesorías técnico-legales, entre otros aspectos, según se relacionan a continuación:

CUADRO N° 28
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL
EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DESCENTRALIZADA
AÑO 2013

CONCEPTOS	CANTIDADES
Actualización Información Básica de Entidades	35
Dimensionamiento de Entes	72
Revisión y análisis de presupuestos de Entes	18
Asesoramiento Técnico-Legal	56
Minutas Suscritas de reuniones realizadas con funcionarios de los entes sujetos al control	26
Revisión de Informes de Gestión y de Actuaciones que envían los entes de acuerdo con su gestión	10
Revisión de los oficios relacionados con el seguimiento de las acciones correctivas realizadas por los Entes	7
Oficios circulares de lineamientos en materia de control fiscal	468
Reconceptualización de denuncias	17
Revisión del Plan de Acciones Correctivas de los Informes emitidos por esta CGR	3
Revisión de nóminas por concepto de Emolumentos, Pensiones, Jubilaciones y Beneficios de los Altos Funcionarios, Personal de Alto Nivel y de Dirección	5
Análisis del Manual de Organización y Funcionamiento	1
Informe de actividades especiales	1
TOTAL	719

En el ámbito de la Administración Estatal y Municipal se realizaron 778 actividades de apoyo a la Gestión de Control, tanto en la administración estatal como en la municipal, de acuerdo con lo que se detalla a continuación:

CUADRO N° 29
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL
EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL Y MUNICIPAL
AÑO 2013

CONCEPTOS	CANTIDAD
Consultas telefónicas	683
Consultas presenciales	45
Revisión de la ejecución presupuestaria de las entidades estadales	25
Análisis de las 25 Leyes de Presupuesto de Ingresos y Gastos de las entidades estadales	25
TOTAL	778

En este sentido, es importante destacar que fueron atendidas consultas telefónicas, presenciales y audiencias realizadas por parte de distintos entes y organismos que forman parte del Poder Público estatal y municipal, segregadas de la manera siguiente: 683 telefónicas y 45 consultas presenciales; entrevistas y audiencias solicitadas a este máximo órgano de control por las máximas autoridades estadales y municipales, así como por las comunidades organizadas, relacionadas con: criterios de prestaciones sociales, creación de unidad de bienes, fondos de caja chica, funcionamiento de la unidad de auditoría interna y actas de entrega, materia presupuestaria, materia de concurso público, emolumentos y organización del personal, entre otras del ámbito municipal.

Se efectuó un análisis de la pertinencia de autorizar que las funciones de Control Fiscal Interno de la Fundación para el Desarrollo Integral y Capacitación de la Contraloría del Estado Monagas (Fundicem), fueran asumidas por la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría del referido estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. En tal sentido, este máximo órgano contralor consideró conveniente autorizar a la Junta Directiva de Fundicem, la no creación de la Unidad de Auditoría Interna propia, y que las funciones de Control Fiscal Interno de la misma sean ejercidas por la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría del Estado Monagas.

POTESTAD DE INVESTIGACIÓN

Se realizaron 1.413 valoraciones jurídicas a igual número de informes definitivos de actuaciones de control, tales como auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, estudios o análisis, entre otras, efectuadas por las Direcciones de esta Contraloría General u otros órganos de control fiscal en ejercicios fiscales anteriores, para determinar la procedencia de acciones fiscales, civiles o penales, y con el objeto de iniciar los correspondientes procedimientos, a fin de establecer las responsabilidades a que hubiere lugar, o remitir dichas actuaciones a los órganos o autoridades competentes para ello.

Como resultado de las referidas valoraciones jurídicas se determinó la existencia de méritos suficientes para iniciar 22 potestades investigativas, por cuanto se detectaron elementos de convicción o prueba que evidencian la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a las normas legales o sublegales susceptibles de ser sancionados con responsabilidad administrativa o que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, por los eventuales perjuicios pecuniarios ocasionados al patrimonio público, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF).

En el ámbito de control de la Administración de los Poderes Públicos Nacionales se revisaron 105 informes de actuaciones de control correspondientes a hechos ocurridos en el año 2013 y anteriores, a los fines de determinar en cuáles de ellos existían méritos suficientes para ejercer la potestad de investigación con fundamento en el artículo 77 de la LOCGRSNCF; producto de esa revisión:

- a. En uno de los informes se determinó la existencia de méritos suficientes para iniciar el ejercicio de la potestad de investigación, de cuyo resultado este organismo contralor ordenará el archivo de las actuaciones realizadas o el inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, tal como lo establece el artículo 81 de la LOCGRSNCF.
- b. En 104 informes se ordenó el archivo, en atención a los supuestos para la desestimación establecidos en los Lineamientos para el Ejercicio de la Potestad de Investigación, Imposición de Multas Previstas en el Artículo 94 de la LOCGRSNCF, Desestimación de Resultados de las Actuaciones de Control y Tramitación de Expedientes Remitidos de

conformidad con lo previsto en el Artículo 97 LOCGRSNCF (Resolución N° 01-00-055 de fecha 16-02-2004), en concordancia con las disposiciones expuestas en el Manual de Normas y Procedimientos en Materia de Potestad Investigativa (Resolución N° 01-00-000157 de fecha 15-09-2008), por no surgir elementos de convicción o prueba que hicieran presumir la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, daños causados al patrimonio público, ni la procedencia de acciones fiscales.

Por otra parte, y en atención a la obligación que tienen los órganos de control fiscal de participar a la Contraloría General de la República sobre el inicio de potestades investigativas, de conformidad con lo dispuesto en el último aparte del artículo 97 de la LOCGRSNCF, fueron recibidas 42 participaciones por parte de estas dependencias.

En la Administración Nacional Descentralizada se revisaron 560 informes de actuaciones de control, correspondientes a hechos ocurridos durante el año 2013 y anteriores, a los fines de determinar en cuáles de ellos existían méritos suficientes para ejercer la potestad de investigación con fundamento en el artículo 77 de la LOCGRSNCF; de lo anteriormente mencionado se desprende lo siguiente:

- a. En 11 informes se determinó la existencia de méritos suficientes para iniciar el ejercicio de la potestad de investigación, de los cuales 10 están concluidos y uno se encuentra con auto de proceder en proceso.
- b. En 549 informes se ordenó el archivo, en atención a los supuestos para la desestimación establecidos en los Lineamientos para el Ejercicio de la Potestad Investigativa, Imposición de Multas Previstas en el Artículo 94 de la LOCGRSNCF, Desestimación de los Resultados de las Actuaciones de Control y Tramitación de Expedientes Remitidos, de conformidad con lo Previsto en el Artículo 97 LOCGRSNCF (Resolución N° 01-00-055 de fecha 16-02-2004), y en concordancia con las disposiciones expuestas en el Manual de Normas y Procedimientos en Materia de Potestad Investigativa (Resolución N° 01-00-000157 de fecha 15-09-2008), por no surgir elementos de convicción o prueba que hicieran presumir la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, daños causados al patrimonio público, ni la procedencia de acciones fiscales.

Finalmente, en el ámbito de la Administración Estatal y Municipal se tramitaron 748 informes de actuaciones de control correspondientes a hechos ocurridos en el año 2013 y anteriores, a los fines de determinar en cuáles de ellos existían méritos suficientes para ejercer la potestad investigativa con fundamento en el artículo 77 de la LOCGRSNCF; de lo cual se desprende lo siguiente:

- a. En 10 informes se determinó la existencia de méritos suficientes para iniciar el ejercicio de la potestad de investigación, de los cuales 4 fueron concluidos, 2 están en proceso de notificaciones, uno se encuentra en proceso de auto de apertura, y 3 en proceso de informe de resultados, con base en el cual este máximo organismo contralor ordenará el archivo de las actuaciones realizadas o el inicio del procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, tal como lo establece el artículo 81 de la LOCGRSNCF.
- b. En 738 informes se ordenó el archivo, de acuerdo con los Lineamientos para el Ejercicio de la Potestad Investigativa, Imposición de Multas Previstas en el Artículo 94 de la LOCGRSNCF, y Desestimación de Resultados de las Actuaciones de Control y Tramitación de Expedientes Remitidos de Conformidad con lo previsto en el Artículo 97 LOCGRSNCF (Resolución N° 01-00-055 de fecha 16-02-2004), en concordancia con las disposiciones expuestas en el Manual de Normas y Procedimientos en Materia de Potestad Investigativa (Resolución N° 01-00-000157 de fecha 15-09-2008), por no surgir elementos de convicción o prueba que hicieran presumir la ocurrencia de actos, hechos u omisiones, contrarios a una disposición legal o sublegal, daños causados al patrimonio público, ni la procedencia de acciones fiscales.

Por otra parte, en atención a la obligación que tienen los órganos de control fiscal de participar a la Contraloría General de la República el inicio del ejercicio de la potestad investigativa, de conformidad con lo dispuesto en el último aparte del artículo 97 de la LOCGRSNCF, durante el ejercicio fiscal 2013, se recibieron 564 notificaciones.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

ACCIONES FISCALES

Durante el ejercicio fiscal del año 2013, la Contraloría General de la República (CGR) determinó la responsabilidad administrativa de 65 personas naturales y jurídicas, y aplicó igual número de multas por la cantidad de Bs. 1.158.919,55. Asimismo, se dictaron 10 decisiones de sobreseimiento. De las declaratorias de responsabilidad administrativa, 39 quedaron firmes en sede administrativa y 26 se encuentran en fase recursiva. Por su parte, debido al perjuicio causado al patrimonio público, se formularon reparos cuya sumatoria alcanza Bs. 43.911.323,00.

Por otra parte, en el año 2013 quedaron firmes en sede administrativa, decisiones del año 2012 en las que se declaró la responsabilidad administrativa de 32 ciudadanos, acción que generó la imposición de sanciones pecuniarias por Bs. 592.824,25 y de reparo por Bs. 2.362.856,36.

Adicionalmente, conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se procedió a la valoración de decisiones declaratorias de responsabilidad administrativa remitidas por los órganos de control fiscal, y que luego de ser evaluadas según la entidad del ilícito cometido o la gravedad de la irregularidad, se impusieron 107 sanciones accesorias a la declaratoria de responsabilidad, de las cuales: 6 corresponden a suspensión sin goce de sueldo de cualquier cargo, en la fase recursiva; y 101 a Inhabilitaciones para el Ejercicio de Funciones Públicas, de las cuales 20 de ellas quedaron firmes en sede administrativa y 81 en proceso de fase recursiva. Igualmente, en el presente año, quedaron firmes 3 sanciones accesorias a la declaratoria de responsabilidad administrativa del año 2012, y en 106 expedientes no dieron lugar a la aplicación de las sanciones a que alude la referida disposición normativa. Por otra parte, se recibieron 140 decisiones de declaratoria de responsabilidad administrativa, emanadas por los demás órganos que conforman el Sistema Nacional de Control Fiscal, a los fines de que sean impuestas las sanciones a las que alude el artículo *in comento*.

Aunado a esto, se solicitó al Ministerio Público el ejercicio de las acciones respectivas a los fines de hacer efectiva la eventual responsabilidad penal en 3 casos, en atención a los hechos que motivaron su declaratoria de responsabilidad administrativa. Por su parte, en apoyo a las investigaciones practicadas por esa entidad fiscalizadora se atendieron

29 requerimientos vinculados con solicitudes de información y designación de expertos; se remitieron 24 informes de actuaciones fiscales y 6 expedientes administrativos.

Atendiendo a las solicitudes de las máximas autoridades de los órganos y entes del sector público, se consultó la situación de 13.054 ciudadanos en el Registro de Inhabilitados llevado por este órgano de control fiscal, a los fines de verificar su situación administrativa, antes de proceder a su ingreso a la Administración Pública.

De igual forma, se atendieron 53 solicitudes de los jurados calificadores de los concursos públicos, las cuales comprenden 317 consultados a los fines de verificar el cumplimiento, entre otros requisitos, de la solvencia moral de los aspirantes a los cargos, en atención de lo previsto en el Reglamento de Concursos Públicos para la designación de los Contralores Distritales y Municipales y los titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los órganos del Poder Público Nacional, Estatal, Distrital y Municipal y sus entes descentralizados, vigente.

DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO

La Contraloría General de la República durante el ejercicio fiscal del año 2013, recibió 386.934 declaraciones juradas de patrimonio (DJP) a través del “Sistema para la Presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio en Formato Electrónico” (DJPWEB) de las cuales 355.566 corresponden a funcionarios o empleados públicos, por los conceptos que se detallan a continuación: 136.197 por ingreso, 89.391 por cese en el ejercicio del cargo o función, y 129.978 por actualización patrimonial correspondiente a los funcionarios que ejercen cargos de alto nivel o de confianza, en los órganos y entes del Poder Público. A las declaraciones anteriores se suman 28.845 que corresponden a integrantes de los consejos comunales y 2.523 a integrantes de las juntas directivas de los sindicatos.

En cuanto a los servicios de tecnología prestados por la Contraloría General de la República a través de la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio, este año se asumió el reto de apoyarse aún más en la tecnología como herramienta estratégica a través de sus Sistemas de Información [Sistema de Administración de Registro de Órganos y Entes-CGR (SISAROE), Sistema de Registro de Órganos y Entes (SISROE), y DJPWEB] por lo que se instruyó a los distintos usuarios responsables

de las unidades de recursos humanos a que catalogaran y registraran a sus funcionarios a través del SISROE, en lo relativo a sus máximas autoridades y cargos de alto nivel o de confianza, antes del proceso de actualización realizado en el mes de julio, lográndose con ello la actualización de la situación patrimonial de los funcionarios de alto nivel o de confianza, permitiendo sincerar el universo de tales funcionarios así como de los órganos y entes activos.

Igualmente, se incorporó al SISAROE una aplicación para controlar y enviar notificaciones vía electrónica; es importante destacar que de los 3.764 procedimientos sancionatorios para la imposición de multas tramitados para el año 2013, derivados del incumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio con ocasión al proceso de actualización correspondiente al mes de julio, 3.715 se notificaron mediante esta aplicación, y la diferencia de 49 por los mecanismos regulares, conforme a lo dispuesto en el marco normativo relacionado con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, Ley Orgánica de Simplificación de Trámites Administrativos y la Ley Contra la Corrupción.

Por otra parte, en el servicio de asistencia telefónica al usuario 0800-DECLARA, se atendieron 43.045 llamadas relacionadas con la DJPWEB, de igual modo, en las instalaciones del órgano contralor se atendieron 18.702 ciudadanos con diversos requerimientos relacionados con la declaración de su situación patrimonial, a su vez, se efectuaron 27.737 solicitudes de servicios vinculadas con el Sisroe, y se incorporaron 878 nuevos órganos y entes en el sistema para un total de 3.744 órganos y entes registrados en el Sistema, no obstante de ese universo sólo 2.920 órganos y entes han registrado movimientos.

Adicionalmente, con el propósito de reforzar los aspectos técnicos y legales relacionados con la DJP y la verificación patrimonial, se dictaron 6 actividades de facilitación, de las cuales 2 fueron internas y 4 externas, dirigidas al Ministerio Público.

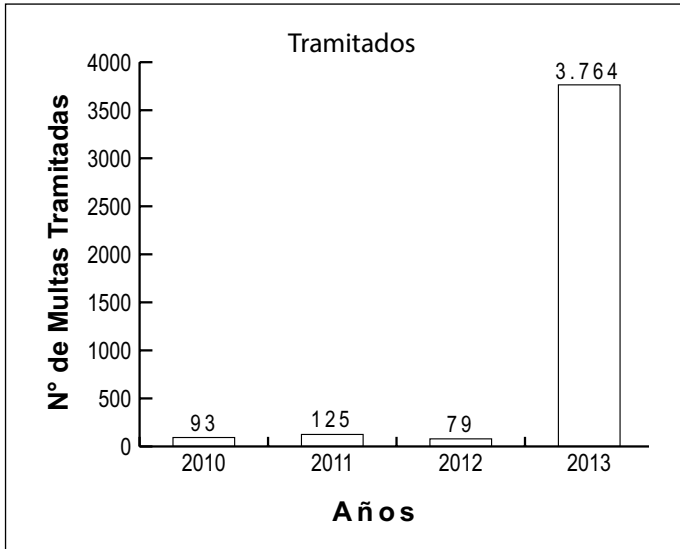
En atención a lo previsto en el artículo 29 de la Ley Contra la Corrupción se iniciaron 20 verificaciones patrimoniales durante el ejercicio fiscal del año 2013, que aunado a 16 expedientes de verificación que se habían iniciado en años anteriores, constituyen un total de 36 expedientes de auditoría patrimonial, de los cuales 30 se encuentran en etapa de

sustanciación y 6 fueron concluidos con hallazgos en las situaciones patrimoniales objeto de estudio, por revelar desproporción entre la situación patrimonial de los funcionarios o empleados públicos verificados, con respecto a sus posibilidades económicas, lo que determinó fondos administrados no justificados por Bs. 7.779.824,44; y en consecuencia se declaró la no veracidad de las DJP presentadas, así como de las situaciones patrimoniales verificadas. Cabe destacar, que durante el año 2013 se remitieron 9 expedientes al Ministerio Público, de estos, 5 corresponden a auditorías concluidas en el año 2013, y un expediente se encuentra en trámites para su remisión a ese organismo, los cuales se detallan en el apéndice; asimismo se remitieron 4 expedientes correspondiente al año 2012. Es importante señalar que esta remisión se realiza con el fin de que ejerzan las acciones respectivas en virtud de la existencia de indicios de responsabilidad civil y penal por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, así como falseamiento u ocultamiento de información patrimonial, previstos en la Ley Contra la Corrupción.

En otro orden de ideas, durante el año 2013, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 33 y siguientes de la Ley Contra la Corrupción, se tramitaron 3.764 procedimientos para la imposición de multas, de las cuales 3.716 se iniciaron en el año 2.013 y 48 de años anteriores. Fueron decididos 3.762, a saber: 139 por no imposición de multa, 13 revocados, 2.499 en etapa recursiva lo que representa 125.062,50 Unidades Tributarias (U.T.) y resultando 1.111 firmes en sede administrativa (67.325,00 U.T.) para un total general de 192.387,50 U.T.

Respecto a los resultados de las actuaciones realizadas por la Contraloría General de la República, específicamente en los procedimientos para la imposición de multas, se observa un incremento sustancial en comparación a los años 2010, 2011 y 2012, en las cuales se tramitaron 93, 125 y 79 multas respectivamente, impulsadas por los servicios de tecnología SISAROE, SISROE y DJPWEB, lográndose este año la notificación masiva de dichas multas, lo cual simplificó los trámites, tiempos de espera y consecuentemente los costos, promoviendo así la lucha permanente contra la corrupción, que ha mantenido el órgano contralor en aras de fomentar la ética, la probidad y la transparencia en la Administración Pública, de conformidad a lo que establece la Ley Contra la Corrupción (Gaceta Oficial N° 5.637 Extraordinaria de fecha 07-04-2003) tal como se detalla en el gráfico siguiente:

GRAFICO N° 1
PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS
AÑO 2013



Finalmente, se practicaron actuaciones especiales relacionadas con 2 avalúos, solicitados por la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de Gestión de Gobierno, referentes a bienes ofertados para la adquisición de órganos del sector público, tales como la Hacienda Tácata Arriba y el Hotel Ávila, ubicadas en el sector de Tácata del estado Miranda y San Bernardino del Distrito Capital, cuyo valor de mercado obtenido del análisis realizado fue de Bs. 48.194.000,00 y Bs. 333.300.000,00; respectivamente.

ASESORÍA Y APOYO

ASUNTOS TÉCNICOS

SISTEMAS DE CONTROL

La Contraloría General de la República (CGR) como órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, en cumplimiento de: las competencias vinculadas con el desarrollo de normativas, pautas e instrumentos técnicos; las asesorías orientadas a desarrollar, mejorar y promover el eficaz funcionamiento de los órganos y entes de la Administración Pública; así como en el marco de la consolidación del Sistema de Control Interno de este máximo órgano de control y el mejoramiento continuo de sus procesos, en el año 2013 ejecutó las actividades que se mencionan a continuación:

- Actualización de las Normas Generales de Auditoría de Estado.
- Elaboración del Manual para la Imposición de la multa prevista en el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
- Elaboración del Manual de Identidad Gráfica de la CGR.
- Elaboración del Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Administración, Sección de Habilitaduría.
- Actualización del Manual de Organización de la Unidad de Auditoría Interna de la CGR.
- Revisión de la base normativa y evaluación de la nueva página web de la CGR.
- Actualización del Manual de Instrucciones para los Administradores del Fondo Fijo de Caja Chica.
- Participación en el IV Evento Formativo denominado “Auditoría de Estado”, organizado por la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI).
- Evaluación del Proyecto de Normas para la Formación, Rendición y Examen de Cuenta de los Órganos del Poder Público Nacional y Estatal, elaborado a los fines de extender el ámbito de aplicación de las “Normas para la Formación, Rendición y Examen de Cuenta de los Órganos del Poder Público Nacional”.
- Elaboración del Proyecto de Resolución “Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Contralorías Municipales”.

- Revisión del Cuestionario de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.
- Opinión sobre la pertinencia de autorizar que las funciones de control fiscal interno de la Fundación para el Desarrollo Integral y Capacitación de la Contraloría del Estado Monagas (*FUNDICEM*) sean ejercidas por la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría del Estado Monagas, solicitud efectuada por la misma contraloría estatal.
- Opinión emitida sobre la posibilidad que tienen los órganos o entes contratantes de constituir fideicomisos con los aportes que en dinero efectivo son entregados por los contratistas en cumplimiento del compromiso de responsabilidad social, solicitud de aclaratoria formulada por la Directora General del Servicio Nacional de Contrataciones.
- Se emitió opinión técnica sobre los asuntos siguientes:
 - Proyecto de Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Venezolana de Alimentos La Casa, S.A. (*VENALCASA*).
 - Proyecto de Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna de Almacenadora Caracas C.A.
 - Proyecto de Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (*IDENNA*).
 - Proyecto de Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación Compañía Nacional de Música (*FCNM*).
 - Proyecto de Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación Compañía Nacional de Danzas.
 - Proyecto de Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa de Producción Social Minera Nacional C.A.
 - Proyecto de Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad Experimental de las Artes (*UNEARTE*).
 - Proyecto de Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (*CONATEL*).
 - Proyecto de Reglamento Interno de la Oficina de Auditoría Interna de la Financiadora de Primas Horizonte, S.A.
 - Proyecto de Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna de *QUIMBIOTEC* C.A.

- Proyecto de Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa CVA Azúcar, S.A.
- Proyecto de Reglamento Interno de la Oficina de Auditoría Interna de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA).
- Proyecto de Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericano Rómulo Gallegos (CELARG).
- Proyecto de Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. (INDEPABIS).
- Proyecto de Manual de Organización de la Unidad de Auditoría Interna de la Compañía General de Minería de Venezuela, C.A. (CVG MINERVEN).
- Interpretación de los artículos 36 y 44 de las Normas Generales de Auditoría de Estado, solicitada por la Contralora del municipio Cárdenas, del estado Táchira.
- La fase de seguimiento de la auditoría, de acuerdo con las Normas Generales de Auditoría de Estado, solicitada por el Contralor del municipio Barinas, del estado Barinas.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

En el transcurso del año, con miras a actualizar, mejorar y difundir productos de calidad, de los distintos grupos de trabajo, comités y comisiones de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de América Latina y el Caribe (OLACEFS), la Contraloría General de la República (CGR) respondió 6 cuestionarios en los que nos solicitan información acerca de nuestra institución, las experiencias en materia de control y participación ciudadana, entre otros.

Son de destacar los siguientes: Cuestionario de Evaluación sobre Fiscalización y Control del Instituto Mexicano de Auditoría Interna (IMAI); Cuestionario sobre Lucha contra la Corrupción y Blanqueo de Dinero del Grupo de Trabajo para la Lucha contra la Corrupción y el Blanqueo de Capitales de la INTOSAI; Cuestionario sobre Indicadores de Medición de Desempeño BID-OLACEFS; Cuestionario sobre Participación Ciudadana de la Entidad Fiscalizadora Superior de Serbia y el Centro de Política Europeo; Cuestionario sobre los Alcances del Control Institucio-

nal y la Rendición de Cuentas en América Latina del Comité Técnico de Rendición de Cuentas de la OLACEFS, y Cuestionario sobre la Estructura Nacional del Sistema de Auditoría de la EFS de Cuba.

Este año se realizaron 4 informes luego de efectuar diversos análisis, con comentarios u observaciones por parte de nuestra Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) a los siguientes proyectos de Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) y de Directrices de Buena Gobernanza de la INTOSAI (INTOSAI GOV): ISSAI X: Valor y Beneficio de las EFS en el mejoramiento de la vida del ciudadano; ISSAI 5700: Guía para la Auditoría de la Prevención de la Corrupción en los Entes Gubernamentales; ISSAI 5800: Guía para Programas de Auditoría Cooperativa entre las EFS; ISSAI 5310: Metodología de la Revisión de Seguridad del Sistema de Información.

En noviembre se participó en el XXI Congreso Internacional de la INTOSAI (INCOSAI) efectuado en Beijing, China; se asistió a la 63ª y 64ª Reuniones del Comité Directivo de la INTOSAI en representación de la OLACEFS. Dos fueron los temas analizados durante el Congreso: “La fiscalización pública y la gobernanza nacional” y “El papel de las Entidades Fiscalizadoras Superiores en salvaguardar la sostenibilidad de las políticas financieras a largo plazo”. Al finalizar, se emitió la Declaración de Beijing con la aprobación de todas las EFS participantes.

Como una estrategia de creación de capacidades en las EFS, la OLACEFS se ha centrado en la realización de una serie de auditorías coordinadas que constituyen un mecanismo importante para promover el diálogo institucional y la cooperación entre las instituciones multilaterales y la comunidad de las EFS, centrándose en áreas de interés común. La CGR se encuentra participando en dos auditorías coordinadas vinculadas con el medio ambiente, tema central para el desarrollo, con el apoyo de la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA) y la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ). La primera versa sobre los recursos hídricos y tiene por objeto examinar la gestión de los organismos gubernamentales responsables de la implementación de las políticas hídricas a nivel nacional, en razón de la importancia del agua para el proceso de desarrollo, su impacto en la salud pública y en la calidad de los ecosistemas. Para evaluar la gestión de los recursos hídricos, las EFS participantes analizaron sus políticas hídricas nacionales, el marco legal de cada país en el sector, además de realizar un levantamiento de

la información de las instituciones involucradas en la gestión y de los instrumentos utilizados. En la segunda la CGR participó en la elaboración de los términos de referencia y en las reuniones efectuadas para realizar la Auditoría Coordinada en Áreas protegidas de la Amazonia y efectuó una investigación acerca de los biomas en Venezuela.

Es de mencionar que las auditorías coordinadas en el ámbito de la OLACEFS se inician con un proceso de capacitación previa en la materia antes de abordar el trabajo de campo, en el cual participó la CGR, capacitando a 9 funcionarios en los cursos de Auditoría de Rendimiento. Su objetivo es evaluar la gestión de dichas áreas protegidas en la región amazónica involucrando a los países de la región y evaluando si cuentan con las condiciones normativas, institucionales y operativas para que las mismas cumplan sus objetivos, así como identificar buenas prácticas que contribuyan al perfeccionamiento de la gestión.

La Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia (CEPAT) de la OLACEFS, con el fin de identificar y adoptar las mejores herramientas de control de la corrupción disponibles a escala global, está conformando una caja de herramientas compuesta por las mejores prácticas de las EFS de la región bajo un formato de fichas. A tal efecto y como miembro integrante de esa Comisión, nuestra Institución preparó las fichas técnicas correspondientes al Sistema para la Declaración Jurada de Patrimonio en Formato Electrónico (DJPWEB) con sus 3 módulos: el Sistema de Registro de Órganos y Entes del Sector Público (SISROE), el Sistema de Administración del Registro de Órganos y Entes del Sector Público, módulo interno para la Administración de la Información Registrada en el SISROE y el Sistema para la Presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio en Formato Electrónico (DJPWEB), experiencia innovadora y exitosa de la Contraloría.

Adicionalmente a las actividades de las comisiones, la OLACEFS desea crear un Programa de Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública para las EFS, para lo cual ha contratado los servicios de Consultoría del Instituto Mexicano para los Auditores Internos. El propósito de este programa es definir y establecer estándares regionales para la certificación profesional internacional en control y fiscalización pública para funcionarios de las EFS miembros de OLACEFS. Como miembros del Comité de Capacitación Regional de la OLACEFS, instancia que lidera este Programa, se recibió el mismo para su evalua-

ción; luego de un análisis exhaustivo de toda la documentación, nuestra Institución envió una serie de comentarios, observaciones y propuestas para su redefinición y mejora.

Como miembro de la Organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Países del MERCOSUR y Asociados, (EFSUR), organismo autónomo, independiente y técnico, creado para fomentar el desarrollo y el perfeccionamiento de sus Instituciones miembros, mediante la promoción de acciones de cooperación técnica, científica, y cultural, en el campo del control y de la fiscalización del uso de los recursos públicos de la Región, la Contraloría venezolana participó en su reunión anual, a finales de noviembre, y se comprometió a intensificar la promoción y constitución de esta Organización como órgano supranacional de control externo público de los recursos del MERCOSUR, lo que contribuirá al fortalecimiento del bloque, proporcionándole mayor credibilidad internacional y facilitando la obtención de fondos y la cooperación con otras entidades fiscalizadoras superiores. Igualmente, se avino a realizar el análisis de las reglamentaciones existentes sobre el medio ambiente en nuestro país.

Continuando con el trabajo de la CGR como representante del Estado venezolano en el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), se difundió entre los principales órganos del Estado que forman parte del Comité de Apoyo Técnico del MESICIC (CAT), la Ley modelo sobre la Declaración de Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos de quienes desempeñan funciones públicas y la Ley modelo para facilitar e incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y proteger a sus Denunciantes y Testigos, las cuales fueron aprobadas por el Comité de Expertos del MESICIC en su Vigésima Reunión celebrada en marzo, y contaron con la anuencia de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Su propósito es servir de guía para la preparación de la legislación correspondiente. En esta reunión se revisaron y aprobaron los informes de Argentina, Costa Rica, Honduras, Perú, y Trinidad y Tobago, basados en las repuestas al Cuestionario elaborado para la Cuarta Ronda y las visitas *in situ* a esos países.

Se preparó el Informe de Avance de Venezuela para el período de diciembre 2010 a marzo de 2013 para su presentación dentro del Segundo Informe de Progreso de la implementación de la citada Convención en la región, en el que se reflejan los progresos realizados en tal sentido por

los Estados Parte y el cual fue aprobado en la Vigésima Primera Reunión realizada en Washington D.C. en septiembre. Como preparación de esta reunión se elaboraron los resúmenes ejecutivos de los informes del grupo de los países a ser evaluados y aprobados durante la misma en el marco de la Cuarta Ronda.

A principios de octubre tuvo lugar una visita *in situ* a Ecuador por parte de Venezuela y Chile, países que conforman el Subgrupo de Análisis responsable de su evaluación. Previamente, se revisó el Cuestionario completado por Ecuador y su respectivo Informe con las observaciones y comentarios pertinentes enviados por los evaluadores.

Con respecto a la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción se remitieron las respuestas de nuestro país a las observaciones y comentarios emitidos por la República de Chile y Emiratos Árabes Unidos, países examinadores de Venezuela, en relación con la Lista amplia de Verificación para la Autoevaluación completada por nosotros con la asistencia del Comité de Apoyo Técnico (CAT).

El Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Prevención de la Corrupción creado por la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas en Noviembre de 2009, para que preste asesoramiento y asistencia a la Conferencia en el cumplimiento de su mandato en materia de prevención de la corrupción, efectuó una reunión en Viena. Uno de los temas centrales fue la participación de los niños y los jóvenes en la lucha contra la corrupción para el cual se elaboró un informe. La CGR fue invitada especialmente para presentar la experiencia de la “Contraloría va a la Escuela”. En el informe remitido también figuraba el “Programa de Formación Ciudadana y Rescate de Valores”, con su Valija Didáctica, programa promovido e impulsado por el Consejo Moral Republicano con la cooperación del Ministerio del Poder Popular para la Educación.

Finalmente, durante la última semana de noviembre, como parte de la delegación de la República Bolivariana de Venezuela, la CGR asistió al Quinto período de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción que se celebró en Panamá.

CAPACITACIÓN

En materia de capacitación, la CGR fue invitada a participar en una serie de cursos durante el año. Se trata de eventos programados en el marco de las actividades previstas para este año por el Comité de Capacitación Regional (CCR) de la OLACEFS. De ellos, 9 fueron cursos virtuales, a saber: Auditoría basada en riesgo; Excel 2007 aplicado a la Auditoría; Auditoría de desempeño; Inducción sobre el marco normativo de la INTOSAI; Calidad y supervisión en el proceso de auditoría; Auditoría en los procesos de adquisiciones; Análisis de políticas públicas; Auditoría a las asociaciones público privadas; y Auditoría de obras públicas. Adicionalmente, tuvo lugar el Primer curso regional para la formación de moderadores de la herramienta de autoevaluación de la integridad (INTOSAIN) con una fase presencial de 2 días y el curso Auditoría en los procesos de adquisiciones, Herramientas de prevención y control en el enfrentamiento a la corrupción administrativa, experiencia cubana, totalmente presencial. Participaron en total en las actividades de capacitación 50 funcionarios.

Adicionalmente, en marzo, este máximo organismo de control participó en el Encuentro Regional sobre Sector Privado y Lucha contra la Corrupción cuyos temas centrales fueron la “Responsabilidad de las personas jurídicas (modelos de legislación comparada en América Latina y Europa)”, la “Protección de denunciantes de actos de corrupción (con énfasis en mecanismos de incentivo para que el sector privado y empresarial denuncie)” y “Listados y registros pro ética” celebrado en Bogotá, Colombia, y en julio asistió al Taller de capacitación sobre Marco de Medición del Desempeño de las EFS, actividad programada por la Comisión de Evaluación del Desempeño e Indicadores del Rendimiento (CEDEIR) de la OLACEFS, y coordinada por la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) en el marco del Programa OLACEFS-GIZ, en Lima, Perú.

PUBLICACIONES

La CGR se complace en mostrar como logro de este año 2013, la nueva etapa de la *Revista de Control Fiscal, Cultura de la Eficacia* como máximo órgano divulgativo de esta Institución, en donde se conjuga una tradición invaluable de 54 años de vida de la Revista de Control Fiscal con la frescura y la modernidad de la *Revista Eficaz* del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado, Fundación

“Gumersindo Torres”, COFAE. Siendo éste el nuevo concepto rector de la tradicional *Revista de Control Fiscal*, se desarrollaron durante el 2013 sus números 168 y 169.

Adicionalmente, se tradujeron al español y diagramaron los números: 1, 2, 3 y 4, correspondientes al volumen 40 (2013), de la Revista Internacional de Auditoría Gubernamental, publicación de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), como parte de la misión designada a la CGR en su condición de editora asociada y miembro del Comité Directivo de esta Organización. De igual manera, como aporte al área editorial se redactaron los artículos: Nuevas Normas Generales de Auditoría de Estado (*New General Standards on State Auditing*) para su publicación en la revista en comento en inglés, y una versión más extensa en español para ser publicada en la Edición Conmemorativa de la Revista OLACEFS en ocasión de la Asamblea General celebrada en Santiago de Chile, denominada Nuevas Normas Generales de Auditoría de Estado.

REGISTRO DE AUDITORES, CONSULTORES Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA DE CONTROL

La Contraloría General de la República (CGR), en atención a lo previsto en el parágrafo único del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual establece que los órganos de control fiscal, la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna y las máximas autoridades de los órganos del sector público, podrán ejercer sus facultades de control apoyándose en los informes, dictámenes y estudios técnicos emitidos por auditores, consultores y profesionales independientes, calificados y registrados ante la CGR, con sujeción a la normativa que al respecto dicte esta máxima Entidad Fiscalizadora; atendió, a través de la Oficina del Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en Materia de Control, 228 solicitudes de inscripción, de las cuales se otorgaron 149 certificados a personas naturales y 18 a personas jurídicas. Asimismo, se acordó negar la solicitud de inscripción a 51 personas naturales, mediante los correspondientes autos motivados debidamente notificados a los interesados, en los cuales se expone de manera pormenorizada las razones por las que no califican como auditores o profesionales independientes, dentro de las que destacan:

- El no cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 6 y 7 del Reglamento para el Registro, Calificación, Selección y Contratación de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en Materia de Control (Gaceta Oficial N° 39.729 de fecha 05-08-2011).
- No requerir inscripción en el referido Registro, en virtud de realizar actividades profesionales distintas a las reguladas en el Reglamento dictado por la CGR.
- Estar incurso en alguna de las causales previstas en el artículo 19 del mencionado Reglamento o haber prestado servicios por honorarios profesionales en materia de control con entidades y organismos del sector público sin haber estado debidamente inscritos y certificados por el Registro de Auditores llevado en este máximo órgano de control fiscal.

Y finalmente, resta un total de 10 solicitudes que se encuentran aún en proceso de análisis.

Por otra parte, se excluyó del Registro de Auditores a una persona natural por estar incurso en la causal de exclusión prevista en el numeral 1 del ya citado artículo 19 del Reglamento, y en consecuencia se le revocó el certificado electrónico de inscripción y calificación. Asimismo, fueron atendidas 129 solicitudes de opinión, de las cuales 15 fueron por escrito, 10 de manera personal y 104 vía telefónica, relacionadas con: la selección y contratación de profesionales por los órganos y entidades del sector público para apoyar sus funciones en materia de control fiscal y control interno; la inscripción de interesados en el Registro de Auditores; así como la interpretación de algunas disposiciones contenidas en el Reglamento para el Registro, Calificación, Selección y Contratación de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en Materia de Control, y en las Normas para la Ejecución de los Trabajos y Presentación de Resultados por Auditores, Consultores, Profesionales Independientes y Firmas de Auditores que presten Servicios en materia de control, entre otros.

ASUNTOS JURÍDICOS

RECURSOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA DECISIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

En defensa de la legalidad de sus actos, de los vinculados con la materia de control fiscal, u otros en los que ha sido notificada o se ha hecho parte en atención a los intereses fiscales, la Contraloría General de la República (CGR) durante el año 2013, atendió un total de 481 causas ante los diversos tribunales de la República, a través de la consignación de escritos y diligencias contentivos de: conclusiones con ocasión a la celebración de audiencias de juicios; informes escritos y orales; recursos de apelación; recursos de revisión de sentencias definitivamente firmes por inconstitucionalidad; contestación de querellas funcionariales; oposición a medidas cautelares, autos de admisión y otros actos procesales; opiniones a solicitud de los órganos jurisdiccionales, en virtud de recursos de interpretación o colisión de normas y, consideraciones generales, entre otros. Asimismo, ejerció la vigilancia y revisión de sus casos, ante todos los tribunales en el ámbito nacional y, en apoyo a otros órganos de control fiscal, en causas que cursan tanto en el Tribunal Supremo de Justicia, como en las Cortes de lo Contencioso Administrativo.

De las causas mencionadas 418 se encuentran activas, de las cuales: 180 se atienden en el Tribunal Supremo de Justicia, 8 en la Sala Constitucional y 172 en la Sala Político Administrativa; 17 en las Cortes de lo Contencioso Administrativo de las cuales: 13 en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y 4 en la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo; 149 en los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de las cuales: 141 en los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital y 8 en los Juzgados Superiores de los Contencioso Administrativo Estadales; 60 en los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario; 2 en los Tribunales Penales; 8 en los Juzgados Ejecutores de Medidas y 2 en los Tribunales en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario.

Cabe destacar que de los juicios en referencia 76 corresponden a ingresos del año 2013, siendo el resto de los mismos de años anteriores, de los cuales 68 se desglosan de la siguiente manera:

- Ingresaron 39 contra reparos tributarios formulados por este Organismo cuyo monto total asciende a Bs. 929.311,52.
- A su vez, 14 contra declaratorias de responsabilidad administrativa y/o civil emanadas de este organismo contralor, en las cuales fueron impuestas sanciones de multa por un monto total de Bs. 295.558,90, y se formularon reparos por Bs. 6.630.071,13, que sumado este último monto al total de los reparos tributarios, arroja un total general de Bs. 7.559.382,65.
- Asimismo, 6 contra Resoluciones dictadas con fundamento en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF) de las cuales 2 obedecen a la ejecución de la sanción respectiva.
- Igualmente, 2 contra decisiones vinculadas al procedimiento de verificación patrimonial sustanciado por la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio del organismo contralor, en uno de los cuales, además, se discute la legalidad de una sanción de inhabilitación para ejercer cargos públicos, impuesta de acuerdo con la Ley Contra la Corrupción.
- Uno contra una sanción de multa impuesta por la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio, en el marco de la aludida Ley Contra la Corrupción por 275 U.T.
- Del mismo modo, 5 contra actos administrativos vinculados con concursos para la designación de titulares de los órganos de control fiscal de los cuales: 2 fueron emanados por este máximo organismo contralor y 3 dictados por órganos distintos a la CGR.
- Por último, uno contra una sentencia que declara sin lugar un recurso contencioso administrativo funcional ejercido contra un oficio dictado por la CGR.

Asimismo, de los 76 ingresos aludidos, 8 corresponden a causas en las que la CGR interviene indirectamente, desglosadas de la siguiente manera:

- En 4 se realizan gestiones de vigilancia y,
- Las 4 restantes fueron citadas a los efectos de emitir su respectiva opinión:
 - Una vinculada con un recurso de colisión de leyes ejercido por el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica res-

pecto al artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico (Gaceta Oficial N° 39.573 de fecha 14-12-2010) en concordancia con los artículos 74 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, y 90 de la Ley Orgánica de Aduanas (Gacetas Oficiales N° 38.632 y 38.875, de fechas 26-02-2007 y 21-02-2008 respectivamente) consecutivamente.

- Una vinculada con un recurso de interpretación del contenido y alcance del artículo 17 de la Ley Especial del Régimen Municipal a Dos Niveles del Área Metropolitana de Caracas (Gaceta Oficial N° 39.276 de fecha 01-10-2009) así como, del artículo 6 de la Ordenanza sobre Contraloría Metropolitana de Caracas (Gaceta Oficial del Distrito Metropolitano N° 0071 de fecha 30-08-2005).
- Una relacionada con la legalidad de una Ordenanza Municipal del municipio Guásimos del estado Táchira y,
- Una correspondiente a una Decisión de Declaratoria de Responsabilidad Administrativa emanada de la Unidad de Auditoría Interna del INDEPABIS.

Del total general de 481 causas señaladas en líneas anteriores, la CGR obtuvo un total de 63 sentencias en los distintos tribunales de la República de los cuales: 26 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, 7 de la Sala Constitucional del mismo Tribunal, 7 de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, 2 de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, 5 de los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, 2 de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo Estadales y, 14 de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas, las cuales se discriminan de la siguiente manera:

- Se sentenciaron 7 vinculadas con recursos contenciosos administrativos de nulidad interpuestos contra actos administrativos dictados por este Órgano de control , en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 105 de la LOCGRSNCF, todas favorables.
- A su vez, 2 relacionadas con recursos de protección de derechos e intereses colectivos y difusos por la vulneración de derechos a la salud y a la vivienda de personas adquirentes de bienes inmuebles en un conjunto residencial y que habitan los mismos, en los cuales la CGR fue citada a los fines de emitir su opinión.

- Del mismo modo, 3 vinculadas con recursos de revisión de sentencias definitivamente firmes por inconstitucionalidad, de los cuales: 2 fueron ejercidos contra sentencias de la Sala Político Administrativa y una contra un fallo de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, todas favorables.
- Asimismo, 2 vinculadas con amparos constitucionales: uno ejercido contra un Oficio emanado de este Organismo que, supuestamente, omitió pronunciarse acerca de una petición, y uno incoado contra la Dirección General de Control de Estados y Municipios de este organismo contralor, por la presunta violación de derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa, en virtud de un Oficio vinculado con un concurso público para la designación del titular del órgano de control fiscal externo del municipio Maturín del estado Monagas, ambos favorables.
- Una relacionada con un recurso de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 137 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (Gaceta Oficial N° 37.942 de fecha 20-05-2004) en la cual la CGR fue citada a los fines de emitir su opinión.
- Una en materia de concursos públicos para la designación de los titulares de los órganos de control fiscal, que resultó favorable.
- Del mismo modo, 5 en materia funcionarial, 4 de ellas favorables y una desfavorable.
- Igualmente, 5 vinculadas con la intervención de órganos de control fiscal externo: 3 favorables, una desfavorable y una en la que se declinó la competencia en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
- A su vez, 2 en las que este organismo contralor se adhirió como Tercero Interesado, en virtud de la materia debatida: una relacionada con un concurso público para la designación del titular del órgano de control fiscal externo del municipio Tucupita del estado Delta Amacuro, la cual resultó favorable y, una vinculada con una acción de amparo constitucional interpuesta por la Contraloría del Estado Monagas contra una sentencia emanada del Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes, con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, con Sede en Maturín, actualmente, Juzgado Superior Estatal de lo Contencioso Administrativo de la

Circunscripción Judicial del estado Monagas con competencia en el estado Delta Amacuro, que fue decidido desfavorablemente.

- Adicionalmente, 6 relacionadas con declaratorias de responsabilidad administrativa, en 3 de las cuales se declaró, además, responsabilidad civil. De las 6 en referencia, 4 fueron favorables y en 2 de ellas se declinó la competencia en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
- Asimismo, 24 en materia de reparos tributarios formulados por la CGR, 17 favorables, 4 desfavorables y 3 declinatorias de competencia.
- Por último, 5 vinculadas con sanciones de multa impuestas por la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio de este Órgano, en el marco de la Ley Contra la Corrupción, todas favorables.

Los últimos 3 ítems mencionados, se detallan en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 30
DECISIONES SOBRE RECURSOS JURISDICCIONALES
INTERPUESTOS CONTRA DECLARATORIAS DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA Y MULTAS DERIVADAS DE DICHA RESPONSABILIDAD;
MULTAS IMPUESTAS CON FUNDAMENTO EN LA LEY
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y REPAROS FORMULADOS

Recursos Jurisdiccionales Interpuestos contra	DECISIONES					
	Total	Favorables		Desfavorables		Declinatorias de Competencia
		N°	Valor	N°	Valor	
Declaratoria de Responsabilidad Administrativa	6	4	N/A	0	0	2
Multas derivadas de la declaratoria de Responsabilidad Administrativa	4	4	Bs. 9.118,80	0	0	0
Multas impuestas con fundamento en la Ley Contra la Corrupción	5	5	1.656,20 U.T.	0	0	0
Reparos	24	17	Bs. 2.245.546,88 ⁽¹⁾	4	Bs. 11.995,76	3

N/A: no aplica

U.T.: Unidades Tributarias

(1) Incluye la cantidad de Bs. 1.503.225,06, por concepto de un reparo formulado en el marco de un Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades.

Por otra parte, este organismo contralor durante el año 2013 conoció 66 recursos administrativos, 12 de los cuales se interpusieron contra actos administrativos emanados de la Contralora General de la República (E); 28 se ejercieron contra decisiones dictadas por las distintas Direcciones de la CGR y, 26 recursos del total mencionado anteriormente se encuentran en estudio, todo lo cual se discrimina de la siguiente manera:

- Se conocieron 5 recursos administrativos vinculados con sanciones impuestas de conformidad con el artículo 105 de la LOGRSNCF.
- Uno relacionado con un recurso de revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
- Adicionalmente, 6 en materia funcionarial.
- De igual forma, 19 en materia de responsabilidad administrativa, determinada en atención a lo dispuesto en la Ley que rige las funciones de este organismo contralor.
- Igualmente, 6 vinculadas con sanciones de multa impuestas en el marco de la Ley Contra la Corrupción.
- Asimismo, 2 correspondientes a procedimientos de verificación patrimonial sustanciados conforme a la aludida Ley Contra la Corrupción.
- Uno en virtud de un procedimiento para la selección de contratistas llevado por este órgano de control, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas vigente.
- Finalmente, 26 que se encuentran en estudio para elaborar el respectivo proyecto de decisión: 17 interpuestos contra responsabilidades administrativas; 5 contra actos dictados en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 105 de la LOGRSNCF; uno en materia de concursos públicos para la designación de los titulares de los órganos de control fiscal; uno en materia de verificación patrimonial; uno ejercido contra una sanción de multa impuesta en el marco de la Ley Contra la Corrupción, y uno contra un acto de remoción dictado por la Contralora General de la República.

Adicionalmente, durante el presente año se llevaron a cabo actividades de apoyo a la gestión legislativa, mediante las cuales se emitió opinión sobre 2 proyectos y anteproyectos normativos, a saber:

- Proyecto de Ley de Infogobierno.
- Proyecto de Ley de Educación de los Pueblos Indígenas.